

Paco Gómez Nadal

Los muertos no hablan

Edición Bojayá, una década (2002-2012)

OTRAMÉRICA

Una edición de:

Diócesis de Quibdó

Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA)

Human Rights Everywhere (HREV)



**Licencia Creative Commons
Reconocimiento-No Comercial-Sin derivados 3.0
Internacional**



Te invitamos a distribuir y comunicar públicamente esta obra



Reconocimiento- Debe reconocer los créditos de **Los muertos no hablan, edición Bojayá, una década** a Paco Gómez Nadal.



No comercial- No puede utilizar esta obra para fines comerciales



Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Primera edición de Otramérica
(corregida, ampliada y actualizada)
Abril 2012

Título
Los muertos no hablan, Edición Bojayá, una década
(2002-2012)

Diseño de cubierta:
David Ceto (Guatemala)

Mapa:
Fidel Mingorance / Geographiando.hrev.org (HREV)

Edición y maquetación
Otramérica
Calle Bario La Torre, 60-Bajo D / 39012 Santander (España)
info@otramerica.com

ISBN:

Impreso en Colombia (2012):
Editorial Nuevo Milenio (Medellín)

*A las y los resistentes del Chocó,
a pesar del tiempo,
a pesar del cansancio,
a pesar de los silencios,
a pesar de los enemigos de la vida.*

Contenido

Presentación / Jesús Flórez López	9
Prólogo a la edición de 2002	21
«¿Cómo nos hemos podido acostumbrar a esto?»	25
Los testigos del pueblo fantasma	47
Bojayá: del terror al silencio	65
«¿Es que somos invisibles?»	75
«A Dios le toca esperar»	85
«Esto no tiene fin»	97
La vida, o la cuerda floja del sinsentido	111
Resistir en la esquina más rica de América	127
Estrellas aferradas a la selva	143
Epílogo	155
La pobreza de la paz	
Cronología parcial e inconclusa del Medio Atrato	163



The map displays the geographical layout of the Medio Atrato region, spanning parts of the departments of Chocó, Antioquia, and Córdoba. Key municipalities shown include Acandí, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Atrato, Riosucio, Pavarandó, Domingodó, Curbaradó (Carmen del Darién), Murindó, Napipi, Bajo Murri, Bellavista (Bojaya), Vigía del Fuerte, San Martín, Bellavista Nueva, San Miguel, Veracruz, Bucadó, Mandé, Urrao, Tagachi, Río Arquia, Vega, Punta de Ocaído, Río Bebará, Bebará, Amé, Tangui, El Carmen de Atrato, Quibdó, Lloró, and Bagadó. Major rivers such as the Río Opapado, Río Murri, Río Arquia, Río Vega, Río Bebará, Río Negua, Río Nunguado, Río Quito, and Río Buey are clearly marked. The map also indicates areas of inundable terrain and secondary river networks. Two inset maps are provided: one showing the location of the Medio Atrato region within the northern part of Colombia, and another providing a detailed view of the Río Arquia watershed, highlighting sub-locations like Vista del Fuerte, Boca de Chimón (Chivón), Puerto Palacios, Arquia, Vega, Punta de Ocaído, and Isla.

Presentación

Jesús Alfonso Flórez López

Como si fuera en este mismo instante, mi memoria evoca el momento en que escuché por primera vez lo que estaba pasando en Bellavista-Bojayá. Sí, me acuerdo que el 2 de mayo de 2002, me encontraba, hacia las tres de la tarde, en una de las acostumbradas sesiones de reflexión con los indígenas en el tambo de la OREWA, en Quibdó. De repente me interrumpió una llamada avisándome que algo grave estaba pasando en Bojayá, pero no se tenían certezas. De inmediato, me dirigí al Convento donde ya estaba reunido el equipo de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó. Todos estábamos preocupados porque no había información exacta. Para la época no había señal de celular en el Medio Atrato, sólo había una estación de telefonía rural de servicio público, así que se debía recurrir a la muy escasa telefonía satelital.

Así fue. Se le había dejado un teléfono satelital a un misionero para que avisara de cualquier emergencia, dado que, desde el 21 de abril de ese mismo año los paramilitares se habían tomado las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bellavista y el ambiente estaba tenso a la espera de que en cualquier momento se produjera un enfrentamiento con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A través de él supimos que la eventualidad se había tornado realidad, pero todo era confuso pues la comunicación la recibimos desde el otro lado del río Atrato, es decir, desde Vigía del Fuerte, lugar a donde estaban llegando en botes los rostros aterrorizados de quienes empezaban a desplazarse desde el poblado de Bellavista pidiendo ayuda. Mi memoria se fracciona, se vuelve a encadenar,

va y viene para traer a mi mente aquella escena dantesca que observamos los integrantes de la primera comisión humanitaria que pudimos salir de Quibdó hacia el sitio de los hechos, dos días después del combate del 2 de mayo... Llegamos en medio de combates que seguían en los alrededores de Bellavista, vimos esa capilla destrozada y los pedazos de carne humana revestidos de sangre y sin figura posible, todo un “amasijo” de pedazos de ladrillos, madera y seres humanos destrozados, en ese altar donde cayó la bomba, a través de una pipeta de gas... esa que impactó porque el deseo de las FARC por salir victoriosa en el combate no se detuvo por un instante a escuchar a quienes desde el barrio Pueblo Nuevo. Los vecinos les suplicaban que no lanzara esas pipetas, con objetivo impreciso e incontrolable, pues podrían caer en el templo católico y no a unos metros más allá, donde estaban los paramilitares, quienes se resguardaban justo tras la iglesia, la cual la habían tomado como escudo a sabiendas de estar repleta de la gente del pueblo que se había refugiado allí en medio de los combates que habían empezado desde la noche del 1 de mayo. El resultado de la explosión fue inicialmente de 119 víctimas mortales, pero que hoy se constata que fueron 79 plenamente identificadas, entre las cuales al menos la mitad eran menores de 18 años de edad.

Esa memoria es la que se quiere detener a conmemorar en estos primeros diez años de aquel “Crimen de guerra”, como lo calificó Naciones Unidas¹, que mostró

¹ Calificado así por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de mayo de 2002, textualmente en los siguientes términos: «*han infringido el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y el artículo 13 del Protocolo II Adicional a esos Convenios, (en tanto) violan especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil*».

al extremo la degradación del conflicto armado interno que padece aun Colombia. Por eso es oportuno que se pueda reeditar este texto, *Los muertos no hablan*, pues fue el primer testimonio impreso de lo ocurrido allí, más allá del hecho en sí.

¿Qué ha pasado en estos 10 años? En esta década hemos sido testigos de eventos que, articulados, constituyen un escenario de violación permanente de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población civil. Esta violación se puede sistematizar así:

El Contexto de la Guerra

En nuestra memoria se ha de tener presente que este **crimen de guerra de Bojayá** no fue un hecho aislado, sino la expresión máxima de un ataque a la población no armada, que empezó desde diciembre de 1996, fecha en la cual los paramilitares, con la abierta connivencia del Ejército, la Policía y otras instancias estatales, iniciaron la toma de la región del Bajo y Medio Atrato, configurada ésta bajo una estrategia de terror. Con el pretexto de “eliminar a la subversión” se trató de someter a la población afrodescendiente y a los pueblos indígenas a su control, lo que produjo muchas masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.

El desplazamiento forzado

Los mismos hechos del 2 de mayo de 2002 produjeron una oleada de desplazamiento masivo de toda la población sobreviviente de Bellavista, pero también de los poblados de sus alrededores, la mayoría de los cuales partieron a Quibdó, otros a Vigía del Fuerte y los

que pudieron ser fueron a las grandes ciudades como Medellín o Cali.

Al finalizar el año 2002 se inició el proceso de retorno hacia Bellavista, lo cual se fue consumando el año siguiente. No obstante, un grupo significativo de doscientas ochenta (280) familias² no encontró suficientes las condiciones de seguridad para su retorno y decidieron permanecer en calidad de desplazados en la ciudad de Quibdó, constituyendo la Asociación de Desplazados del Dos de Mayo-ADOM, quienes a la fecha aún continúan en la capital del Chocó a la espera de poder retornar.

Lamentablemente, este crimen del desplazamiento forzado no se ha detenido, pues el asedio contra las comunidades nativas ha continuado su marcha. En el año 2004, por ejemplo, fue significativo el desplazamiento de las comunidades indígenas del municipio de Bojayá asentadas en los ríos Opogadó, Napipí, Cuía. De igual manera, se desplazaron las comunidades afrodescendientes del propio río Bojayá y de los ríos Napipí, Cuia y Opogadó. Cabe resaltar que la comunidad de San Martín, ubicada en el río Atrato y perteneciente al municipio de Vigía del Fuerte se desintegró, no se pudo volver a establecer en su lugar de origen y sus miembros han quedado inmersos en otras comunidades, como por ejemplo en Puerto Conto. Más tarde se produjo el gran desplazamiento de las comunidades afrodescendientes del río Buey y un sin número de desplazamientos no masivos.

En esta década, el fenómeno del desplazamiento forzado se extendió a otras zonas del departamento de Chocó, llegando a tener en la actualidad, según datos oficiales de Acción Social, una situación de afectación de aproximadamente el 45% de la población total del

² Dato suministrado por ADOM el 25 de enero de 2012.

departamento, lo cual ha traído consigo una inestabilidad en el control del territorio por parte de la población nativa y por consiguiente una profundización de la crisis humanitaria que se ha tornado insuperable.

Fragmentación de comunidades

El desplazamiento forzado y la presión armada ha traído consigo una división de comunidades que han padecido el desplazamiento armado, lo cual ha repercutido en los espacios organizativos, como fue el hecho de la división del cabildo indígena de Bojayá, que terminó fraccionado en tres partes.

Otra manifestación de varias fragmentaciones ha sido la disputa por acceder a los recursos que llegaron bien sea por la intervención directa del Estado o por la actuación de la cooperación internacional.

Consolidación del paramilitarismo y despojo de tierras

Coincide el hecho del crimen de guerra de Bojayá con la ruptura de los diálogos de paz que el gobierno de Andrés Pastrana sostenía con la guerrilla de las FARC, lo cual fue aprovechado por dicho gobierno para que la Unión Europea incluyera a las FARC en la lista de las organizaciones terroristas. Sin embargo, en ese mismo año 2002 asume la presidencia Alvaro Uribe Vélez, quien hizo cambiar la Constitución Nacional para hacerse reelegir, por lo cual su gobierno llegó hasta el año 2010.

En ese período se abrió el llamado proceso de “desmovilización de los paramilitares”. En general, pero particularmente en este departamento de Chocó, fue toda una farsa, pues si bien es cierto que el *modus operandis* tuvo cambios, también lo es, y con mucha fuerza, que las

estructuras armadas permanecieron intactas mediante la estrategia de cambio de nombres y relevo de tropas, de tal manera que en los ríos San Juan, Baudó y Alto Atrato se rebautizaron “Rastrojos”, y en el Bajo y Medio Atrato aparecieron las llamadas *Autodefensas Gaitanistas*, hoy autodenominados *Los Urabeños*, herederos directos del Bloque Elmer Cárdenas-BEC, quien fue el que se tomó a Bellavista doce días antes del combate con las FARC que desencadenó la masacre del 2 de mayo.

A esta reconversión del paramilitarismo, ahora renombrado por el gobierno como “bandas emergentes o bandas criminales” (Bacrim) emulando la nominación de un producto químico que tal vez sirva de metáfora de algún compuesto destructor de seres humanos, se unió entonces la legalización del despojo de tierras, como se ejemplifica enseguida de los hechos de Bojayá, en el municipio de Carmen de Darién o en los ríos de Curbaradó y Jiguamiandó, lugares donde se implantó a sangre y fuego el cultivo intensivo de la llamada palma aceitera o africana.

Despojo que se ha podido documentar antes las instancias judiciales y administrativas, pero cuya restitución aún no se ha podido hacer efectiva.

Fortalecimiento del modelo extractivista y narcotráfico

La inveterada vocación, desde tiempo colonial, asignada al departamento de Chocó de ser despensa natural para la extracción de recursos naturales, ha tomado fuerza en esta década. Ese es el origen de la disputa de los actores armados, tanto paramilitares como guerrilla, por controlar la extracción de la madera. Este hecho se ejemplifica con la penetración de decenas de motoserristas en el Bajo Atrato por influencia del

paramilitarismo, y la retaliación que hizo las FARC mediante la comisión de masacres en este último quinquenio.

Otro sector en auge ha sido el de la extracción de minerales, ya sea por la proliferación de títulos mineros o por la penetración de empresas sin ninguna autorización legal. En este esquema son los armados los que ejercen el control, ya sea mediante el cobro de los llamados “impuestos de guerra” o “vacunas”, como lo hacen las guerrillas, o por acción directa como empresarios directos o mediante testaferros, como lo hacen los paramilitares.

En este contexto, el municipio de Bojayá ha quedado preso del incremento en la extracción del recurso forestal y varias de sus áreas territoriales han visto florecer los cultivos de uso ilícito, como lo ha sido el conjunto del departamento de Chocó, donde ha quedado en evidencia que los procesos de erradicación de tales cultivos mediante las fumigaciones aéreas en la región de la Amazonía ha ocasionado una migración de los mismos hacia la región del Pacífico. Con estos cultivos se han trasladado también todos los problemas que ello conlleva, donde lo más preocupante es la penetración de la mentalidad mafiosa, en la que todo se vale para conseguir el dinero rápido y fácil.

La verdad y la justicia desaparecidas

El lamentable crimen de guerra de Bojayá sigue siendo paradigmático respecto a la impunidad, pues a pesar de las denuncias de diversos organismos oficiales -como en los casos de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría-, así como de instancias de la sociedad civil -como la Diócesis de Quibdó, las Organizaciones Étnico Territoriales, coadyuvadas por instancias internacionales-, donde se evidencia la responsabilidad tripartita, por

acción o por omisión, de parte del Estado colombiano, de los paramilitares y la guerrilla, sólo hay condenas judiciales para miembros de las FARC. La Fiscalía vinculó a este proceso a 36 miembros de las FARC, incluyendo a la máxima dirigencia del Secretariado, pero sólo se han capturado a ocho (8) personas³. Sin embargo, no se ha judicializado a ningún paramilitar y no se han iniciado procesos de responsabilidad penal contra los miembros de la Fuerza Pública que fueron permisivos y facilitaron que este crimen se cometiera, además de su evidente participación directa al servir de auxiliares de los paramilitares y capturar a ninguno de ellos. Sólo un oficial del Ejército fue suspendido del cargo por 90 días sin derecho a remuneración, por lo demás la Procuraduría ha eximido de responsabilidad a la alta comandancia del Ejército y de la Armada Nacional.

La verdad de los hechos de este crimen de guerra es muy clara en cuanto a responsabilidades, no obstante aun permanece desaparecida oficialmente en los procesos judiciales, como se mencionó antes.

No obstante, la misma comunidad, en tanto víctima, ha querido dejar manifiesta su propia versión de los hechos en una variedad de expresiones artísticas (canciones, danzas, obras teatrales y narraciones inéditas); así mismo, sus acompañantes, como la Diócesis de Quibdó, con su red de apoyo de cooperación nacional e internacional, han producido informes que dan testimonio de los hechos; de igual manera, la academia se ha vinculado con diversos apoyos y trabajos de tesis de varios estudiantes que han servido de soporte documental a este lamentable acontecimiento.

³ De acuerdo con el informe “Bojayá, la guerra sin límites”, producido por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Editorial Taurus Pensamiento. Bogotá, 2010. Pág 214.

En este proceso respecto a la verdad se han producido informes de carácter oficial que han consignado los hechos. El primero de ellos, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos⁴; hay que mencionar también los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría. El último de estos reportes lo constituye el informe producido y publicado en el año 2010 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, titulado “Bojayá, la guerra sin límites”⁵. A pesar de este trabajo de memoria, no se ha hecho lo suficientemente explícito que a consecuencia del impacto de la pipeta bomba y de los efectos generales de este combate en medio de la población civil varias personas han resultado con cáncer (al menos cinco personas han muerto por esta razón) y hay otras dolencias relacionadas con las secuelas de los hechos, por lo que las víctimas son mucho más que los muertos en el momento de la explosión.

Reparación aún esperada

El Estado Colombiano decidió que su medida de reparación fuera el traslado del asentamiento urbano de Bellavista, pues el crimen de guerra produjo simultáneamente la destrucción material de muchas viviendas y establecimientos, como el templo católico, el hospital y la escuela, pero no quiso reconstruir el pueblo en el mismo lugar aduciendo imposibilidad de invertir en lugares de alta vulnerabilidad por la inundación periódica que produce el desbordamiento del río Atrato. Esta medida del Gobierno Nacional confunde así el derecho a la reparación de las víctimas

4 www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/bojaya.pdf

5 www.memoriahistorica-cnrr.org.co/s-informes/informe-9/

de un crimen de guerra con las obras normales de inversión que debe hacer en las comunidades como parte de su obligación de gestión, y con más razón en este departamento de Chocó y en la región del Pacífico en general, en donde es altamente notoria la marginación secular.

Esta reconstrucción y reubicación del pueblo de Bellavista tuvo muchas dificultades, empezando porque no fue efectivamente un proceso concertado con el conjunto de las víctimas, además de retrasos de la obra y sus correspondientes oscuridades en la administración de los recursos allí invertidos. Los desastres fueron tantos que los pobladores decidieron llamar al nuevo Bellavista “Severá”, expresando así sus dudas ante las promesas. Finalmente, se concluyó la obra y en diciembre de 2008 se empezó su ocupación y la destrucción del antiguo poblado.

Hoy, diez años después de la masacre, los habitantes siguen descontentos con este ‘nuevo’ pueblo, pues la arquitectura de las viviendas va en contravía de los usos tradicionales, además de las deficiencias en su construcción, así como los problemas en el funcionamiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, por no mencionar el incumplimiento total en la instalación de la energía eléctrica permanente. Pero, ante todo se ha dado una ruptura sin igual con las costumbres en el uso y relación con el río al ubicar la nueva comunidad lejos de éste. Tampoco se han hecho propuestas eficaces de empleo, lo que ha traído la aparición de robos, otrora inusual.

Los familiares de quienes fueron masacrados han recibido parte de la llamada “reparación administrativa”, lo que se ha traducido en un dinero por cada muerto,

o por los daños de los heridos, concretamente a 88 familias les han entregado un total de 1.000 millones de pesos, aproximadamente a 500.000 dólares⁶, sin embargo, aun falta un camino por recorrer para que se avance en el desarrollo de la reparación integral que tenga en cuenta el conjunto de afectaciones o daños morales, materiales, culturales, individuales y colectivos, en tanto que allí se laceró la cohesión interna de una colectividad con idéntica étnica.

Una década después

Frente a este crimen de guerra la comunidad de Bellavista y el conjunto de las comunidades afrodescendientes e indígenas que sufrieron el impacto han sabido mantener viva la esperanza, una esperanza que ha sido alimentada y fortalecida con la solidaridad que ha sabido hacerse presente de parte de los acompañantes locales, de muchos sectores de la sociedad nacional, así como de grupos, asociaciones e instituciones internacionales.

Una década después de esta masacre no podemos dejar que todo caiga en el olvido, como ha quedado tanta tragedia en la historia, en particular en la de Colombia; por eso, hacer memoria de este crimen de guerra cometido en Bellavista (Bojayá), es, ante todo, una renovación de compromiso con este pueblo y, en él, con todo el pueblo afrodescendiente, heredero de una prolongada exclusión, hoy con rostro de nueva expresión de genocidio y etnocidio; nuestra solidaridad igualmente con los pueblos indígenas, quienes también en esta década han sido declarado por la Corte Constitucional como “pueblos en riesgo de extinción”,

6 De acuerdo con el informe “Bojayá, la guerra sin límites”, producido por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Editorial Taurus Pensamiento. Bogotá, 2010. Pág 281.

Los muertos no hablan

a causa del conflicto armado. Esta solidaridad debe traducirse en acciones concretas que conduzca a avanzar en la aplicación de la justicia y la reparación, como paso inaplazable hacia la construcción de la paz.

Prólogo a la edición de 2002⁷

Cuando la memoria de la muerte se diluye, el tormento de los vivos arrecia. Mientras el impacto de la muerte permanece en la conciencia colectiva, los vivos tienen posibilidad de hacerse notar. En Colombia, ese principio se cumple a la perfección. En las redacciones periodísticas se conoce bien el precio de la muerte y el día a día es un mercado de sucesos (léase, muertos) en el que se pesa el valor y el impacto que cada hecho (cadáver) tiene en el lector o espectador. Es una de esas patéticas contradicciones que asedian al ser humano. El ciudadano común anda quejándose todo el día de la sobredosis de sangre que tiene que soportar en su aparato de televisión o en las páginas de los diarios, pero al mismo tiempo no puede desprenderse de esa adicción al sufrimiento ajeno. (¡Qué diferente es cuando se trata del muerto propio!)

Los seres humanos tenemos cierta fascinación por la muerte que la vida no es capaz de despertar. Pero... ¿dónde están los vivos?, ¿son invisibles?, ¿estar vivo es sólo no estar muerto?, ¿es lo mismo morir que ser muerto? Este libro habla de vivos. Pido perdón de antemano. Se trata de vivos que no sólo están vivos porque no han muerto, sino porque pelean cotidianamente contra la muerte más sórdida, aquella que cuando llega no da razones, aunque musite argumentos que van en contra de la lógica de la propia muerte.

Como periodistas, siempre vamos a determinados lugares del planeta cuando las fronteras del olvido rezuman el olor a muerte. Y siempre, cuando se sale

⁷ Nota del autor: Prólogo escrito en 2002 que, considero, sigue explicando el estado emocional y las reflexiones que provocaron la escritura de este libro.

de la zona de conflicto, se tiene la sensación de haber cometido un delito contra el alma de los vivos, de ser meros sepultureros. Siempre queda, eso es cierto, el leve bálsamo de saber que si no contamos la muerte, estaremos alimentándola, dejando que más vivos caigan.

Este libro es una venganza contra la muerte y contra el periodismo. Está repleto de ambas cosas, pero son los vivos los protagonistas. Los muertos no hablan, aunque haya fuentes oficiales, actores armados y armados actuando que se empeñen en ser sus voceros. Los muertos no hablan y a los vivos los llamamos con nuestro olvido.

No debe haber una solución a esta maldición humana, porque la han buscado centenares de estupendos cronistas a lo largo de la historia, pero dejar de buscarla es como reconocer que ni usted ni yo somos lo suficientemente humanos. Los periodistas nos refugiamos en la famosa frase de Martha Gellhorn, una de las mejores reporteras del siglo XX y compañera de Ernest Hemingway: «Arrojo piedras sobre un charco y no puedo saber qué efecto producen en él, si es que producen alguno, pero al menos tiro piedras.»

Este libro, pues, es una piedra. Se centra en ciudadanos y ciudadanas colombianos, de una zona determinada del país: el Chocó. No van a encontrar biografías, sino voces. Es un espacio para que los vivos puedan existir públicamente. La elección del lugar y de los personajes tiene una lógica. El Chocó es, probablemente, una de las zonas más olvidadas y ricas de Colombia y de Sudamérica. Habitado por minorías (pueblos afrodescendientes e indígenas), se enfrenta a una guerra reciente para la región, aunque anciana para el país. La virulencia del conflicto en ese departamento y la ausencia de cobertura

mediática, excepto en casos dramáticos, hacen que el Chocó no exista. Sólo son visibles sus muertos.

Elijo esta región, pero creo que es una historia sobre humanos que podrían estar en otras partes de Latinoamérica, de África o Asia. Cuando iba a iniciar la última fase del trabajo de campo para este texto tenía serias dudas sobre su viabilidad y sobre mi capacidad para enfrentarlo. Todas esas sombras se dispararon en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Esperando un vuelo para Quibdó, la capital del departamento del Chocó, me encontré con Cristian, un niño de cinco años que pertenece a las comunidades negras que pueblan las riveras del río Atrato, el más caudaloso de América. Él es uno de los supervivientes de los sucesos ocurridos en la pequeña localidad de Bellavista que el 2 de mayo de 2002 dejaron 119 civiles muertos⁸ después de que, en medio del combate con paramilitares, la guerrilla lanzara un cilindro de gas acondicionado como misil casero y errara el tiro.

Cristian perdió a tres primos y a varios amigos. A sus cinco años no era la primera vez que se salvaba. En noviembre de 1999, el menor iba en una panga que sufrió un atentado paramilitar cerca de Quibdó, en el cual murieron el sacerdote colombiano Jorge Luis Mazo y el cooperante vasco Iñigo Egiluz Tellería. La mujer que cuida de Cristian me informó que el niño ya vive en Medellín y que no volverá a bajar a su zona de origen. «Le han devuelto la vida dos veces, no hay que tentar otra vez a la muerte.» Así que por Cristian, por los miles de civiles atrapados en la violencia, el abandono y el racismo secular, y por la memoria, va esta piedra.

⁸ El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación determinó que el número de víctimas mortales de la conocida como masacre de Bojayá fue de 79, más otras 8 que murieron en días posteriores como consecuencia de las heridas. El dato aplica para todo el texto.

«¿Cómo nos hemos podido acostumbrar a esto?»

Alguna vez, en mis crónicas de viaje, denuncié la desesperanza de un pueblo que sobrevive en condiciones inhumanas, degradantes para una sociedad civilizadora que ostenta títulos democráticos y cristianos. Pero nadie, ni el pueblo, ni el Estado, ni los políticos reaccionaron ante estos testimonios. No era más que literatura inofensiva, aventuras de la imaginación, Gonzalo que es loco... Nos hemos oxidado por la indiferencia, el egoísmo y el desprecio. Nuestros sentimientos sólo despiertan de su letargo culpable cuando son sacudidos por el terror...

Gonzalo Arango, "Chocó en llamas", 1966

Me dirijo a Quibdó. En las últimas cuatro horas es la tercera vez que subo al pequeño avión para ver si la lluvia tropical perdona al enclenque aeropuerto de la capital del Chocó y resucitan los maltrechos equipos de comunicación que con cuatro gotas de agua entran en huelga hasta nueva orden. Junto a mí va sentada una señora de mediana edad; tiene esa energía de los cuerpos enjutos y siento que quiere trabar conversación.

- Y usted... ¿va a Quibdó? -me pregunta con un tono sarcástico.
- Sí señora. -La mujer se me queda mirando con los ojos abiertos y un gesto de incredulidad que logra sonrojarme-. ¿Le sorprende? -pregunto ingenuo.
- No, no... es que sólo hay dos razones por las que puede ir.

- ¿Sí? ¿Cuáles?
- Pues mire... con todo el respeto...: o usted es muy arriesgado o es sospechoso.

La distancia se rompe a pesar de lo directo del golpe. Cuando viajo a una zona de Colombia como ésta ya sé que tengo que dar muchas explicaciones. Bueno, o no darlas y dejar que la gente piense que soy sacerdote, porque la otra opción -la del «gringo»- no es favorable. A Quibdó llega poca gente que no sea de la región y cada vez se viaja menos por la carretera que la une con Medellín, campo de tiro de unos y otros, agujero negro del secuestro, muelle que desplaza civiles desde hace años.

El aire es la única rendija para adentrarse en este hueco que ya se anuncia complejo y abandonado desde el aeropuerto⁹. ¿He escrito aeropuerto? Digamos que se parece a uno porque tiene un bar, dos tiendas y un detector de metales a la entrada, pero la pintura está arañada por la humedad, la cinta transportadora de equipaje se ha transformado en un acumulador de tierra estático. Ni siquiera las matas plantadas entre la pista y el edificio crecen lindas, algo casi imposible en una región donde si hay algo vivo y bello es la naturaleza. Cuando llega el equipaje, los trabajadores dejan el carro metálico oxidado a la suerte del enjambre de pasajeros. Es como una primera lección: en estas tierras cada uno se busca la vida, nadie te va ayudar más de lo necesario.

Ya unavez con el pie en el espeso Chocó, especialmente en su capital, todo son explicaciones. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (un servicio que puede ser muy poco cortés), me pregunta, me roba mi pirámide invertida y me hace el ‘ repaso por las cinco «W». Sería

⁹ El aeropuerto de Quibdó, como otros seis de Antioquia y del Urabá, fue concesionado en 2008 al consorcio chino-colombiano Airplan (de la cual la china SAH tiene la mayoría). La reforma ha sido total con una inversión cercana a los 10 millones de dólares. ¿A cambio...?

ingenuo pensar que el DAS va a ser menos suspicaz que mi compañera casual de viaje. Todo es sospecha.

Lo cierto es que nada bueno han traído a esta parte del mundo los «paisas», modo como se denomina popularmente en Colombia a los naturales del departamento de Antioquia y que en el Chocó sirve para calificar a todo blanco o mestizo que aparezca en el horizonte. No es extraño, la mayoría de negocios de la ciudad y de la región está en manos de antioqueños, identificados muchos de ellos por el sombrero y la ruana, como si no hubieran salido de La Ceja. Son los propietarios de un gran porcentaje de los 1.100 tristes comercios y las 57 empresas registradas legalmente en todo el departamento, aunque los paisas sólo representen el cuatro por ciento del total de su golpeada población.

El Chocó es una especie de laboratorio del olvido. Es de los primeros trozos de tierra que pisaron los conquistadores en lo que actualmente es Colombia -de hecho, Rodrigo de Bastidas llegó al golfo de Urabá en 1500 y el propio Cristóbal Colón conoció Acandí en 1502-, y parece que el tiempo, o mejor, las costumbres, se hubieran congelado.

La agreste naturaleza, arcón de las riquezas ambicionadas desde el siglo XVI, ha sido el principal obstáculo para quienes han buscado sacar del Chocó todo lo posible. La naturaleza en primera instancia, porque ahora son los grupos armados de extrema izquierda los que incomodan en zonas clave de extracción de minerales, carburantes o maderas.

Cuando se sobrevuela el río Atrato, la espina dorsal de la región, y sus afluentes, y se ve la tupida selva que mojan sus aguas, y los millones de hectáreas semidespobladas, se comprende que el tesoro es grande, un Dorado incalculable que las poblaciones negras e indígenas se

empeñan en marcar como «territorio ancestral», algo que, como diría cualquier paisa importado, «frena el desarrollo».

Asegura Gonzalo Arango, el irreverente nadaísta antioqueño, que después de la historia de abandono, explotación y miseria del Chocó «sólo queda el río, testigo infiel de los hombres, en su belleza cambiante y eterna; presente y sin memoria». El Atrato y la miseria son las únicas cosas que han perdurado sin modificación. El Atrato magnético, peligroso, cautivador. Ni siquiera el Amazonas tiene el caudal de este río café con leche desconocido para la inmensa mayoría de los colombianos, de este hilo de agua que desemboca en el Atlántico después de coquetear con el Pacífico durante cientos de kilómetros en los que lo mira de ladito.

El catálogo de riquezas naturales que persiste en las riveras del río es delirante. En este bosque húmedo tropical se agolpan cuatrocientas especies vegetales y ochocientas de vertebrados por hectárea en una despensa de la biodiversidad demasiado jugosa. Es, por tanto, una especie de gran farmacia abierta a las compañías de la investigación genética y farmacológica, un supermercado de madera de primera calidad, una alcancía llena de oro, plata, platino, bauxita, cobalto radiactivo, estaño, cromo, níquel y petróleo... Esta costa pacífica colombiana aporta al país el 69% de la pesca marina (eso representa sólo unas 14 mil toneladas al año, cuando el potencial anual es de entre 120 mil y 160 mil toneladas); 43% de la madera aserrada, con un volumen de bosque de 1.998 millones de metros cúbicos de madera y sólo 17% del territorio como reserva forestal; 82% del platino del país se extrae en esta región, así como 18% del oro y 14% de la plata.

Todo esto en 46.500 kilómetros cuadrados habitados apenas por 543 mil personas (según el último censo, de 1993), apelotonadas su mayoría, unas 350 mil, en los núcleos urbanos, si es que se pueden llamar urbanos a esos lugares sacados de una novela de conquistadores, buscavidas, cimarrones y supervivientes del límite.

Caminar por las calles de Quibdó, capital del departamento y principal «ciudad» de la región, es repasar la galería de olores de la descomposición. Descomposición de la fruta y el pescado que se venden en medio del polvazal, descomposición del agua encharcada en los mil y un baches rodeados de un poco de pavimento en lo que algún día fueron calles, descomposición humana roída por los hongos y el aguacero permanente que nubla la ciudad.

La contradicción es norma en esta ciudad. En los laterales de los pequeños autobuses que la recorren se puede atinar a leer entre el barro «Transprogreso Chocó», la basura se acumula junto a los carteles que lo prohíben de las Empresas Públicas de Quibdó (EPQ), los niños caminan descalzos y sucios bajo el inmenso rótulo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cafetería El Recuerdo parece olvidada con sus tres ocupantes incluidos, y la sede del Banco de la República busca una república a la que adherirse. Para un urbanita, como yo, no deja de ser un viaje al límite de la pesadilla. Para un habitante de Quibdó es una pesadilla de la que nunca hay viaje de salida.

No hablo de pesadilla de manera gratuita. Sólo 30 mil de los 110 mil pobladores oficiales de Quibdó (aunque extraoficialmente se habla de unos 220 mil) tienen agua potable; 15 mil son los afortunados que gozan de algo tan sofisticado como el servicio de alcantarillado; 29 mil tienen energía eléctrica, pero, aunque pagan

puntualmente su factura, ven cortado el servicio cuatro horas al día por culpa de la deuda multimillonaria que tiene la Electrificadora del Chocó con las empresas generadoras...¹⁰ «¿Cómo nos hemos podido acostumbrar a esto?», me pregunta una joven profesional recién egresada con un futuro dudoso en este desierto húmedo. Ella no tiene respuesta. Yo menos.

Muchos de los chocoanos con los que se habla en algún cafetín insinúan que no es casualidad tanta pobreza en un pueblo de negros (casi el 88% de la población). De los indígenas (8% de la población, que domina 24% del total del territorio) ya hablaré más tarde; ellos ni siquiera están en las estadísticas de la miseria. Del total de humanos que habitan estas selvas y «ciudades-selvas», 60,7% tienen las necesidades básicas insatisfechas, según el propio gobierno colombiano. Digamos que si las cifras de un país como éste ya son deprimentes -con 11 millones de personas por debajo del límite de la indigencia (indicador calculado en alguna elegante oficina de Washington), 59% de pobres y el 53% de la tierra en manos del 1,08% de los propietarios-, las del Chocó son indignantes.

Lo incomprensible, como siempre en Colombia, está hiperdiagnosticado. La propia Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), entidad oficial, hace este análisis de las razones del atraso en su Plan de Desarrollo 2000-2005:

- Deterioro de la base natural productiva por inadecuado uso de los recursos naturales, mediante sistemas extractivos insostenibles, escasa agregación

10 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señalaba que el 79.19% de la población chocoana tenía sus Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a 31 de junio de 2010. En la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Colombia de 2010 se consigna cómo el Chocó es uno de los departamentos donde el Índice de Calidad de Vida (ICV) ha retrocedido entre 2002 y 2006, pasando del 56,85% de la población que lograba una calidad de vida 'aceptable' a solo un 54,91 (cuando la media colombiana es del 79,45% para 2006).

Los muertos no hablan

de valor y fuga de los capitales generados, los cuales se invierten en otras regiones.

- Escaso desarrollo científico-tecnológico aplicado a la biodiversidad regional y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Intranquilidad social, política, económica y cultural derivada del conflicto armado y del desplazamiento de la población campesina, afrocolombiana e indígena, la marginalización creciente y el progresivo empobrecimiento de la población, especialmente en la periferia de los centros urbanos.
- Pérdida de la capacidad alimentaria de los sistemas rurales tradicionales de producción.
- Incomunicación intra y extrarregional.
- Escasa integración y planificación regional para el aprovechamiento de la oferta ambiental, la producción y el desarrollo social.
- Falta de electrificación.
- Inexistencia de planificación del desarrollo urbano.
- Altos índices de desempleo.
- Escasa capacidad de los entes territoriales para generar sus propios recursos.
- Falta de una ética para el manejo de lo público y el inconformismo regional que ello provoca.
- Megaproyectos que no tienen en cuenta el deterioro de los ecosistemas y las culturas de los grupos étnicos.

Caminar por las calles de Quibdó es ver a muchas familias sentadas frente a la puerta de las casas que no son casas, esperando, mirando. Muchas veces ni siquiera hablan. Sólo esperan. En el puerto que no es

puerto también hay mucha gente esperando. Si esperan un trabajo, una ayuda o un transporte para llegar a su comunidad en el río, sólo lo saben ellos. Pero son mercado para una legión de vendedores ambulantes de paletas y refrescos. También son el público para Efraín, un joven que ronda los 30 años y que ante lo poco rentable de la espera decidió montar su peluquería para hombres en el borde de una banca. Ahí reposan tres botellas de licor rellenas de lociones, y exhibe, como si de un museo se tratara, las cuchillas y artilugios del oficio. Sólo cobra 2.500 pesos por corte (aproximadamente un dólar), «porque la gente está igual o peor que uno», y, aunque no sea un gran negocio, «da pa' comer».

Siguiendo el curso del río se llega a la plaza de mercado, donde decidir si el olor es tropical o fétido es difícil. La administración municipal le pone un chubasquero de cemento a la plaza como para evitar que se termine de caer, aunque justo enfrente se esté levantando un imponente y moderno edificio de la Fiscalía que, a falta de centros comerciales, se convertirá en «símbolo del desarrollo». Ahí mismo, entre la plaza y el nuevo *mall* de la Fiscalía se llevaron a la fuerza al gobernador indígena Alberto Sabúgara Velásquez. Apareció muerto al día siguiente en el basurero de Quibdó.

Caminar por las calles de Quibdó es comprender que la moda de los derechos humanos llegó tarde, que no sólo se puede hablar de ellos cuando llega el conflicto armado, sino que antes, antes del tropiezo con las armas, estas gentes ya veían violados casi todos los derechos consagrados en la Carta Universal (que finiquita el derecho a la vida en su artículo tercero) y en la Constitución Política de 1991 que rige, en la más pura de las teorías, los destinos de Colombia.

Si dejamos Quibdó y nos internamos en el río, la lista de agravios es más escandalosa. Pequeñas comunidades de entre ochenta y doscientas personas salpican las orillas del río Atrato. En realidad, viven dentro del río, porque esos caseríos pasan la mayor parte del año inundados. Las letrinas y la caseta del combustible, vacía desde hace tantos meses, se han quedado, literalmente, en medio del río. Las champas (pequeñas y rústicas embarcaciones cuyo misterio consiste en horadar la mitad de un tronco y echarlo a flotar) son el medio de transporte interno y, por supuesto, lujos como la energía eléctrica o el agua potable son quimeras.

Ésos no eran problemas graves para estas comunidades. Hasta el año 1996 convivían con la pobreza como un urbanita hace el amor con su televisor. Es decir, era la cotidianidad. Hasta ese momento, el Atrato también era una autopista de comercio, de compradores de banano y madera, de intercambio y de diversión (deberían ver las *discomóviles* fluviales). El dinero se movía y las personas también. Ese movimiento generó mestizaje de culturas y de acentos; prueba de ello es el magnífico sexteto de Murindó, compuesto por ancianos desdentados que cantan melodías a medio camino entre el son cubano, la chirimía y los ritmos africanos. No era un mundo ideal, sólo era habitual.

Desde que comerciantes portugueses y holandeses trajeran a estas tierras a miles de esclavos procedentes de Sudán Occidental, Benín, Guinea y Costa de Oro, la vida ha corrido por estos caminos a caballo entre la explotación y la supervivencia. Fueron esclavos buscados en las cercanías de las minas africanas para que pudieran resistir la rudeza del trabajo remunerado con laceración en las minas del Chocó.

Los asentamientos mineros de los conquistadores españoles comenzaron a resquebrajarse en 1688 con la primera revuelta negra en las explotaciones del río Neguá, y estos levantamientos se mantuvieron hasta la época de la Independencia (todavía en 1825 los esclavos negros del río San Juan tuvieron que «empalencarse» para vivir). «De alguna manera el esclavismo no se ha abolido aún; ahora tiene otras formas, otros nombres, pero el negro sigue sin ser dueño de su destino», explica un líder de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), que agrupa a la mayoría de comunidades negras de la región.

Luego que arrancan al negro

Del África, madre tierra

Aquí lo traen de esclavo

A labrar ríos y selvas

.....

La educación nos dentró

El mal del aculturamiento,

Por eso es que algunos negros

Siguieron el blanqueamiento...

Así dice un alabao que compuso y canta María Mercedes Porras, una anciana «alabadora» del Atrato. El alabao, esa forma sincrética de lamento que funde las formas religiosas africanas con el catolicismo, canta tradicionalmente a entidades espirituales africanas como el Muntu (unidad entre vivos y muertos), al Ikú (orishá que viene en busca de los difuntos) o al Kulonda (el ancestro), pero la realidad de la región ha hecho que

se remita también a la situación actual, a la crisis de vida con la que pelean los chocoanos.

...Queremos vivir en paz
Como veníamos viviendo,
Que nos respeten la vida
Al pueblo indígena y negro.
La cultura en el Chocó
Permitió conservar
Lo que buscan hoy en día
Llamado biodiversidad.
La riqueza del territorio
Y su gran naturaleza
Por nosotros defenderla
Nos acaban con violencia...

De recordar la esclavitud y los palenques han pasado a denunciar a los grupos armados o la corrupción imperante en la región. La población suele echar la culpa de la mala gestión y la corrupción que mancha a los políticos chocoanos a su «blanquización». Mauricio Pardo, en el libro *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia* (CES/Universidad Nacional/ICANH, 2001), asegura, refiriéndose al Chocó, que «las actitudes de las clases medias y de la mayoría de los cuadros intelectuales negros se orientan a ser incluidos en los circuitos políticos, sociales y económicos dominantes del país. Esta situación es importante para entender cómo las organizaciones étnicas y sus promotores originales, los equipos misioneros católicos, no encontraron eco entre las clases medias urbanas de la región».

Los robos de cheques, los «juegos» con las licencias ambientales (que, según la Contraloría Departamental, deja en el caso de las explotaciones madereras un «beneficio» para las arcas públicas del Chocó de 5,7 millones de pesos -unos 2.400 dólares- al año) o el desvío en los últimos años de 1.500 millones de pesos (unos 640 mil dólares) destinados a la salud terminan de enterrar las posibilidades de progreso de una región que cuenta con el mayor índice de mortalidad infantil de Colombia (de cada mil niños que nacen, 112 mueren), uno de los niveles más bajos de escolarización (apenas 42%) y uno de los más altos de analfabetismo (27%, cuando la media nacional es de 8%). En la región todavía es posible que la gente muera de paludismo, de sarampión o de hepatitis. O de una miserable diarrea¹¹.

Teóricamente se han dado avances legales y organizativos que han mejorado la situación. La organización de las comunidades negras alrededor de la ACIA y de los indígenas en la Orewa (Organización Regional Embera y Wounaan del Chocó) ha permitido que las poblaciones tengan interlocutores y obliga ahora a instituciones públicas, como el Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) o Codechocó, a consultar antes de decidir, al menos cuando de ellas depende la decisión. Ambas organizaciones, junto a otras del bajo y alto Atrato, estuvieron presentes en la Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, ese libro mágico en el que las mil y una noches se chocan de frente con la realidad de un país sumido en un régimen cuasi feudal. Orewa y ACIA fueron, de

11 En 2007 estremeció al país la muerte de 17 niños y niñas muertos por desnutrición. En febrero de 2012 se denunció la muerte de 22 menores por enfermedades no mortales a causa de las inundaciones y el aislamiento. Esta situación se repite habitualmente. A todo esto hay que sumar la brutal corrupción que impera en el departamento del Chocó. En 2007, el departamento fue intervenido por el Gobierno Nacional y se dan permanentes escándalos relacionados con la corrupción y los negocios ilícitos. Uno muy llamativo se produjo en mayo de 2011, cuando la Fiscalía detuvo a 52 personas (miembros de su propia institución, policías, militares y políticos...) por su relación corrupta con la banda paramilitar de Los Rastrojos.

algún modo, pioneras en el discurso sobre defensa del territorio y autonomía.

El investigador Pardo insiste: «La organización indígena del Chocó se posicionó notablemente como una expresión de organización de base en lucha por sus derechos, aportando de esta manera un paradigma de organización y de reclamos que influyó decisivamente en el surgimiento de la organización campesina negra en el Chocó, pionera del movimiento negro contemporáneo articulado en torno a lo territorial y a lo étnico.» Detrás de ambos movimientos está la Iglesia católica, que después de siglos de ceguera y de catecismo comprendió que negarse a reconocer las particularidades culturales y religiosas de esas minorías era condenarlas a la lenta desaparición.

La ley 70 de 1993 abrió la puerta a la titulación colectiva de tierras, recuperando así un elemento cultural de afrocolombianos e indígenas y permitiéndoles armarse de documentos legales a la hora de evitar invasiones y expulsiones de su territorio. Las poblaciones negras ya han logrado titular unas 695 mil hectáreas de las 800 mil que han solicitado en la zona del Atrato, y los indígenas ya tienen títulos de propiedad colectiva de 1,1 millón hectáreas. Sin embargo, este instrumento, a priori justo y necesario, no ha gustado a los actores armados que, en reiteradas ocasiones, han provocado desplazamientos masivos de las comunidades que, días antes, habían recibido sus títulos. De hecho, si se comprueban las fechas es interesante anotar que el 13 de diciembre de 1996 el Incora emitió los primeros seis títulos colectivos a comunidades negras de Riosucio, bajo Atrato, por 61 mil hectáreas, que favorecían a 250 familias. Fue a partir del 17 de diciembre cuando comenzó la fuerte ofensiva paramilitar en la zona dejando, según la Diócesis de Quibdó, más de 750 muertos y casi 50 mil desplazados

en menos de cinco años. El 20 de diciembre, las Autodefensas se tomaron Riosucio. Saque sus propias conclusiones.

El 27 de enero de 1997, luego de que la guerrilla se tomara Bagadó y matara a seis policías, y después de las incursiones paramilitares y bombardeos reiterados de la Fuerza Aérea Colombiana, 15 mil habitantes del bajo Atrato y de la cuenca del Cacarica se desplazaron. Siguiendo su avance río arriba, el 22 de mayo de 1997 los paramilitares se tomaron Vigía del Fuerte y Bojayá, ya en el medio Atrato, y entraron a los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, matando a medio centenar de campesinos y desplazando a otros mil.

Los años 1998 y 1999 no se olvidarán en la región: hubo quemas de comunidades, asesinatos, persecución y muerte de varios líderes negros e indígenas (como la traumática pérdida del líder indígena Armando Áchito el 25 de diciembre de 2000 en Juradó). También fueron asesinados por paramilitares los religiosos colombianos Michel Quiroga (18 de septiembre de 1998 en Lloró) y Jorge Luis Mazo (18 de noviembre de 1999), y el cooperante vasco Iñigo Egiluz (en esa última acción). En el año 2000 la guerrilla recuperó el control del medio Atrato con la violenta toma de Vigía del Fuerte y Bellavista (cabecera de Bojayá), que dejó 21 policías y 9 civiles muertos, entre ellos el alcalde. El 18 de octubre la guerrilla se tomó Bagadó, y el 5 de agosto, Carmen de Atrato...

La cronología de la violenta arremetida podría seguir, pero sería saturar este relato de vida con muerte. Este capítulo sólo pretende que la persona desprevenida comprenda el valor de la vida en esta tierra de nadie.

¿Por qué este empeño de los armados de expulsar a las comunidades de las tierras, especialmente si están

tituladas? La mayor parte de los analistas coinciden en que detrás de la guerra que se libra en el Chocó de manera abierta desde 1996 hay intereses económicos de gran calado. Desde hace más de 25 años, los diferentes gobiernos colombianos han elaborado grandes planes de «desarrollo» para la región, básicamente explotando su riqueza natural y su posición privilegiada entre el Pacífico y el Atlántico, que constituye un puente comercial directo con los grandes mercados asiáticos. Resumiendo las propuestas que se han hecho en todo este tiempo bajo diversos proyectos globales de nombres optimistas, Jorge Tamayo, investigador del Centro Laubach, cita los siguientes megaproyectos:

- Construcción de un puerto en Bahía Cupica (Pacífico) con calado para embarcaciones de 200 mil toneladas.
- Construcción de un puerto similar en el golfo de Urabá (Atlántico).
- Construcción de un ferrocarril transoceánico, de poliductos que unan los dos puertos, que fluyan de forma paralela a la carretera Panamericana y así, a bajo costo, tener un nuevo «canal seco» que compense la saturación del de Panamá.
- Mejoramiento y extensión de las carreteras existentes en la costa norte y de la Pereira-Tadó-Las Ánimas, extendiendo esta última a lo largo de la margen izquierda de la serranía de Baudó hasta Bahía Cupica.
- Construcción de un puerto para la exportación de café en el golfo de Tribugá.
- Desarrollo de áreas de transformación industrial a lo largo de la carretera entre Cupica y el golfo de Urabá, declarando ese territorio zona franca.

- Montaje de industrias dedicadas a la exploración, refinamiento y exportación de recursos petroleros (ya hay estudios al respecto en el bajo y medio Atrato).
- Ejecución de programas incidentales de carreteras, minas, agricultura y extracción maderera al sur del Chocó, incluyendo las áreas del río San Juan, con el objeto de asegurar modernas conexiones con Cali, Buenaventura y Bahía Málaga.
- Construcción de varias centrales hidroeléctricas a lo largo del curso alto del río Atrato y ampliación de la de Calima, vaciando las aguas del río Cauca al Calima, afluente del San Juan. La construcción de estas centrales supondría la inundación de varias comunidades.

A estos megaproyectos hay que sumar el del canal interoceánico que se había planificado aprovechando los cauces de los ríos Atrato y Truandó, pero que ha pasado a segundo plano ya que necesitaría del uso de energía nuclear para su construcción; y, lo que es más dañino en este momento, la extensión al Chocó de los cultivos ilícitos y el gran proyecto de implantación de la palma africana (aceitera), fomentado durante el último período (años 2000 a 2002) y que, según el Instituto de Investigaciones Humboldt, puede llegar a destruir entre el 21 y el 35% de la biodiversidad de estas tierras.

Todos estos proyectos para convertir al noroccidente de Colombia en «la esquina más rica de América» no han podido ejecutarse hasta el momento por la «terquedad» de las comunidades en participar de tales decisiones pero, fundamentalmente, porque tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en su momento el Ejército Popular de Liberación (EPL) y ahora también

el incipiente Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)¹² han ocupado esos territorios, primero como retaguardia y, ahora, como frente estratégico en su lucha contra los paramilitares.

En una reciente conversación, un comandante político del Frente 34 de las FARC me decía que su grupo tiene «grandes planes para la zona», «incluido un proyecto de colonización». Las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) no han ocultado su interés en esta región, aunque oficialmente aseguran que es «para garantizar la estabilidad y seguridad de la vecina Urabá, región que aporta el segundo renglón exportador agrícola del país» (el banano).

Efectivamente, Urabá fue uno de esos experimentos de monocultivo que han dado resultado, tanto que en esa zona del país, perteneciente en su mayoría a Antioquia, se libró una cruel batalla entre los años 1992 y 1996 que terminó con la dominación total de las AUC y la expulsión y asesinato de cientos de campesinos y jornaleros que fueron sustituidos poco a poco por nuevos colonos. «Lo que quieren hacer con la palma africana en el Chocó es reproducir el esquema de Urabá», me explica un economista en Quibdó.

De momento, una vez desaparecido el EPL, minimizado el ELN y con un ERG imberbe, la guerra del Chocó la están dando las AUC y las FARC. Por los primeros, el Bloque Élmer Cárdenas, y por los segundos, el Bloque José María Córdova.

Un líder negro refunfuña: «Los paras llegan a las comunidades y les están ofreciendo a los jóvenes 600 mil pesos mensuales [casi dos salarios mínimos de Colombia] por vincularse a ellos. Si tiene en cuenta que un jornal medio en el Chocó se está pagando a 8 mil ó

¹² Los últimos 45 hombres del ERG se desmovilizaron en 2008.

10 mil pesos el día, significa que entrando a sus filas uno gana tres veces lo que de campesino u obrero. Piénselo bien y vea el hambre que soporta nuestra gente.»

La guerrilla también está pagando, aunque cifras inferiores, y el comandante del Frente 34 con el que mantuve una larga charla a orillas del río se queja de cómo ahora buena parte de los «muchachos» no está en la lucha por causas revolucionarias sino «por hambre». Además, desde hace unos años, a los que no tientan con el salario de la muerte lo traman con plata de coca, de los cultivos ilícitos. La gente del lugar sabe que cuando llegan los «sombrosos blancos» (capataces de las plantaciones ilegales), llega mejor jornal y muchos problemas.

Los mercenarios de uno u otro lado, por lo tanto, no dudan en cambiar de bando si hay mejor paga, y en el trueque delatan, señalan y asesinan a antiguos compañeros y vecinos como prueba de fidelidad a los nuevos señores de la guerra que los han «contratado». Ésa es una de las razones por las que el nivel de crueldad parece no tener límites en este conflicto. «La guerra desde hace unos cinco años se ha puesto muy dura y todos los bandos tenemos muchas bajas; eso obliga a reclutar de cualquier manera y se cometen errores», confiesa el comandante guerrillero, que dice añorar los tiempos en los que se podía dar «formación política revolucionaria» a los combatientes.

Los jóvenes guerrilleros y guerrilleras que veo en combate contra los paramilitares en los alrededores del cementerio de Bellavista el 5 de mayo de 2002 tienen el rostro vencido por el cansancio. Una de las guerrilleras pasa junto a unos treinta cadáveres de los civiles que murieron en la capilla en un suceso que traumatizó al país. Vomita. El olor es insoportable y la imagen terrible. «Esta guerra sí es muy *bijueputa*», le alcanza a decir un

compañero para consolarla. Otros dos combatientes, en la retaguardia, no están cansados; están trabados, drogados, y su humor es cambiante, caprichoso. No tienen más de 17 años. «Tranquilo, que esta zona es toda nuestra; aquí todo el que se encuentre es revolucionario, sin problema», me dice uno de ellos mientras sostiene en una mano una pequeña grabadora que escupe un tema de salsa y con la otra agarra el fusil. Tremendo consuelo.

En otra ocasión, a pocos kilómetros de Quibdó, le pregunté a un comandante militar del Frente 57 de las FARC sus razones para estar embarcado en esta guerra. Con graves problemas para articular un discurso coherente me dijo que los paramilitares mataron a su esposa e hijo y estaba vengándose.

– ¿Y la revolución?

– Sólo sé que a mí amarrado no me van a matar.

– ¿Y la revolución...?

Bajar o subir por el río es, en definitiva, un paseo por diferentes repúblicas independientes, es parar en varios retenes de uno u otro bando que ejercen de autoridad ante la renuncia implícita del Estado. Antes de abordar el bote que nos transporta hay que negociar con los señores de la guerra de cada tramo, asegurar el paso. El bloqueo desde Riosucio, en el norte, a Quibdó, en el sur, es total. Primero fueron los paramilitares los que controlaron todo el transporte por el río; tras la toma de Vigía del Fuerte en el año 2000, fue la guerrilla, y ahora se lo reparten (las AUC al norte y las FARC al sur). Los bienvenidos lanchones que subían desde Cartagena de Indias y dinamizaban la economía y la vida no se han vuelto a ver en el Atrato.

El bloqueo ha supuesto, entre otras cosas, el desabastecimiento de alimentos y enseres básicos para la supervivencia de las pequeñas comunidades y el

encarecimiento de los productos que a malas penas llegan a las tiendas. Por esa razón, la Diócesis de Quibdó, la ACIA y la Orewa se aliaron en 1998 para crear un sistema de tiendas comunitarias, con precios controlados, con abastecimiento permanente y con un reglamento que impide la acumulación y la venta a actores armados. La idea, buena y efectiva en un comienzo, tampoco gustó a los grupos ilegales, que han boicoteado los embarques o, como en el caso del último intento de surtir a las tiendas comunitarias, robaron toda la mercancía,. El lanchón que atracaron se llamaba El Arca de Noé los ladrones se identificaron como miembros de las FARC. Dijeron que era para evitar que los paramilitares se quedaran los insumos. Al fin, lo cierto es que la comida y los materiales de construcción nunca llegaron a los civiles.

En general, todos los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades han sido torpedeados con el asesinato de los líderes o con el minado interno de sus estructuras. A la ACIA, la Orewa o la Diócesis de Quibdó las han golpeado porque han mantenido un discurso que no gusta a nadie: el de la no neutralidad, el de la defensa de la autonomía y del territorio. «Oiga, pero es que cómo se le ocurre a alguien lo de la neutralidad cuando nos están matando como animales», insiste un líder campesino.

Pero tampoco se ha respetado a las llamadas Comunidades de Paz, poblaciones que sí proclaman la neutralidad y que, en teoría, habían pactado con los grupos armados el respeto por su opción. Todas las fórmulas se topan con la barrera de la violencia. Como muestra de la frustración, este testimonio de un líder de la Comunidad de Autodeterminación formada por los retornados a la cuenca del Cacarica que, el 21 de junio de 2001, tras 23 días de estar rodeados por paramilitares que actuaban junto a miembros del Ejército regular (según la

comunidad, y tal y como lo pudo constatar una comisión gubernamental que estaba en la zona), dijo: «Mucho dolor. Nuestra tierra no es la misma. Nos han destruido una parte del territorio. Llevamos 23 días sin trabajar en las zonas de pan coger, sólo dormimos a pedazos, a ratos. No hay producción. No hay comida. Mis hijos, con los sobrevuelos [de la Fuerza Aérea Colombiana], corrían de un lado a otro como atontilados. Todo el mundo está pensando mucho, hay mucha tristeza. Nos están poniendo nuestro proyecto de vida frente a ese proyecto de muerte. Nuestra tierra la han hecho maldita, han traído nuevamente la maldición. Ellos cuentan con todas las armas del mundo, las de matar con balas, las de matar con hambre, las de comprar el pensamiento, las de llevarse el alma. Vimos todo el tiempo cómo unidades de soldados profesionales que hemos visto y que conocemos estaban en el operativo, al lado de los civiles que se arman y se uniforman y que hace cuatro años nos desplazaron. Por eso contamos con la decisión de la mayoría de no irnos de la tierra, de no cultivar coca ni palma africana, de no aceptar la oferta paramilitar de seguridad y protección.»

A los líderes civiles que hacen declaraciones como éstas los señalan como colaboradores de uno u otro bando, y esos señalamientos llegan desde cualquier instancia, incluidas las Fuerzas Militares o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuyo asesor especial para América Latina, Phyllip T Chicola, me dijo que las Organizaciones No Gubernamentales que denuncian los nexos entre paramilitares y Ejército no son más que el brazo político de la guerrilla. Simplificar lo complejo es una manera de matar sin poner las balas. Por todo esto, buena parte de los testimonios que aparecen en este libro no están seguidos del nombre de su autor, o se firman con nombres falsos. Confieso que cuando tecleo estas

líneas tengo temor. Las dos veces anteriores que difundí públicamente las historias de estas gentes, a los pocos meses sus protagonistas fueron asesinados. Los nombres falsos sirvieron de poco, pero es la mínima medida de seguridad que se debe tomar.

Negar la evidencia, en todo caso, es parte de la estrategia informativa de todos los bandos. Tras el crimen de guerra perpetrado por las FARC en Bojayá el 2 de mayo de 2002, todas las partes mintieron y consideraron como mentirosos a quienes no ratificaron la «versión oficial» de cada cual. La guerrilla reconoció el error, pero culpó a los paramilitares de utilizar a los civiles como escudos humanos; los paramilitares juran y perjuran que no había combates y que las FARC mataron intencionalmente a los civiles que quedaron sepultados en la capilla de Bellavista, y el Ejército se hizo el ciego y sordo ante el hecho de que 350 paramilitares pasaran por delante de la base de la Armada ubicada en Riosucio, y justificó sus cinco días (si no cinco años) de retraso en llegar a la zona por la peligrosa lluvia. Quien contradice estas versiones simplemente se convierte en enemigo de la parte afectada. La pregunta que se hace cualquier observador de la realidad colombiana es: si la población civil no tiene derecho a la vida, ¿tiene el observador derecho al silencio?

Bienvenidos pues al Chocó, a la Colombia inexistente, a la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, al reino de todo-es-posible, a la cuenta de ahorros de la naturaleza sudamericana, al teatro de guerra donde el Derecho Internacional Humanitario y la dignidad son papel mojado por las aguas del Atrato. Las siguientes páginas dan la voz a algunos de los supervivientes de esta guerra. A todos los une una característica: no sólo están vivos, sino que practican una resistencia activa, civil y autónoma.

Los testigos del pueblo fantasma

Yo no pensé estar vivo, pero ya que lo estoy pues es como una nueva oportunidad que le brinda la vida a uno para cambiar algunas cosas, para ser más solidario.

Víctor, 17 años, Bellavista (Chocó)

- ¿Y los heridos, doctor?
- Los heridos están muertos.

Ésa fue la respuesta que saltó como un resorte del médico Juan Marcelo Vázquez dos días después de que la tragedia se hubiera consumado en Bellavista. A este doctor el alcohol le sirve para sanar heridas físicas y para mantener un estado de semiinconsciencia lúcida que le da un toque trágico. Vestido con el traje de lidiar a la muerte en los quirófanos, Juan Marcelo aún no cree que esté vivo y que haya tanto muerto. «Fue dantesco... Si ese Dante pensaba que había conocido el infierno era un pendejo: el infierno nos tocó a nosotros.» Lo que le ocurrió en esos días de abril y mayo de 2002 a Juan Marcelo fue como un paseo por el infierno con todos los gastos pagados. Lo único que no cuadra es que lo pueda contar. Viajó a Bellavista a reclamar el salario de tres meses que le debía la empresa promotora de salud (EPS) para la cual había trabajado. Le habían dicho que por fin estaría su plata. La institución no cumplió y se encontró en Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá, sin plata y en medio de la guerra.

Desde unos días antes, para ser más exacto desde el 21 de abril, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia se habían instalado en la población chocoana y en la vecina Vigía del Fuerte, municipio antioqueño que

todavía guarda intactas las huellas de la toma guerrillera que sufrió en marzo de 2000 y que dejó ocho civiles muertos y se llevó a otras partes del país a los pocos policías que no aparecían en la lista de veintiún agentes muertos. Allí, en la pista de Vigía, aterrizaron en esos días varias avionetas con el rótulo de las AUC. Una de ellas era el transporte del temido comandante Alemán, el máximo jefe del Bloque Élmer Cárdenas. El mismo que en un comunicado oficial se empeñó en negar la evidencia al escribir que, «aunque en algunos medios se ha presentado la masacre de Bojayá como resultado de los combates entre las Autodefensas y las FARC, las investigaciones vienen demostrando que en ningún momento se presentó combate o fuego cruzado en el área urbana del municipio afectado». Todo el mundo lo vio, aunque nadie lo cuenta abiertamente.

Juan Marcelo llegó a la zona el 30 de abril y no imaginaba el movimiento de hombres que estaban haciendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El grupo guerrillero apareció en la madrugada del 1° de mayo en Vigía. Unos mil guerrilleros y guerrilleras del Bloque José María Córdoba estaban dispuestos a acabar con los 350 paramilitares del Élmer Cárdenas de las AUC. El enfrentamiento comenzó con un encontronazo. El comandante Camilo de las AUC se desplazaba en un bote desde Bellavista, en cuyo casco urbano se concentraban sus hombres, a Vigía, cuando se encontró con la guerrilla. Salió fatalmente herido y fue Juan Marcelo quien primero lo atendió y después trató de hacerle la necropsia entre el fuego cruzado que ya silbaba en las calles de Bellavista. Nunca la pudo terminar.

Ese 1° de mayo, parte de los habitantes de Bellavista y un grupo numeroso de vecinos de Pueblo Nuevo, un barrio ocupado por descendientes de la comunidad

vecina de Pogue, buscaron refugio en la capilla de Bellavista. La idea tenía lógica. Primero, porque las comunidades afrocolombianas del Atrato son muy religiosas y espirituales, y esa protección no tenía precio; y segundo, por asuntos menos divinos: la capilla tenía las paredes de concreto, a diferencia de las de las casas, y estaba junto al puesto de salud. Era un lugar seguro y sagrado al que, además, solían respetar los grupos armados. Unas 450 personas se refugiaron allí. Otro grupo, de unas 150 personas, buscó protección en la casa de las hermanas agustinas, también de concreto, también de Dios.

Dentro del templo, tres sacerdotes -Antún, Janeiro y Antonio- trataban de alimentar a ese gentío y de animarlo con el constante acompañamiento. Al otro lado de las paredes se oían carreras, disparos y explosiones. Varias veces los paramilitares, atrincherados en esa zona del pueblo, les pidieron auxilio. No se lo dieron. Explicaron a gritos que ése era refugio de población civil y que no podían dejar entrar a actores armados.

En todo caso, había relativa calma. El jueves 2 de mayo, en la mañana, mujeres, hombres y niños despertaron temprano. La mayoría de los menores y de las mujeres estaban alrededor del altar. «Cerca de Dios.» El mismo lugar en el que cayó la pipeta de gas alistada como bomba que lanzaron varios guerrilleros desde unos 150 metros de distancia pensando que iban a acabar con varios paramilitares que se encontraban en un lateral, a las afueras de la capilla. De nada sirvió que una señora les rogara instantes antes que no la lanzaran, que había mucha gente del pueblo en la iglesia. «Tranquila que nosotros sabemos cómo hacerlo.» Lo hicieron y 119 civiles, entre ellos unos sesenta menores, murieron. A las diez y media de la mañana, la vida se congeló en una imagen desoladora que dio la vuelta al mundo.

“Vi a un hombre correr como dos metros sin cabeza... Había restos humanos por todas partes, manos, pies...» El padre Antún, aturdido aún por el golpe de una teja en la frente, ayudó a salir a algunos heridos; Juan Marcelo llegó corriendo desde el puesto de salud donde le practicaba la necropsia al comandante Camilo, y no podía creer lo que veían sus ojos. Antún, dos días después, en medio del aislamiento, logró hacer llegar un mensaje escrito al obispo de Quibdó, Fidel León Cadavid. Ésta fue su misiva escrita a mano, donde aparecía garabateado el dibujo de la tragedia:

“Apreciado pastor:

Las cosas por acá están muy complicadas. Escribo esta nota a las 11:40 a.m. [del 4 de mayo de 2002]. Hace poco pasó un helicóptero y disparó alrededor del pueblo [luego se demostró que pertenecía a las AUC].

Estuvimos esta mañana buscando al padre Janeiro Jiménez y no aparece.

En la capilla teníamos unas trescientas personas distribuidas en grupos y la pipeta lanzada cayó sobre el grueso de la población y mató a más de ochenta personas.

A la fecha hemos recogido unos sesenta cadáveres, varios sin poder reconocerlos, pero nos quedan en la capilla unos veinticinco ó treinta sin recoger; no se pudo hacer porque nos dieron una alarma esta mañana [...]

Estamos toda la comunidad de Bellavista en Vigía SIN COMIDA, SIN ABRIGO, SIN NADA.

Gestionen lo más que puedan ayuda humanitaria, que se está pasando muy mal. Los muertos no los hemos podido enterrar porque no hay condiciones, y ya están en su mayoría descomponiéndose.

Tengo una herida leve en la cabeza y en un pie. Al igual que Antonio, herido en un pie.

Hay mucho temor por la presencia de las FARC aquí y que esto nos pueda traer más problemas. Gestionen en todas partes y que vengan distintas comisiones porque la cosa está fregada. Hay quince heridos graves. Hay 96 heridos no tan graves pero que requieren atención.

Estamos todos muy preocupados por la situación por la que se está pasando. La gente quiere salir, pero ¿por dónde?

Esperamos el pronunciamiento de todos frente a esta realidad.

Aun todavía hay combates, pero fuera de la población.

El personal religioso y la comunidad de Vigía están bien y nos están colaborando al máximo.

En el Dios que nos bendice y acompaña...”

La historia de Bellavista fue relatada mil y una veces en los diarios colombianos. Se pudo leer cómo parte de los supervivientes se echaron a la ciénaga; cómo el padre Janeiro estuvo tres días perdido en la selva y apareció vivo y enfermo de paludismo; cómo la población que se quedó en el casco urbano salió con banderas blancas hasta el muelle y remando a mano consiguió huir a Vigía del Fuerte en varios botes; cómo murieron veintiún personas de la misma familia; cómo se tuvo que pagar en plata y en alcohol a los pocos hombres que en los días siguientes sacaron cadáveres y miembros humanos del amasijo de cascotes y sangre en que quedó convertida la capilla; cómo se enterró a toda esa humanidad en una fosa común de cinco metros de profundidad y cinco metros de ancho a orillas del río Bojayá; cómo siguieron los combates durante 72 horas; cómo los paramilitares

ametrallaron desde el cielo con un helicóptero que más tarde fue derribado por la Fuerza Aérea; cómo los aviones OV-10 y los Mirage del Ejército colombiano aterrorizaron a la población que se hacinaba en Vigía; cómo el presidente Andrés Pastrana apareció en escena para hacer uno de sus últimos actos dramáticos en el que las gentes del Chocó se sintieron más abandonadas que nunca...

Las primeras cifras de víctimas mortales hablaban de entre 50 y 70. Finalmente, se llegó a 119¹³. Un mes y medio después ni siquiera se había reconocido a todos los cadáveres. Fuera de la identificación de urgencia que hicieron los sacerdotes y familiares de 57 cuerpos que estaban en mejores condiciones, las autoridades colombianas sólo habían practicado la necropsia a 14 cadáveres a mediados de junio. Heridos fueron casi cien. Heridos físicos, porque fueron miles de almas las que quedaron con cicatrices abiertas.

Las cicatrices de los vivos

Los vivos no quieren dar su nombre. Tienen miedo. Primero abandonaron Bellavista, después, Vigía. En los primeros días, las miradas perdidas hablaban por ellos. Ahora hablan ellos, aunque sin dar su nombre. «Sabe que aquí hay mucha gente pendiente de nosotros, averiguando cosas...» Aquí es Quibdó, esa ciudad que un mirón desprevenido no atinaría a describir si está a media construcción o en medio de la destrucción. La llegada de 3.800 desplazados de Bellavista, Vigía y muchas comunidades cercanas (Puerto Conto, San Miguel, San Martín...) no hizo sino acumular miseria sobre miseria. De esos seres arrancados de cuajo de sus tierras, de su

¹³ *Nota del editor:* se respeta el texto original aunque, como ya se ha explicado, las víctimas fueron 79.

río, algo más de 2.000 no cumple la mayoría de edad y, del total, casi el 50% corresponde a mujeres.

Víctor no quiere dar su nombre, así que le doy uno para creer que los vivos sí tienen nombre. Tiene 17 años y tampoco sabe si quiere tener futuro. La caída de un plato o un golpe fuerte todavía lo hacen estremecer. «Creo todo el tiempo que va a ocurrir lo mismo de Bellavista.» Camina junto a su amigo Haini, de 26 años. Ambos son extremadamente educados y su parlamento es terso y reposado.

«Antes de la toma [el asalto guerrillero a Vigía del Fuerte en el año 2000] uno vivía muy bueno en Bellavista. La gente caminaba tranquila, se parrandeaba, se jugaba fútbol, la gente se divertía mucho. Antes, si llegaba a Bellavista, se daba cuenta de que allí ninguna casa tenía puertas. Alguna, como mucho, tenía ventanas. En mi casa, hasta hace dos años le pusimos unas varillas a la puerta. La gente no tenía costumbre de colocar puerta, todo el mundo se conocía, todo el mundo confiaba en cada quien. A partir de que entró el conflicto, la dinámica de vivir cambió mucho: a la gente le tocó reacondicionarse, pero no estábamos preparados para eso.» Haini habla con tristeza, pero con energía. A Víctor le cuesta expresarse y repite una y otra vez: «Antes se vivía con alegría.»

«Después de la toma -relata Víctor- fue duro; las cosas fueron cambiando. Ya después uno fue tomando ánimos cuando, ahora, que no nos habíamos levantado, es cuando llega este golpe de estado que es el que termina de rematarnos.» Pero antes de la toma, esta localidad ya había tenido una dura advertencia sobre el derrotero que estaba tomando el conflicto. En noviembre de 1999, las Autodefensas asesinaron a su párroco, Jorge Luis Mazo. Su pecado había sido denunciar los abusos de los grupos armados en el Atrato medio y trabajar en la

organización de las comunidades, algo que ninguno de los implicados en el conflicto consiente si no es él el que dirige la organización.

Bellavista era una comunidad pequeña. En el municipio de Bojayá habitaban más de 7.000 personas, pero repartidas en infinitas y diminutas aldeas pobladas por comunidades negras e indígenas. Pero la cabecera era un lugar apacible, de unos ochocientos habitantes, bañado e inundado por el río Atrato, ese inmenso cauce que desde finales del año 1996 ha visto cómo sus aguas transportan 90% menos de botes y planchones y 100% más de cuerpos sin vida arrojados al caudal para borrar pruebas del horror y para dejar la huella del terror por las comunidades que los ven pasar.

«El río Atrato para mí es mucho más que una vía de transporte, es... una fuente de vida, porque en el río se pesca, nos movilizamos por él y también es... es como que limpia muchas veces la tristeza y otras cosas que tenemos por dentro. Uno quisiera que las cosas que suceden fueran algo así como el agua del río que pasa y se va quién sabe hasta dónde. Pero no, las cosas continúan perdurando en la memoria.»

Víctor era uno de los líderes de los grupos juveniles de Bellavista. Un pueblo, como la mayoría de la zona, organizado alrededor de la Iglesia católica, que ha reforzado mucho el trabajo comunitario para hacer más resistentes a estas comunidades ante el embate de la violencia. Cuenta cómo estos grupos habían tenido que trocar sus objetivos lúdicos de otros tiempos por una labor de prevención para evitar el reclutamiento de los jóvenes del pueblo por parte de los grupos armados.

«Nos lo pintaban como lo mejor de la vida-explica Víctor refiriéndose a la cotidianidad en un grupo armado-, nos decían que era como un paraíso y algunos

optaron por irse porque quizá no tenían nada que hacer en sus casas. Muchos no tenían padres o no estudiaron, y como pintaban eso como el edén... pues se iban. Pero la mayoría de la gente de Bellavista no hablaba con los grupos armados. Por ejemplo, si estábamos reunidos y llegaba cualquier uniformado, la gente directamente se iba levantando para evitar problemas.»

A diferencia de otras zonas rurales de Colombia, donde la convivencia con la guerra ha sido permanente desde hace décadas, los habitantes del medio Atrato han tenido que aprender rápido. Hasta el año 1996 tan sólo tenían que convivir con la miseria y el abandono. La mayoría de comunidades viven gran parte del año inundadas y han creado un sistema elevado de caminos a base de tablones que da un barniz de mudanza a todo. El agua corriente es un componente de ciencia ficción y la energía eléctrica, cuando llega a las comunidades, lo hace sólo por unas horas al día. Los contrastes hacen que en algunos núcleos rurales y localidades, sin embargo, se pueda hablar por teléfono en cabinas satelitales y que desde Murindó o Vigía sea a veces más fácil la conexión por internet que por teléfono convencional. La tecnología redime, pero no alimenta.

En la zona se aplica a la perfección el refrán que asegura que en tierra de ciegos el tuerto es el rey. En esta parte del río conviven poblaciones pertenecientes al departamento del Chocó y al de Antioquia, dos polos opuestos de un país de excesos. Chocó, uno de los departamentos más pobres y golpeados; Antioquia, el departamento más rico del país y cuyos empresarios y políticos son los más interesados en la recolonización del Chocó, su única vía directa al océano Pacífico.

Bellavista y Vigía son un ejemplo de este juego entre ciegos y tuertos. Las separa el río, apenas 1.500 metros

en diagonal que se recorren en cinco minutos en un bote de motor, y la línea imaginaria de las fronteras. Bueno, y algunas cosas más. Vigía cuenta con pista de aterrizaje -aunque es una definición bastante generosa para esa recta llena de baches y tierra-, hospital -aunque cualquier habitante de ciudad negaría que esa edificación de una planta sea lo que dice ser-, oficina de teléfonos, un colegio construido con cemento y con canchas, y uno que otro rumbeadero. Bellavista, cuyos habitantes son tan pobres como los de Vigía, es del Chocó, y se nota: no hay ninguno de esos adelantos y tiene menos paisas (mestizos o blancos) entre su población.

«Nosotros también somos colombianos -matiza Haini con rabia contenida-, aunque vivimos una realidad muy diferente de lo que es Colombia. Yo tuve una vez la oportunidad de ir a Barranquilla y uno ve la diferencia. Quién no quisiera tener, como colombiano, esas posibilidades que debe haber en Medellín, Bogotá o las que yo vi en Barranquilla. Quisiéramos que Colombia fuera una sola, que no existieran esas diferencias tan grandes. Quisiéramos una solidaridad más verdadera.» El discurso de Haini es fácil de escuchar en estas comunidades. Si algo tienen claro los chochoanos es que los olvidaron. No sólo el Estado, sino la sociedad en general.

Víctor remata: «Muchos lo vemos como racismo. En Colombia todavía existe el racismo y quizá es por eso que el gobierno también se olvida de estas zonas pobladas por negros y por indígenas. Es decir, es posible que también haya otras razones que nosotros no comprendemos bien... Muchas veces uno siente rabia porque sale a poblaciones donde viven los paisas, y la gente vive como mejor, tienen como más apoyo del gobierno. Y eso nos desilusiona la vida, nos desanimamos de estudiar y del

futuro. Entonces... muchas veces... -Víctor duda-... eso le obliga a uno a coger otros caminos.»

Para las víctimas de esta guerra, el Estado casi nunca es una buena noticia. Alberto, de 44 años, perdió a tres sobrinos en la capilla de Bellavista, donde estuvo hasta que decidió ir a la casa a vigilar sus pertenencias. Cuando estalló la pipeta pudo llegar a tiempo para sacar a su mujer y a cuatro niños de entre las ruinas. Por suerte, todos vivos. Hablo con él tres días después de la tragedia, en Vigía. Mientras charlamos, un OV-10 de la Fuerza Aérea no deja de disparar en los alrededores del pueblo. *La Marrana*, que así conocen popularmente a este avión de guerra, es vieja y emite un ronquido metálico, como si le costara mantenerse en el aire, pero sus ametralladoras sí suenan engrasadas. Mientras hablamos, ambos miramos permanentemente al cielo como comprobando que el tiro no viene a esta zona. «¿El Estado? Mejor que no venga, porque nos tiene viviendo en condiciones infrahumanas, sin salud, sin buena educación, sin posibilidades económicas para subsistir, sin ayuda de ningún tipo, y si viene ahora lo va a hacer con el Ejército.»

– ¿Y usted no confía en el Ejército, no cree que les va a dar seguridad?

– ¡Noooooo *home!* ¿No ve la trabazón tan fuerte que tienen con los otros [los paramilitares]?

La mayoría de habitantes del medio Atrato coinciden en esta apreciación. Haini también tiene certezas que le quitan el sueño: «Nosotros creemos en un Estado y en un Ejército, pero un Ejército transparente. La experiencia que tenemos nosotros frente a la Fuerza Pública no es la mejor. Si el presidente de la República tiene seguridad, dicho en términos cristianos, ¿nosotros por qué no la tenemos si también somos colombianos y

la Constitución reza el artículo ese de la igualdad y esas cosas? Entonces... esas son como inquietudes que a uno le quedan.» Las dudas tienen asidero en la realidad. Los pocos servicios del Estado son más que deficientes. Los centros de salud no son más que botiquines con nombre pomposo y las escuelas a duras penas son cuatro paredes con mesas destartaladas en su interior. El personal médico y docente de la zona, con loables excepciones, no quiere estar allí. Por tanto, con poco esfuerzo busca una razón para salir. «Muchos han llegado al autosequestro o a autoamenazarse para abandonar su puesto», me asegura un funcionario que se acoge a la costumbre de ocultar su nombre. Respecto a la «trabazón» entre las Fuerzas Armadas y la Policía con las AUC, hay numerosas pruebas y denuncias. Yo lo he podido ver y comprobar directamente desde hace años. Primero, en Carepa, base de la brigada que opera en Urabá y parte del Chocó antioqueño, en 1996; después, en el medio Atrato, cuando en el año 1998, al llegar a Vigía, teníamos que presentarnos e identificarnos ante el retén paramilitar situado a escasos 300 metros del cuartel de la Policía que luego, en el año 2000, fue dejado en ruinas por las FARC. En todo caso, con trabazón o sin ella, los habitantes del medio Atrato se preguntan por qué la Fuerza Pública no hace presencia en la zona y garantiza la seguridad de los civiles.

Cualquier persona que llegue a Quibdó y pregunte bien puede elaborar en minutos el mapa del momento de los movimientos de guerrilla y paramilitares. «Hay retén de las FARC en tal punto, los paras están haciendo bloqueo en tal otro, los comandantes del Frente 34 han ordenado a la comunidad tal abandonar la zona, cinco paramilitares han quemado tal casa...» Todo el mundo parece poseer el escáner, menos las autoridades. Según el Defensor del Pueblo del momento, Eduardo Cifuentes, el

problema es que «el Ejército tiene que dejar descubierto un roto para tapar otro; no tenemos un Ejército ni una Policía con capacidad de respuesta ante estos grupos, esta geografía y tantos frentes de guerra abiertos por todo el país». Otras voces no son tan benévolas y recuerdan que los paramilitares que llegaron el 21 de abril a Bellavista pasaron antes, a bordo de ocho pangas con motores de alta potencia, por Riosucio, donde se encuentra la base fluvial de la Armada colombiana en el bajo Atrato. También que, mediante el sistema de alertas tempranas, las Fuerzas Militares y otras instituciones del Estado habían sido advertidas de la inminencia de un choque entre grupos armados en los cascos urbanos del medio Atrato.

Retornar, renacer...

Los vivos hacen repaso del abandono porque, aunque no confían en los cambios, quieren ser conscientes de por qué tienen que vivir en estas condiciones. En Quibdó, los supervivientes de Bellavista restañan sus cicatrices del alma y se rearmen de razones para empujar su cuerpo y seguir viviendo. Víctor no se ha quitado el miedo de encima pero cree también que le sirve de poco: «En muchas ocasiones siento miedo porque me ha tocado enfrentar situaciones que no debería... pero con el tiempo uno aprende a tener valor. Yo miro que si me acobardo puedo perder mucho más que a un amigo y entonces me digo que tengo que salir adelante, con todos los riesgos que tiene la vida, afrontarla. Si se huye de ella, de pronto puede ser peor.»

Quizá los que lo tienen más difícil son los centenares de niños que se agolpan en los albergues de refugiados y en las casas desperdigadas por los barrios de Quibdó, donde están viviendo seis y siete familias en un espacio

de 50 metros cuadrados. Los padres y madres coinciden en que los menores, desde el 2 de mayo de 2002, son más tristes, juegan menos. «Muchas veces, con los adultos se comienza a hablar y nada más pronunciar el nombre de Bellavista se les saltan las lágrimas», explica una sicóloga de la Brigada Móvil de Atención Sicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que atiende a los desplazados.

El suceso de Bojayá despertó la caridad en una parte de los colombianos que, durante 10 días, almorzaron con la noticia en las pantallas. Duró poco, pero las autoridades y organizaciones de cooperación se vieron obligadas a hacer algo. Ese algo -quizás es una moda como los pantalones descaderados- pasa por decenas de sicólogos, trabajadores sociales y educadores recién salidos de los salones de la universidad que les dicen a los desplazados que lo más importante es curar la tristeza. Pero un mes y medio después de los hechos y del desplazamiento masivo, unos cuatrocientos desplazados están en albergues donde desayunar, almorzar y comer se llama arroz, donde no hay jabón para lavar la ropa, donde las letrinas están taponadas y no tienen una miserable cortina que garantice, al menos, la intimidad, y cuyas paredes hacen de frontera territorial, y la falta de dinero y el miedo, de aduaneros. El resto de desplazados comparten casa con varias familias y no lo tienen mejor.

El estilo de atención fomenta la limosnería entre las víctimas de este viaje de difícil retorno y les hace sentir que la ayuda es un favor, no un derecho. Un vistazo al decreto 2569 del 12 de diciembre de 2000 que reglamenta la ley de atención a los desplazados, aclara que la ayuda es una obligación del Estado. «Se tiene derecho a la atención humanitaria de emergencia por espacio máximo de tres meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres meses más», reza el decreto, que explica también lo que

se entiende por atención humanitaria de emergencia: «...la ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y apoyo a población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, atención psicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública.» Con los desplazados del medio Atrato (probablemente con los casi tres millones que deambulan por el país) se está incumpliendo el decreto. Nada nuevo bajo el sol, pero recordarlo es obligatorio.

En el caso de los desplazados de comunidades cercanas a Bellavista, el miedo no está en los menores. «Aquí los nervios están en los adultos», asegura una mujer prieta, de carácter... «Creo que todavía no he dormido un sueño completo desde que tuvimos que salir de la comunidad.» A pesar de ello, esta mujer, con unas piernas reducidas a la mínima expresión por alguna enfermedad de infancia, de las pocas que da su nombre sin temor, tiene claro su futuro inmediato: «Me llamo Cecilia y yo no retorno.»

No todos piensan igual. Algunos de los nuevos desplazados ven cómo aún hoy, en el que fuera coliseo de Quibdó, permanecen familias desplazadas en 1996 de Riosucio, en el bajo Atrato, y cuando pasean por los barrios de la ciudad pueden encontrar las diferentes capas de desplazados... los de Bagadó, los de Carmen de Atrato, los de Las Mercedes... una lista interminable de campesinos y pescadores desadaptados en una ciudad que no es ciudad y en una vida que no es vida.

Haini cree que es urgente el retorno. «Toca casi nacer nuevamente, empezar de cero, pero no quisiéramos que ese empezar de cero fuera aquí, en Quibdó. Tiene que ser en Bellavista, y por eso planteamos el retorno. No nos queremos quedar viviendo aquí, queremos volver

allá pero en condiciones de seguridad. Hablan de que hay que reubicar el pueblo y moverlo para evitar las inundaciones antes de retornar. Nosotros nacimos en el río y nos aguantamos las inundaciones y esas cosas... Quién no quisiera vivir sin inundación en el pueblo, pero ése es un tema que no es fundamental. Lo importante es la seguridad, el tema del conflicto. Bueno, y temas como la educación, por el que el Estado nunca ha dado la cara por estas comunidades, o el tema de la salud... Mire que se están muriendo indígenas del municipio de Bojayá de hepatitis y tuberculosis después de la situación que se dio allá. Entonces, yo digo: que el Estado empiece de nuevo ahorita junto a nosotros, que nazcamos de nuevo y a ver qué se puede hacer.» Haini hace una pausa e insiste por enésima vez en una frase que ya suena a deseo, a petición navideña: «Nosotros también somos Colombia.»

El Estado, o mejor dicho, el Gobierno, se disfrazó de Papá Noel los días posteriores a la muerte de ese centenar de humanos y aseguró que todo era poco, que sus arcas estaban abiertas y que su corazón era grande. Prometió ayudar a los desplazados -la promesa se olvidó pronto- y sacó la chequera para poner entre 5.000 y 8.000 millones de pesos para la reconstrucción del pueblo. Lo que no se dijo es que de esa cantidad el 80% se va a destinar a construir nuevos cuarteles de Policía en Bellavista y en Vigía del Fuerte y a mejorar la pista de aterrizaje de Vigía. El 20% restante, la calderilla, servirá para reparchar la miseria.

Para Víctor el retorno es imperativo porque Quibdó es un planeta extraño donde las reglas del juego son demasiado diferentes. «Yo estoy acostumbrado a las cosas de la naturaleza. Cuando uno se traslada del campo a la ciudad es más bien la ciudad la que parece extraña. Acá todo va por el dinero; allá hay otras cosas, como la amistad. La vida era más fácil en Bellavista.» El regreso,

pase lo que pase, y ocurra cuando ocurra, tiene la losa del 2 de mayo encima. Todo está condicionado. «Tengo sueños de tener una familia -dice Víctor-, aunque a veces, con lo que ha pasado, uno se desilusiona y piensa que... al pasar el tiempo, si tengo una familia propia y vuelvo a Bellavista, ya no voy a ir como antes, porque uno va a pensar que puede suceder lo mismo y puede morir uno, o sus hijos, y sería un dolor muy grande. Esos pensamientos evitan que uno se organice rápido.»

Organizar un pueblo fantasma tampoco va a ser fácil. A pesar de las campañas de solidaridad, algunas de ellas de lo más originales. Sólo una anécdota: Unicef, las Fuerzas Militares de Colombia y el canal Caracol de televisión iniciaron inmediatamente después de la tragedia una campaña para «reconstruir la escuela de Bellavista». Es curioso, porque puedo jurar que la escuela de Bellavista no sufrió más daños que los del olvido durante años. La escuela de esta pequeña localidad no está peor que la de Las Mercedes o la de Puerto Conto, o la de tantas comunidades. La solidaridad atropellada y la caridad mal entendida rozan con el límite de las campañas de imagen. Como la memoria es algo frágil, me permito otra vez el lujo de reproducir a Gonzalo Arango en un fragmento de la crónica que publicó en la revista Cromos el 28 de noviembre de 1966 refiriéndose al incendio que afectó a Quibdó:

«Nadie volverá a pensar en Quibdó, en su pobreza, en su desamparo. Y esa indiferencia futura -y no sus escombros- es lo que constituye para mí el drama de su situación actual; que el Chocó es un drama eterno. El de antes del incendio, el de después, el de siempre. Y ese drama, hermano, no se resolverá con una estera de caridad, ni con un tarrito de leche Klim, ni con un recital nadaísta. Porque después de la estera y el tarrito de leche, ¿qué? Ése es el problema: lo que vendrá. O sea, la

impunidad del hambre, la desesperación, la negra nada. Estoy seguro de que cuando leas esta carta, el Chocó habrá vuelto a la “normalidad”, es decir, a su miseria ancestral, a la injusticia. Y la injusticia, todos sabemos, no es noticia de primera página. Ella es nuestro modus vivendi, la apatía, el conformismo, el sálvese quien pueda...»

Bellavista pasó días cubierta por cadáveres y por los gusanos que se alimentan de la muerte. A los que pudieron sentir el olor de la muerte se les hace más urgente la vida. «Un mensaje para el resto de colombianos: que el Chocó también es Colombia y que aquí viven personas de sentimientos, de carne y hueso, y que también tenemos derecho a una vida digna», concluye Víctor.

Bojayá: del terror al silencio¹⁴

Minelia sabía que no estaba bien esto de que cabezas y troncos no estuvieran juntos. Hay ciertas cosas que no deben suceder. Hasta en la muerte debería haber reglas. Tampoco consideraba Minelia que vivos y muertos debieran yacer revueltos entre vísceras y lluvia. Por eso, Minelia gastó su tiempo entre las balas cruzadas de paramilitares y guerrilla en dos tareas urgentes. La primera, regalarle pequeños sorbos de agua con sal a modo de suero improvisado a las pocas personas que habían quedado con aliento dentro de la iglesia de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá (Chocó), y que no alcanzaron a hacerse oír y así escapar del infierno con el resto de aterrorizados supervivientes. La segunda requería de más pericia: poner junto a cada cuerpo ensangrentado de las decenas de niños que dejaron de serlo ese 2 de mayo de 2002, la cabeza con la que nacieron y de la que se separaron cuando las FARC lanzaron dos tanques de gas convertidos en bombas caseras sin precisión que cayeron en la iglesia donde se protegían de las balas unos 500 civiles.

Minelia, en este juego de apariencias, es la loquita del pueblo pero esa noche demostró tener más frialdad y humanidad que cualquiera. Más, eso seguro, que *El Alemán* –Freddy Rincón-, el jefe del Boque Élmér Cárdenas de los paramilitares que tomaron este pueblo unos días antes de la tragedia y que ha reconocido haber presenciado los largos días de batalla campal entre armados desde una avioneta, “con binoculares”. El Alemán, en las versiones libres rendidas ante la fiscalía colombiana, dentro del marco de la denominada Ley

¹⁴ Reportaje publicado por el autor en 2008 en el diario *El Tiempo* sobre la nueva Bellavista.

de Justicia y Paz, sólo reconoció ser responsable de una muerte: la de Minelia.

Los binoculares debían estar mal calibrados, porque Minelia, seis años después de esa matanza, la mayor en la historia sangrienta de Colombia, que dejó casi 90 muertos, 100 heridos e hipotecó el futuro de las otras 1.500 almas que poblaban Bellavista, sigue viva y habla, y habla, dicen unos que sin sentido. “Es la que dice más verdades en este pueblo”, refuta *Coca*, o Bernardina Vásquez, una de las líderes naturales de este pueblo ahora desgajado, trasplantado a la fuerza, despistado y enfrentado.

Trasplantados a la fuerza

Hasta septiembre de 2007, Bellavista era Bellavista. Un pueblo como tantos otros a las orillas del contundente río Atrato, expuesto a todos los actores de esta guerra colombiana que dice no ser guerra, a las crecidas de este caudal que asusta, al abandono estatal, a la lluvia que a veces parece incesante en esta región calificada como una de las de más pluviosidad del planeta. También era un lugar tranquilo. Allí, en las precarias bancas de madera clavadas en la ribera del Atrato he tomado algunos de los mejores rones de mi vida y he conocido a sus gentes, acostumbradas a convivir con el río, dispuestas a no perder la partida ante la pobreza. “No nos dejan disfrutar de esta tranquilidad”, me decía en julio de 2007 una muchacha de mirada triste y sonrisa floja.

Desde septiembre de 2007, Bellavista ya no es Bellavista. En ese mes, los últimos moradores fueron trasplantados a lo que el gobierno denomina Nuevo Bellavista y que la voz popular llama *Severá* –porque fueron años de promesas incumplidas hasta que se levantó este pueblo artificial a un costo de 34.000

millones de pesos colombianos (unos 15 millones de dólares)-. El viejo Bellavista es hoy un esqueleto sin piel. Lo camino con Carmencita, una de las cuatro misioneras agustinas que se han quedado como únicas habitantes de este pueblo fantasma sin fantasmas. Propios y extraños se han robado la madera de las casuchas, el piso del centro de salud, los techos de zinc... Lo que quedaba, ha sido pasto de las llamas en las que soldados colombianos han enterrado la memoria de este lugar. Solo queda en pie la iglesia donde ocurrió la matanza y la sólida casa donde viven las agustinas. Carmencito reúne en sus 150 centímetros de altura la dignidad de los que resisten. “Nunca estuvimos de acuerdo con como se hizo lo del nuevo pueblo, fue un chantaje”. Y así fue. Presencí en 2003 una reunión de la comunidad con Everardo Murillo, el responsable del proyecto por parte del gobierno nacional. Las opciones eran dos: o el nuevo pueblo tal y como lo habían diseñado los burócratas desde Bogotá o nada. Demasiados años de nada como para despreciar 265 casas nuevas.

Eso sí, hay maneras muy diferentes de describir Severá. Llego al Nuevo Bellavista en el bote de Macedonio, de un verde desgastado y con esas sillas plásticas recortadas en sus patas que hacen la vez de butacas de primera en el Atrato. Compró el renqueante motor de 15 caballos de potencia con parte de los 13 millones de pesos (unos 7.000 dólares) en los que el Estado valoró la vida perdida de su hijo de seis años, una de las víctimas de aquella matanza. “Ahora hay que subir todo porque hay ladrones en el pueblo. Uno no puede dejar nada en el bote. La Policía está ahí y no hace nada”. La cuesta para subir al Nuevo Bellavista se torna descomunal en este calor sofocante. El barro corre por la loma como testigo de la lluvia que inundó las nuevas calles hace unas horas. Es medio día y casi nadie está en estas calles sin árboles

donde el sol multiplica su poder. Las casas –diseñadas por la comunidad según el pomposo informe especial de la Presidencia de la República- fueron pensadas para otro lugar, seguro. No hay un solo vecino que recuerde haber participado en el diseño de estas cajas de fósforos, con poca ventilación y cuyas paredes de bloque acumulan el calor del día para convertirlas en hornos en la tarde.

Los pisos son de cemento sin pulir, sin pintar, sin nada. Las pocas paredes repelladas –“dicen que van a ir repellando todas”- son tan precarias como el clima. Durarán poco.

El balance final de la Presidencia se hizo a propósito de la visita del presidente Álvaro Uribe el pasado 23 de octubre para entregar este decorado de pueblo. Se hizo acompañar del secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez y de varios congresistas de ese país. El show fue casi perfecto. El informe oficial asegura que desde todas las casas se ve el río para mantener la cultura de estas gentes. Debe ser desde el techo, y no desde todos. El barrio conocido como las 80 casas está a más de un kilómetro del río. “Yo echo de menos mucho el otro pueblo, allá teníamos nuestro río y se conseguía la comidita fácil”, me dice una vecina que se esconde del calor tras los muros de su nueva casa. En el restaurante Punto y Coma –dos mesas acomodadas en la entrada de una casa como las otras- ya no acompañan el arroz y el pollo con patacones fritos de plátano verde, sino con un banano crudo. Extraña mezcla que se explica porque los botes que pasan por el río vendiendo pescado y plátano –ingredientes básicos de esta supervivencia- ya no paran en el Nuevo Bellavista por lo lejano de las casas. “Cuando paran, entonces cobran más caro por vender arriba. Le digo que estamos pasando apuro con la comida”.

No hay mucho que hacer acá. Ya no hay centro del pueblo, que antes se identificaba en el triángulo formado por la iglesia, la escuela y la cancha de fútbol del viejo Bellavista. Bueno, y por las tiendas-bares que se ponían en fila frente al río para construir un malecón ficticio. Ya no hay grupos de vecinos reunidos. Sólo se ve la actividad de los policías armados para combate y cuatro hombres jóvenes que beben cerveza en el lejano billar de la entrada.

“Con los policías ha entrado la vagabundería. Ahora se vende marihuana y *bazuko* (crack) y los pelaos (muchachos) la pasan tomando cerveza con ellos y aprendiendo malas cosas”. La queja de otra de las mujeres que guarda nombre para salvar vida se mezcla con el silencio generalizado sobre casi todo. “Es que hay informantes infiltrados y uno no sabe quién es quién”. Un silencio que según todas las fuentes también ha sido comprado en forma de empleos oficiales para los principales líderes del pueblo que hasta 2005 fueron respondones y ahora son corderitos.

La nueva guerra

La guerra en esta zona del Atrato ha cambiado de forma, no de crueldad. Cuando pisé por primera vez esta región, en 1998, el río era controlado por la guerrilla y los paramilitares desafiaban ese dominio entrando por tierra a las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde a punta de sangre y desmembramientos abrieron espacio para los cultivos de Palma Africana. En esos últimos y amedrentadores años del milenio no había transporte público por el río, las tomas violentas de uno u otro grupo se sucedían en Vigía del Fuerte, Mutatá, Pavarandó, en los ríos, en toda parte.

La matanza de Bojayá fue un punto de inflexión que reorganizó el control territorial y modificó sustancialmente la estrategia del Estado. Entré a Bellavista el 4 de mayo de 2002, dos días después de que, en medio de los enfrentamientos, 90 vidas, la mayoría de menores de edad, convirtieran la iglesia en una tumba abierta.

Para llegar allá, superamos al menos siete controles de la guerrilla, que dominaba Vigía del Fuerte, población en la otra ribera del río, frente a Bellavista. Allí se apelotonaban guerrilleros del Frente 58 de las FARC y víctimas del desastre. En Bellavista, junto al cementerio, como metáfora de esta guerra, se enfrentaban unos 250 paramilitares contra unos 500 guerrilleros. Una lucha desigual que trataba de compensar el ejército con bombardeos selectivos que mantuvieron a la población civil bajo las colchonetas y sin la posibilidad de hacer el duelo. La mayoría de los muertos de la iglesia fueron a parar a una fosa común que hoy nadie visita.

Hoy el Ejército y la Policía colombianos están en los principales núcleos de población. Lanchas rápidas artilladas –pirañas-, patrulleras y puestos de control se reparten a lo largo del río generando una ficción de control que se debilita con la realidad. Nada evitó a mediados de mayo que la guerrilla robara un bote con mercancía en un punto conocido como Brazo de Buchadó, nada evita que los miembros de Aguilas Negras –paramilitares reagrupados bajo otro nombre- estén en Vigía del Fuerte o en Quibdó, la capital del departamento del Chocó.

Todo es más sutil ahora, pero igual de peligroso para la población civil. “Desaparecieron a un vecino en Napipí hace 10 días”, “De Bellavista se han tenido que ir cuatro muchachos que aparecían en una lista de los paramilitares”, “En el Bajo San Juan mataron a un líder

indígena y desaparecieron a otros cuatro”... los relatos son interminables. “Pero ahora es muy difícil tener información, que la gente denuncie. Hay mucho miedo por los infiltrados. Los derechos humanos se siguen violando pero ahora, además, no existe el derecho a la libre expresión”, se queja Uli Kollwitz, de la Comisión Vida, Justicia y Paz.

Y las comunidades están más solas. El dinero y las presiones han sembrado la división en muchas de las organizaciones civiles de resistencia que lograron que estos pueblos no se desmoronaran en los duros años entre 1997 y 2002, Naciones Unidas se excusa en las reuniones privadas con el argumento de que todo lo que ocurre es tema de narcos y en Colombia el Chocó sigue siendo el lugar lejano, inhóspito e inviable que siempre han retratado los medios y los opinadores.

El peso de las mentiras

La metamorfosis de la guerra contamina casi todo. Antún Ramos es el sacerdote que se convirtió en un héroe para la población de Bellavista el 2 de mayo de 2002 cuando, bandera blanca en mano, logró arrastrar entre las balas a los supervivientes de la iglesia hasta los botes en los que huyeron del infierno. Ahora, Ramos es párroco en el barrio Las Américas de Quibdó. Está orgulloso de las obras que está haciendo en su nuevo destino, pero no sale del asombro de la declaración de *El Alemán* ante la fiscalía en las que éste lo responsabiliza de la muerte de ese mundo de civiles por meterlos en el templo y, según el paramilitar, haber cerrado con llave.

“Yo no sé si hay que contestarle a ese hombre...”. Esa duda ronda en todos a los que *El Alemán* ha untado con sus palabras. “La sensación es que lo que él dice vale

más que lo que nosotros vivimos”, insiste Coca desde su nueva casita en Bellavista.

Rosa Emilia Córdoba, a sus gastados 48 años, describe a las víctimas de otra manera: “Somos las sobras del mundo”. Esta mujer carga como una losa en su alma la muerte en aquella iglesia de su hijo Ilson, de 19 años, de su madre Rufina, de 76 años, y el estigma de ser desplazada en Bojayá. Rosa no había vuelto a Bellavista desde que salió de allá el 4 de mayo huyendo en pijama, con una hija de 15 años herida de bala y dejando atrás todo lo material y sus dos muertos. Viajó hasta allá el pasado 28 de mayo para escuchar las grabaciones con las palabras de *El Alemán* que la fiscalía presentó a la comunidad para someter a una especie de terapia colectiva de 6 horas y dudosos beneficios a los habitantes fantasmas del nuevo pueblo. “no me atreví a ir al pueblo viejo, demasiados recuerdos. No pude”. Como tampoco va poder regresar a vivir en la casa que le correspondió: “Yo no quiero regresar a mi pueblo por los recuerdos, como por la tristeza y bueno... por la rabia que tengo. Rabia con la guerrilla, rabia con los paramilitares y... y con el Gobierno oiga, que eso no debía de haber pasado”.

Rabia y resignación son los dos estados que más aparecen cuando se pregunta a estas gentes cómo están seis años después. Han tenido que esperar este tiempo para que un juez administrativo de Quibdó confirme que el Estado es responsable por omisión de aquella matanza, ya que recibió alertas tempranas de diferentes organizaciones días antes del suceso, advirtiendo de la inminencia de un choque armado de grandes dimensiones en pleno casco urbano. Seis años para escuchar eso y para sentir aun que no se ha hecho justicia. Ahora, en Quibdó se encuentran cientos de desplazados de aquellos miles que salieron de todo el municipio de Bojayá en 2002. Los estudios señalan que

apenas regresó el 60%. No hay empleo en una ciudad sin fuentes de empleo y las condiciones de vida son precarias. “De mi familia cayeron 12 en esa iglesia. Yo no pienso volver, tengo el nervio en el cuerpo”. Miriam Martínez, 58 años, habla con los brazos cruzados y la tristeza enquistada. Junto a otras cinco mujeres trabaja por unos pesos fabricando hostias para las iglesias. “Es poca plata, pero lo agradecemos, aquí es difícil amañarse [sentirse bien] porque nos miran como si con nosotros llegara todo lo malo”.

Seis años han pasado y la sensación de frustración es más fuerte que la posibilidad de un futuro. A Bellavista entré en plenos combates el 4 de mayo de 2002 con la primera comisión humanitaria que rompió el cerco de miedo y riesgo. Estaba conformada por miembros de la Diócesis de Quibdó, los únicos que han estado con los civiles todo el tiempo, sin pestañear. La religiosa Yaneth Moreno iba en ese bote y con ella estuvimos bajo los bombardeos y retenidos por la guerrilla en la retaguardia del frente de esa guerra. Hoy, la hermana Yaneth siente que nada mejora, aunque sigue luchando con la misma energía. “Es tan frustrante ver como no solo las cosas han vuelto a ponerse tan mal sino que los medios en Colombia ya no están interesados en nada de lo que ocurre. Ahora estamos en el silencio”. Cuando me dirijo al aeropuerto de Quibdó, de salida, siento que volver acá es regresar a la realidad más perversa de Colombia, la que queda solapada tras los aspavientos de los Uribes, los Chávez o de los bravucones armados de uno u otro bando. Y al caminar hacia el avión, volteo la vista y una pancarta me recuerda que en esta guerra, como en casi todas, la verdad queda solapada por los discursos y las mentiras: “Bienvenidos al Chocó, tierra de biodiversidad y seguridad. Policía Nacional de Colombia”. Ciao.

«¿Es que somos invisibles?»

A nosotros nadie nos descubrió, existíamos mucho antes de la invasión europea, fecha de luto para nosotros. Los pueblos negros llegaron luego, fueron secuestrados y traídos como esclavos. Aquí se integraron con la naturaleza y comenzaron a construir una nueva historia desde su cultura y se hicieron para siempre parte de estas tierras. En medio de las dificultades fuimos construyendo juntos una historia en una misma tierra. Juntos ahora enfrentarnos una segunda invasión. Hoy y siempre el Chocó indio no vive esperando la muerte. Recoge el espíritu de sus muertos para recuperar su vida. Nuestro silencio se ha convertido en un solo grito por la unidad, tierra, cultura y autonomía. Decimos que aún existimos...

Líder indígena de la Orewa, Colombia Pacífico, tomo 1

Los indígenas hablan poco, pero sus ojos gritan. Verlos caminar por Quibdó, Murindó o Vigía del Fuerte es observar a personajes transitorios que se encuentran incómodos en los cascos urbanos donde permanentemente son juzgados, cuestionados. Pasean por las calles o entran a los edificios de las instituciones y parece que nadie los ve. En la escala de los desheredados del Chocó, los indígenas ocupan el último puesto. «¿Es que somos invisibles?», se pregunta Plácido Bailarín, cabildo mayor (máxima autoridad) de las veintidós comunidades indígenas que subsisten en el municipio de Bojayá. No son invisibles, pero sí incómodos. Ocupan el 23% del territorio chocono y en sus manos están títulos colectivos de propiedad de 1,1 millón de hectáreas. Su cosmovisión choca de frente con la cultura de la explotación de los recursos, incluso con las creencias cristianas, mayoritarias en la región y en Colombia.

En mi último viaje a la zona pude presenciar una escena imposible de imaginar unas décadas atrás. Al final de una pequeña celebración religiosa católica en la que estaban presentes varios indígenas, el sacerdote le pidió a Víctor Carpio Conquista (terrible suplicio en el apellido), presidente de la Organización Regional Embera Wounaan (Orewa), que cerrara el acto.

Las palabras salían de su boca de una manera suave. Explicó cómo para los Wounaan, su pueblo, y para los Embera existen tres mundos: el de abajo (Zhiábera), donde viven los chaberá, que son personas con el rabo tapado que se alimentan del olor a comida; el del medio, que es el que habitamos los hombres, y el de arriba (Bajia), donde viven «los que se van». Según explicó Víctor Carpio, cuando los indígenas mueren van al mundo de arriba; si han obrado bien en el mundo de en medio se quedan en el Bajia morando; si han obrado mal vuelven al mundo de en medio convertidos en animal. «Antiguamente, había una escalera de plantas transparentes que nos comunicaba con el mundo de arriba, pero nos hemos portado demasiado mal y los dos mundos se han ido alejando», me especificó más tarde Víctor. Lo que aprendieron ese día los asistentes a la eucaristía es que los no indígenas no van al mundo de arriba al morir. Van directo al Zhiábera, o mundo de abajo.

«Eso quiere decir -les advirtió el líder indígena- que después de muertos no nos vamos a volver a ver. Tenemos que aprovechar esta vida para entendernos entre indígenas, negros, blancos y mestizos, porque después ya no hay nada que hacer», concluyó Víctor en medio de las risas complacientes de las otras personas, abrazos cariñosos y alguna que otra broma. La anécdota habla de una tolerancia imposible, como decía, hace unos años. Precisamente, los internados «educativos»

de los misioneros para indígenas, abiertos hasta hace poco, tuvieron buena parte de culpa de la violenta aculturización que han sufrido los pueblos Embera, Wounaan, Tule y Chamí del Chocó.

El antropólogo colombiano Luis Guillermo Vasco Uribe describe así el efecto de esos internados en el libro *Entre selva y páramo* (ICANH, Bogotá): «Allí, finalmente, aprenden que ser indios es ser salvajes y que deben dejar sus usos y costumbres, que deben renunciar a lo que son para llegar a ser “como” los blancos. Allí se abren al mundo blanco y se niegan al mundo indígena y se convierten en víctimas del etnocidio. Y allí, queriendo ser blancos, caen en la última trampa, y la principal.»

Carpio está de acuerdo con este análisis. Fue precisamente en los internados -«donde las monjas nos tenían bajo un régimen como de colonizados»- donde se empezó a gestar la Orewa. Cuenta cómo en el internado de Istmina, en el alto San Juan, «los indios se revelaron por el maltrato en el año 1977 y llegaron a Quibdó». Algunos de esos estudiantes eran Francisco Rojas, Florentino Barriga y Eusebio Tuna, líderes ya históricos para los 45 mil indígenas chocoanos. Del comité estudiantil que crearon en esos años se llegó a un primer encuentro indígena, celebrado en Quibdó en 1981, y a la creación de la Orewa, que ahora reúne a todas las etnias -«algo que antiguamente no hubiéramos soñado»- y gobierna a las 250 comunidades que habitan los 105 resguardos reconocidos por el Gobierno. Cierto es que la misma Iglesia, de la que renegaban, fue la que les ayudó a dar forma a la organización. Si no la misma, una parte, especialmente los religiosos claretianos.

Ahora, Plácido Bailarín Pipicai no es invisible, es un líder indígena que a sus 34 años de edad representa a los 4.200 embera del municipio de Bojayá y que en su propia

historia acarrea la huella de la expulsión. Nacido en el río Tolo, municipio de Acandí, a los 10 años de edad tuvo que ver cómo la familia empacó sus pertenencias y huyó hacia Unguía ante el avance de los terratenientes. Allí, en el río Tanela, su padre, Roque Bailarín, luchó para que se creara y legalizara un resguardo indígena, pero las 950 hectáreas que se consiguieron no eran suficientes para la cantidad de habitantes. «Para una familia de unas quince personas sólo disponíamos de cuatro hectáreas y, además, dentro del resguardo, seguían estando finqueros que utilizaban nuestras tierras -recuerda Plácido-. Así que volvimos a movernos hasta que llegamos al río Opogadó [municipio de Bojayá], y allí encontramos territorios donde practicar la agricultura tradicional indígena.»

Del Opogadó no ha vuelto a moverse Plácido. Allí, en la pequeña comunidad de Egoraquera (78 habitantes) trabaja y vive. Allí ve cómo la selva que tanto les dio está cada vez más enmagrecida. «Desde la época en que Dios crea, hace que la naturaleza sea como un hermano más para nosotros la naturaleza depende todo el espíritu de los pueblos indígenas, porque en ella están las medicinas naturales, están los recursos con los que se construyen las viviendas, aunque ya no se consigue. A uno le da mucha tristeza que estos terratenientes destruyan los recursos naturales, porque para los indígenas eso es lo más importante.»

El problema es muy profundo. La destrucción del medio ambiente, la explotación indiscriminada de recursos supone un atentado contra la cultura Embera, un escalón más de esta «segunda invasión». Un elemento fundamental del frágil equilibrio vital embera que está desapareciendo es la casa, el dearade, una construcción circular y sin paredes, elevada del piso (tambo), donde vive un núcleo familiar. «Ya no hay forma de construir el dearade, la verdadera casa. El dearade para el indígena

es muy importante por que ahí se refleja todo el conocimiento, la convicción. Cuando uno va creciendo, ahí los padres le enseñan muchas cosas. Una casa de esas es como el mundo que nos rodea, está cargada de símbolos muy importantes para los Embera.» Sin casa, el universo se estrecha, y sin jaibaná la sociedad se va deshilachando. Los jaibanás son los médicos tradicionales, las autoridades, capaces de tener control de los sueños, a través de los cuales transmite sus conocimientos. Los jaibanás entroncan directamente con el chamanismo y, para los Embera, el jaibaná es un sabio porque tiene la capacidad de «ver a través del sueño». Un dirigente indígena de la región lo explica así en el libro Colombia Pacífico: «Así como nos comunicamos con la naturaleza, también nos comunicamos con los sueños. El sueño es una realidad, y soñando se pueden hacer realidad las cosas; a través de él sabemos qué va a pasar y qué debemos hacer para cuidarnos. El que tiene el poder del sueño es el jaibaná puede ver, conocer, volar y viajar por los mundos. Muchas otras cosas nos hablan y muestran señales. Nosotros sabemos que el hombre occidental cree que todo esto es mentira, pero desde hace miles de años los indígenas sabemos que es así.»

Ahora los indígenas del Atrato se mueren de enfermedades comunes mientras tratan de conseguir medicinas «de blancos». Antes eran atendidos por los jaibanás y quedan pocos de estos «sabios».

Plácido lo tiene claro: «Hay que fortalecer la cultura porque eso significa apropiarse del territorio donde vivimos. La cultura depende del territorio, del territorio depende el ser humano y, si no hay territorio, no hay vida. Hay que recuperar los conocimientos tradicionales, la medicina tradicional, a los jaibanás... No se han perdido del todo, pero ha habido un descuido por parte de las comunidades: se han creído que todo lo que se usa en el

mundo blanco es lo más importante, los medicamentos y eso.» Para el antropólogo Vasco Uribe hay también razones relacionadas con la lucha de culturas y creencias: «El blanco que identificaron [los religiosos católicos] en esta guerra fueron los jaibanás, los sabios propios en el conocer-hacer, a quienes acusaron de trabajar en connivencia con el demonio para realizar “hechicerías”.» Ahora la situación, al menos en el Chocó, es diferente, ya que es la propia Diócesis, con la Orewa, la que habla de etnoeducación, de recuperación de tradiciones, de autonomía política, cultural y social dentro de los territorios indígenas y negros.

«Enemigos del desarrollo»

Todo el trabajo en esa línea de autonomía ha sido duramente golpeado por el conflicto armado. El bloqueo del Atrato y la presencia de grupos armados en muchos de sus afluentes han reducido la movilidad de las comunidades indígenas y también amenazan con derrumbar su cohesión, ya que algunos de sus miembros marchan con los actores armados convencidos de que las armas son el camino. «Los actores armados vienen atropellando y amenazando a las comunidades -relata Plácido-, utilizando a los indígenas para que, de pronto, les sirvan de guías o para que les lleven sus cargas, y si se niegan a eso los asesinan. [¿No era esto lo que hacían los conquistadores españoles hace más de cinco siglos?] De pronto si no existiera la Orewa la situación sería peor y se involucraría en la guerra a los indígenas, que es lo que buscan los actores. Cuando se acercan a la comunidad y plantean su política... pues algunos jóvenes ven que coger el arma es una mejor solución. Hay indígenas en cualquiera de los grupos, pero la mayor parte está

resistiendo de manera pacífica, entienden que la solución no es coger el arma.»

Las amenazas son permanentes para estos pueblos, considerados «enemigos del desarrollo». Y para los enemigos hay una vieja receta que suele funcionar: divide y vencerás. Quizá por eso poblaciones indígenas y negras han estado enfrentadas durante décadas y, a pesar de que se nota un mejoramiento de las relaciones, siguen detectándose roces. Para Plácido, «el enfrentamiento entre negros e indígenas ha sido una de las políticas de los gobernantes. Los políticos del Chocó han buscado enfrentarnos, les dicen a las comunidades negras que los indígenas, bueno ellos nos llaman *cholos*, los vamos a sacar de la tierra. Eso ha sido muy fuerte. Lo hacen, por una parte, para tener un poder político en la región y, por otra, para echar la culpa a los indígenas de que el Chocó no se desarrolle. Eso se ha difundido por todos los lados».

El crítico antropólogo que ha acompañado sin saberlo este capítulo, Vasco Uribe, afirma respecto a este enfrentamiento en el Chocó: «No creo que la solución de las contradicciones que se presentan entre la población negra y la población indígena del Chocó puedan resolverse, primero, ignorándolas, y, en segundo lugar, por sí mismas, conversando sólo entre indígenas y negros, porque ambos sectores están movidos por unas fuerzas que no responden a su propia dinámica y que vienen de lo que ellos mismos llaman la “colonización paisa”.» En la zona, indígenas y negros sí hablan y, en la mayoría de los casos unen sus voces para denunciar la situación de violencia y abandono que ambas minorías sufren. O ponen en marcha iniciativas como la Campaña del Autodescubrimiento que, desde 1989 a 1992, trató de que las comunidades negras e indígenas, de manera

conjunta, reescribieran su propia historia, se miraran a sí mismas y se reconocieran.

Para los indígenas, al igual que para la población negra, todo tiene un trasfondo de racismo, una especie de gran espalda que ven de lejos, llamada Colombia, y que nunca se gira a mirarlos. Mientras en las lujosas tiendas de Artesanías de Colombia se vende la tradición indígena del país a un turista ansioso de encontrar etnicidad en su «viaje de aventura a *Sauzamérica*», los indígenas no tienen acceso a servicios de salud, no reciben educación en su tradición, no pueden construir, como veíamos antes, ni siquiera su propia casa tradicional, sus líderes mueren cada día en medio de las balas, no perdidas, sino bien dirigidas... Según la Orewa, sólo en el medio Atrato, en los últimos años han muerto unos veinte dirigentes indígenas, y cuando se producen desplazamientos indígenas a Quibdó, como en septiembre de 1999, además del desarraigo que conlleva esa «peregrinación», el choque cultural con la ciudad, con las costumbres, incluso con la forma de vestir, es violento.

«Uno como ser humano también siente temor ante la situación -confiesa el cabildo mayor-. Uno no sabe si en cualquier momento lo cogen por ahí y lo pueden borrar. Y tengo mucho temor por las comunidades indígenas, no por lo que ha pasado hasta ahora, sino por lo que queda. Va a haber más enfrentamientos, más fuertes y peores. El gobierno dice que allá [en el medio Atrato] está la seguridad [el Ejército], pero eso no es seguridad para nosotros. Uno sabe que va a haber más víctimas, y la mayoría de la población que sigue en el territorio ahora es indígena.» La resistencia indígena, unas veces por convicción, otras por aislamiento, ha sido un ejemplo que en la región se trata de extender a otras comunidades. «Los indígenas, de algún modo, son los que mejor han resistido al conflicto», justifica un antropólogo local. Lo

que quiere decir es que la autonomía, cierta autarquía ejercida por los indígenas, los ha hecho más fuertes, más resistentes a los asesinatos de líderes o a las «invasiones» de diverso pelaje.

En talleres con comunidades negras y mestizas he podido observar cómo se busca un paralelo con la forma de organización indígena. Recuerdo, por ejemplo, un encuentro con la comunidad de Mesopotamia en 1998. En ese momento había desplazados en un caserío cercano tras una incursión paramilitar y los talleristas comenzaron a plantear unas preguntas desconcertantes para la población pero que, al final, encontraron respuesta. Se trataba de analizar si ese grupo humano era autónomo o no. Poco a poco, estos campesinos se dieron cuenta de que tenían una cultura propia (representada en los cantos, los ritos funerarios, la transmisión oral de la historia cercana...), un sistema de control social propio (no podían buscar a la Policía o al juez para solucionar los conflictos de la comunidad y aplicaban sus propias reglas del juego social acumuladas en la memoria, aunque no en papel), una organización política única (a través de la autoridad de los ancianos y de los líderes tradicionales), una medicina basada en la naturaleza y no en la farmacia...

De algún modo, el mensaje era: el hecho de que el Estado los haya abandonado no significa que renuncien a organizarse y a defender su tierra y sus costumbres. Es como una inmensa terapia de grupo que buscara recuperar la memoria y la autoestima. La diferencia de actitud entre negros e indígenas algunas veces es notable, incluso a la hora de dar razones para vivir. La mayoría de los negros y mestizos a los que les pregunté qué es estar vivo aseguraron que era «un riesgo», «un milagro», «una bendición», «una carga», y, así, un sinfín de argumentos que van desde atribuir a un ser divino la vida hasta la

resignación más contundente ante los sufrimientos. Cuando le pregunté a Plácido Balarín qué es estar vivo, respondió: «Es un deber, un mandato. Estar vivo trae muchos riesgos, pero nosotros vivimos para defender los territorios, los recursos naturales, porque nuestro Dios nos dejó a los indígenas para que cuidáramos y compartiéramos los recursos naturales. Si no estuviera cumpliendo ese tipo de mandato, mejor sería no existir porque la situación es muy crítica.»

«A Dios le toca esperar»

*Estar vivo en Colombia es un milagro
que espero siga dándose.*

*En mi caso, me gustaría morirme de viejo,
pero sin dejar de hacer lo que hay que hacer.*

Jesús Albeiro Parra

Cuando se entra en una oficina pública de Quibdó parece que se estuviera en algún lugar paradisíaco del Caribe donde lo más urgente es mirar el mar a través de la ventana más cercana. Todo es lento, en muchos casos ineficiente, en la mayoría indiferente. En seguida se evidencia que de Caribe... nada de nada. Los muebles desvencijados, las paredes despintadas, los ventiladores desnucados y el desdén humano anuncian que la crisis es profunda y la indiferencia real. El Estado duerme y deja que lo poco construido se vaya desmoronando, enmohecido y debilitando cada vez más.

Sin embargo, al entrar al conocido como Convento, sede de la Pastoral Social de la Iglesia católica en Quibdó, da la sensación de estar ingresando a un centro de operaciones de dos plantas, donde en una sala hay reunión de planeación al mismo tiempo que en otra se dicta un curso para desplazados, y por el corredor pasan dos hombres con canecas llenas de combustible para la lancha de la comisión humanitaria que sale al río Atrato cargada de banderas blancas y coraje a prueba de «malos» (¡qué tarea saber quién es quién!). En una esquina hay sacos con medicamentos; en un cuarto, comida y ropa; en todos los rincones, documentos que acumulan la historia del conflicto en la región. Para saber quién es

quién hay que comenzar a aprender una nomenclatura especializada de congregaciones religiosas, tipos de vinculación a la Iglesia, comités, equipos misioneros, tipos de pastorales...

- Entre los acompañantes que van a estar con las comunidades resistentes también va a haber laicos.
- ¿Laicos? ¿Qué son laicos? -pregunta una funcionaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.

El vocabulario se amplía con términos como «resistente», «autonomía», «acción urgente», «ley 70», «cabildos» o «concejos comunitarios», y para ubicarlos en la realidad se necesita un mapa mental para saber si el Alto Baudó está al norte o al sur, si La Boba es una comunidad o un apodo, si Domingodó está cerca de Curvaradó, y si Jiguamiandó es un río o un pueblo. La gente de la Diócesis maneja este enjambre de nombres indígenas, términos y lugares que existen sin existir como si del ABC se tratara.

Las monjas parecen monjas por el hábito, pero caminan con una decisión y manejan dos celulares al tiempo como si de ejecutivas de Naciones Unidas se tratara. Los sacerdotes, en su mayoría, sólo se distinguen por la buena educación y por el excesivo optimismo que contonean, y siempre hay uno o dos casos en los que hay que preguntar directamente: «¿Usted es religioso?»

Entrar a la Pastoral Social de Quibdó es constatar que nada es homogéneo, ni siquiera la Iglesia. Prejuicios sobre la excesiva pasión por la eternidad que tienen los religiosos o sobre la costumbre de rezar antes que actuar, se desfiguran aquí. La Iglesia en el Chocó, aun sin desearlo, sustituye al Estado y asume la actividad frenética que éste rehúye.

Al frente de esta «gente de Dios» está un personaje peculiar, de discurso trasnochado en estos días de modas asépticas, políticas despolitizadas y festines en nombre de la tolerancia intolerante con lo políticamente incorrecto. El acento lo delata paisa (antioqueño), la pulsera indígena de varias vueltas que lleva en la muñeca izquierda marca un territorio y sus palabras son tan cortopunzantes como sinceras. Jesús Albeiro Parra Solís, de 41 años y natural de la población de Bolívar (en el suroeste de Antioquia), es como la batería que alimenta a todo este equipo y es el responsable del tipo de camiseta que se enfunda antes de cada crisis.

Como en muchos casos, Albeiro -como le llama la mayoría de la gente, prescindiendo incluso del prefijo «padre»- es cura por carambola. Campesino, de origen humilde y con ganas de estudiar: esa jugada suele terminar en un seminario, y Albeiro fue a parar al del Carmen de Atrato (municipio chocoano, pero de población mayoritariamente de origen antioqueño). «Quería estudiar y trabajar con la gente humilde y sencilla, y si para hacer eso tenía que ser cura, pues... me hacía cura.» La transparencia de este sacerdote, de estatura baja y ropa luminosa, es equivalente a los problemas que le ha causado esa manía de escupir lo que le arde.

Las autoridades policiales y militares primero, y los grupos armados al margen de la ley, después, le han cogido ojeriza en diversas partes del Chocó. La mentalidad católica «clásica», la cultura occidental y la blancura de piel chocan con la realidad extramuros de estas tierras, y las dos únicas opciones por seguir son empecinarse en moldear todo a imagen y semejanza o dejar abierta la puerta a cambios fundamentales en la forma de pensar y de mirar la religión.

«El río tiene algo mágico, las cañadas, la naturaleza, pero más mágica es la gente, las comunidades negras e indígenas... Cuando se va metiendo en eso siente que ya es parte de uno y se va quedando. Pero sí es cierto que cuando uno viene de interiorano le van cambiando los esquemas, viene con toda esa teología tradicional, esa manera de hacer iglesia tradicional... Entonces, a uno le pega muy duro, pero si se empieza a hacer comparaciones con la vida de Jesús, pues uno dice: “Hombre, aquí está la esencia del evangelio, de los principios cristianos”.»

A este hombre le ha tocado hablar con todos los grupos armados, «rescatar» gente de las instalaciones militares, gestionar liberaciones de secuestrados, levantar cadáveres, reconocer amigos en las frías mesas de la morgue, reunirse con embajadores y dirigentes de diferente pelaje, llorar, jugarse la vida. También a otros religiosos y religiosas de la zona, pero la diferencia es que él ya conocía esa realidad del conflicto desde los años en los que fue párroco del Carmen de Atrato, cuando se enfrentó a terratenientes, a los dueños de las minas, al ELN, a la Fuerza Pública.

«Me acuerdo mucho de cómo en febrero de 1990, el Ejército me detuvo en Lloró. Me tuvieron medio día retenido, me acusaron, me señalaron, y en ese entonces no había Defensoría ni tanto organismo al que acudir. A pesar de eso, tocó ir con el obispo [Jorge Iván Castaño, obispo de Quibdó hasta abril de 2001] a la -Procuraduría y a la Brigada a denunciar el atropello, porque la única acusación era que no entendían por qué un misionero podía subir y bajar por los ríos sin ser molestado por la guerrilla y que éramos comunistas porque andábamos organizando a las comunidades, y eso era “comunismo subversivo”.»

Carmen de Atrato fue la escuela de Albeiro y el lugar donde en unos años se cocinó la opción de la defensa de los derechos humanos por encima de cualquier cosa, que ahora marca todo el trabajo de la Diócesis. «Llegué al Carmen y empezamos a hacer un trabajo con los campesinos, las acciones comunales, a ver las injusticias de los dueños de las fincas -el sacerdote hace memoria-. Allí hay una mina de cobre de un convenio colombo-japonés, de los Gaviria Zapata de Antioquia, y no entregaban regalías al Municipio. Los obreros eran explotados y empezamos a trabajar con ellos, y eso... pues dio como resultado un sindicato. ¡Imagine! Claro, eso nos trajo muchos señalamientos. También organizamos a los campesinos en los temas de salud, de educación... Ya en el año 92 llegaron las hermanas salvatorianas, y con ellas y la Pastoral Indígena, hicimos como una alianza. A raíz de todo ese trabajo es que empezamos a hablar de derechos humanos. Eso, en el panorama nacional, era el camino para ser satanizados, señalados de subversivos, incluso entre nosotros mismos, dentro de la Iglesia, pero al fin llegamos a tener un comité propio de derechos humanos que agrupaba a 45 representantes de las veredas y de las diferentes organizaciones, y fue como el inicio de todo este trabajo que ahora seguimos desarrollando.»

Las piedras en el camino las ponían diversos sectores de fuera y de dentro del Carmen. «Fue una experiencia muy dura porque la misma sociedad tradicional carmeleña, la que venía manejando el pueblo, los jefes políticos, las viejitas del pueblo, como las llamamos cariñosamente, empezaron a sentir que el curita y las monjitas habían llegado a acabar con la fe del pueblo, pero después la gente conoció toda la propuesta y... como que dijo: “Por ahí es.”»

En febrero de 1995, Albeiro asumió la dirección de la Pastoral Social de Quibdó y, desde que en 1996 arreciara

el temporal de balas, no ha callado. Ha denunciado con decenas de comunicados los abusos de unos y otros, ha peleado con autoridades, se ha enfrentado a la propia Iglesia. «Pero yo siempre he dicho que cuando se tiene una posición clara respecto a todo este conflicto armado y cuando esa posición es al lado de las víctimas, de las comunidades, me parece que el mundo se puede venir encima y uno va a seguir ahí parado. A mí me han señalado de muchas cosas, pero no han podido demostrar nada, sólo el trabajo y que hemos estado ahí, al lado de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, de la gente a la que le violan sus derechos. Frente a la misma jerarquía eclesial, yo sé que a la Diócesis de Quibdó la han señalado por el trabajo con las comunidades. [...] Y yo sé que a raíz de los hechos de Bojayá algunos de nuestros comunicados han causado críticas en algunos sectores de la Iglesia... Pues, no sé, que vengan aquí y miren, a ver si son capaces de quedarse callados.»

Es como si no hubiera tiempo para pensar en consecuencias, en discursos oficiales o en sutilezas diplomáticas. Es igual que cuando, hablando con el sacerdote Jorge Luis Mazo, unas semanas antes de que lo asesinaran, le pregunté por qué casi nunca hablaba de Dios. Su respuesta fue contundente: «A Dios le toca esperar. Tenemos demasiados problemas aquí en la tierra. Cuando los mitigemos habrá tiempo para hablar de Dios, aunque Él es el que me da fuerza para enfrentar esta locura.»

La muerte de Jorge Luis o del misionero Michel Quiroga han sido golpes muy duros contra los religiosos que trabajan en el medio Atrato. También la pérdida de centenares de civiles, miembros de las comunidades en que trabajan. Aun así, una especie de barniz de esperanza brilla en estas gentes. Carmencita, una monja agustina que no levanta más de 1,50 m. del suelo, es

un ejemplo de energía y tesón. Creo que nunca la he visto reír abiertamente. Tampoco llorar. Ella fue una de las monjas que vivió en primera persona los sucesos de Bojayá. Compartir con las religiosas y los religiosos los días posteriores a la matanza fue sentirse pequeño (a pesar, quiero ser honesto, de mi escepticismo religioso). Algunos de ellos estaban heridos, a la mayoría le había tocado vivir las escenas dantescas de la capilla, las monjas tuvieron que tapar brechas y contener vísceras con gasas... y, a pesar de ello, ninguno quería abandonar Vigía del Fuerte, donde tenían la base para atender a supervivientes y desplazados inmediatos. «Si no fuera por esta gente de la Iglesia nosotros habríamos desaparecido hace mucho tiempo, ¿no cree, señor?», me pregunta un hombre, superviviente de la matanza.

El Defensor del Pueblo del Chocó, Alberto Booder, opina lo mismo: «Estos curas son unos verracos. Mire, yo le digo que si ellos no hicieran lo que hacen... esto sería mucho peor. Son los únicos interlocutores válidos.»

«Yo siento vergüenza de ver esos equipos misioneros, monjitas, ilaicos!, ver su coraje... Yo los valoro, los respeto, los admiro, me siento orgulloso de tenerlos. Cualquiera diócesis o institución se sentiría honrada de tener gente de esta talla», dice con emoción el padre Albeiro al hablar de su equipo. Pero ¿de dónde sale tanta fuerza, tanta energía?

El director de la Pastoral Social pone el ejemplo de Jesús. «Yo miro el evangelio y digo: “Hombre, tanto que fregó [molestó] el hombre [Jesucristo] y lo que luchó y sólo pudo medio organizar a doce hombres.” Entonces uno trata de vivir eso acá. Por otro lado, ver las comunidades, ver que a pesar de todo están ahí, no ahora, sino desde hace 500 años... Entonces, uno dice: “Si éstos siguen aguantando, uno que está aquí de

paso cómo va a tirar la toalla.” De alguna manera, si no tapamos los infiernos se va todo agua abajo y uno saca fuerza de la gente para que no ocurra.»

Culpa o responsabilidad

Con este grupo humano pocas veces se habla de Dios, aunque siempre esté en su boca. Se discute de derechos sociales, de etnoeducación, de organización comunitaria, de talleres, de medicina tradicional o de los grupos armados. Su contexto no es de velones o de rosarios. Ahora, sienten que buena parte del trabajo que han desarrollado se derrumba a punta de bala. La organización de las comunidades, las capacitaciones de promotores de salud, las tiendas comunitarias... todo se está desvaneciendo ante la urgencia de «apagar incendios»: atención a los desplazados, acciones urgentes de protección, misiones humanitarias, comisiones de verificación...

«Hacia delante, vemos que vienen momentos muy duros para las comunidades porque hay muchos intereses en el escenario -vaticina Albeiro-. Hay muchas comunidades que, a pesar del sufrimiento, están dispuestas a luchar por su territorio. En medio de todo, vemos a una gente con una esperanza muy fuerte. Entonces, eso nos lleva a decir que no nos podemos ir de aquí; retirarnos sería cobardía, sería traicionar todo en lo que creemos. Nos va a tocar seguir corriendo, apagando incendios, pero lo más importante es no perder el horizonte. Lo primero que nos toca es defender la vida, así sigan matando gente, pero al menos que no nos maten a todos para que el que quede ponga la cría. Pero, por encima de todo, debemos seguir defendiendo el territorio.» Éste es el eje de todo el discurso: el territorio y la injusticia secular.

El Chocó es un inmenso pedazo de tierra codiciado por unos pocos que, a la vista de los datos, imponen sus estrategias de muerte y explotación ante la indiferencia de los muchos. Cuando se reflexiona sobre esa indiferencia, sobre esa «invisibilización» a la que es sometida una parte del territorio por el resto de Colombia, viene bien escuchar al filósofo español Reyes Maté, quien, en entrevista publicada por la revista *Análisis Político* de la Universidad Nacional de Colombia, decía:

«Las desigualdades existentes son producto del hombre, de las acciones del hombre, y hay que entender que este mundo lo hicieron nuestros abuelos y nosotros lo hemos heredado. Ahora bien, sucede que algunos heredaron las fortunas y otros los infortunios. Pero entre las fortunas de los unos y los infortunios de los otros hay una relación. Walter Benjamin decía: No nacemos inocentes. No es que nazcamos culpables (la culpabilidad es personal e intransferible), pero la responsabilidad sí puede heredarse. Si mi abuelo ha sido un ladrón y yo heredo su riqueza, yo no heredo la culpabilidad de mi abuelo, pero sí su responsabilidad. La responsabilidad significa tener que responder a las preguntas del otro. Visto desde esta perspectiva política, la justicia consiste en responder a la injusticia del mundo. [...] Las desigualdades que encontramos al nacer no están ahí como las montañas o los ríos. Son cosa del hombre, por eso hay que hablar de injusticias, no de desigualdades.»

La falta de responsabilidad de la sociedad colombiana respecto a lo que ocurre en zonas como ésta afecta a la gente que acompaña a las comunidades. La aísla. Cuando se viaja a las comunidades del medio Atrato, como en muchos lugares del país, se tiene la sensación de que se ha salido de la realidad por un momento. Estando en Murindó, recuerdo haber visto uno de esos espacios de farándula que cubren la planilla de programación de los

canales de televisión colombianos. Lo vi en una pequeña tienda, donde piso, paredes y techo eran de madera, donde nadie iba calzado y donde la señal de televisión llegaba por el milagro de las ondas y bañada en nieve catódica. La sensación era que el reinado de belleza del que hablaba una presentadora suizo-colombiana, o eso parecía, era lo único real de la escena. Los que estábamos en esa pequeña tienda espantando zancudos formábamos parte de la ficción. Contar las condiciones de vida de estas comunidades a un bogotano o a cualquier ciudadano es como narrarle un cuento de aventuras que, por lejano, aparece como un sueño exento de realidad. ¿Y las preguntas? ¿Y la responsabilidad?

Albeiro sí se ha hecho preguntas y ha encontrado alguna respuesta. «Casi todo mi trabajo lo he desarrollado en medio del conflicto, pero, haciendo balance, eso lo lleva a uno a madurar mucho y a ser muy consciente de que cada vez tenemos que ser menos neutrales y, personalmente, yo creo que no, que no se puede ser neutral. Menos en este país.»

Esa responsabilidad ante los sucesos y el contexto actual, y esa negativa a asumir una posición de neutralidad hacen que organizaciones locales y ONGs e instituciones internacionales choquen a menudo en sus planteamientos. «Nosotros sabemos en lo que estamos. Si nos preguntan si sabemos qué hay detrás de todas esas comisiones, embajadores, ONGs y demás... Nosotros decimos que eso se lo dejamos a su conciencia. Nosotros sí sabemos adónde vamos.»

Cuando se produce una crisis, cuando hay una toma o una masacre, uno ve a las ONGs y a las agencias internacionales proceder con pies de plomo que, habitualmente, les hacen llegar tarde y, en algunas ocasiones, mal. Cuando se produjo la matanza de Bojayá,

la primera comisión de la Diócesis llegó a la zona dos días antes que la Cruz Roja, cuatro antes que el Ejército, cinco antes que cualquier organismo internacional de protección de los derechos humanos. Quizá por eso Uli, Janet, Úrsula, Chucho, Alicia, Elsa, Albeiro, son nombres-bálsamo para las comunidades. Cuando ellos aparecen significa que las cosas van a mejorar o, al menos, que no van a empeorar.

«Esto no tiene fin»

Por ser negros en este país, la sociedad mayoritaria ha invisibilizado nuestra existencia. Y nos invisibilizó porque los negros que cayeron a estas tierras fueron negros raptados, secuestrados, y como eran de ese nivel no se les valoraba, se les tenía como unos animales, sólo para los trabajos duros que no hacían los blancos. Lo triste es que lo que en ese entonces se hacía con el negro, todavía sigue. Uno se cansa de ser invisible.

Nevaldo Perca

El diario colombiano *El Tiempo* publicaba en el año 2001 un gran reportaje a dos páginas en el que descubría al país que los negros existían. «¡Son 10 millones y medio!», se exclamaba en la historia, en la que se hacía repaso de la situación de discriminación de un 26% de la población del país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) había convencido a los colombianos de que en 1993, según el censo oficial, sólo había en el territorio nacional unos 600 mil negros. La noticia se convirtió en tal cuando la Dirección Nacional de Planeación divulgó un informe según el cual, en 1999, había 10,5 millones de afrocolombianos. El escándalo pasó rápido, pero en esa noticia publicada en agosto de 2001 quien quiso leyó que 80% de esa población negra vive bajo el umbral de la pobreza, 79% recibe como sueldo mensual menos de un salario mínimo, sólo dos de cada cien negros que terminan secundaria en Colombia entran a la universidad, y 50% de los afrocolombianos que viven en el campo son analfabetas (tres veces más que la media nacional).

Claro que hay negros en Colombia, y en zonas como el Chocó son la inmensa mayoría, aunque viven como una minoría. Así existan sólo parcialmente, ahora se expresan con claridad respecto al racismo, a la marginación, cuando se les pregunta. Desde el campesino hasta el funcionario, del analfabeta al universitario. En numerosas casas y oficinas se encuentran carteles alusivos a la discriminación y el tema es recurrente en las conversaciones con un blanco que pregunta. Los blancos (o mejor, mestizos) que conocen los negros del Chocó, o vienen a sacar partido de los recursos de la región o son sacerdotes o miembros de alguna ONG despistada.

La cultura afrocolombiana de esta rivera del Pacífico es sincrética, muy influenciada por el catolicismo, pero con clara presencia del espíritu animista africano; con una relación vida-muerte peculiar; con una historia no enseñada en los colegios estatales que no olvida a Benkos Biohó¹⁵ y la defensa que hizo del palenque de San Basilio; con un cierto tinte de cimarronismo genético que contrasta con la inercia de estas gentes, con la tendencia a ver pasar el río Atrato desde las casas sin preguntarse por qué el agua está también debajo del dormitorio, por qué no se draga el cauce para evitar inundaciones, por qué...

El proceso de conocimiento de lo propio es relativamente nuevo y se reforzó con la campaña del «autodescubrimiento» emprendida conjuntamente por negros e indígenas del Chocó entre 1989 y 1992. Un ejercicio de navegación por la cultura, la historia de agravios y el listado de bondades de unos pueblos negados a sí mismos.

En el caso del «autodescubrimiento» de los campesinos y pescadores negros del Atrato ha sido

15 Líder cimarrón en el siglo XVII.

importante el papel que ha jugado la ACIA. Fundada en los años ochenta ante el avance de empresas como Maderas del Darién y la explotación indiscriminada de los recursos naturales ubicados en los territorios negros, la ACIA ha supuesto un ancla para las comunidades, un asidero a la tradición y al territorio como defensa ante las «invasiones». Quizá el mayor éxito de esta organización fue la ley específica sobre comunidades negras que emanó de la Constituyente de 1991 y la posterior titulación comunitaria de unas 695 mil hectáreas de las 800 mil solicitadas. El documento de propiedad es como una prueba de existencia, una marca indeleble, aunque también haya traído problemas inesperados.

Los grupos armados (y, en algunos casos, los grupos económicos) han desencadenado una estrategia de desplazamiento masivo para recuperar lo que nunca fue suyo: territorios llenos de riquezas naturales, lejanos y por lo tanto incontrolables, y susceptibles, como mínimo, de acoger los cultivos de coca que tan fumigados están en el sur del país. Los dirigentes actuales de la ACIA, en una conversación llena de desconfianzas y temores, confiesan que el golpe de las balas ha sido terrible, que ha logrado paralizar en cinco o seis años procesos organizativos de las últimas dos décadas, que las comunidades están desanimadas, con miedo... Nada nuevo, excepto las balas. Para los líderes de la organización, el trabajo que más sentido tiene en este momento es «la resistencia pacífica de las comunidades y la defensa de la vida». «Si no hay vida, los demás proyectos importan poco», dice con seguridad Armenio Mayo, uno de los miembros de la junta directiva de la ACIA.

La herencia de los huecos

Nevaldo Perea es uno de esos líderes que llevan en la sangre el empuje y en el rostro la vida. Su padrastro, Bernardo Escobar, fue comandante de las guerrillas liberales en el Chocó en los años de La Violencia y durante décadas luchó para que un puñado de campesinos dispersos en un área de 45 kilómetros cuadrados en las riveras del río Arquía (en el municipio de Urrao, Chocó antioqueño) se reunieran y crearan un pueblo con el fin de lograr desarrollo para toda la comunidad. El sueño de Bernardo, muerto en 1971, lo cumplió su hijastro Nevaldo cuando vio nacer en 1975 la comunidad de Punta de Bocaidó, justo en la desembocadura de dos ríos: el Arquía y el Ocaidó.

«Uno no ha tenido la posibilidad de ir a la universidad o al colegio, porque yo por desgracia sólo pude terminar primaria, no pude hacer el bachillerato porque mi mamá era pobre. Mi padrastro, que era muy trabajador, me consiguió un hacha y un machete y catorce mulas para arriar... Yo soy arriero. Si me busca un motor, yo no sé, pero si me busca unas mulas, me sé todo.» Nevaldo habla con una contundencia que asusta. Lleva más de la mitad de sus 49 años liderando a sus gentes y peleando por sus derechos. No hacen falta estudios para saber que lo que te ha tocado vivir no es justo. «Nos dábamos cuenta de que en la República de Colombia el departamento del Chocó era el más pobre, pero también nos dábamos cuenta de que teníamos muchas riquezas, porque la historia nos ha contado que hubo grandes enclaves mineros, grandes empresas, pero que no dejaron nada para mejorar el nivel de vida, sino que saquearon el departamento. En eso tenemos el ejemplo de la Chocó Pacífico (empresa minera) en el alto San Juan, que sólo dejó huecos. Nos tocó entonces impulsar un proceso

más fuerte de organización para que historias como la de la Chocó Pacífico no se repitieran.»

La amenaza de la explotación sin consulta se volvió a repetir, esta vez con Maderas del Darién, empresa que comenzó a abrir trochas en el bajo y medio Atrato, que marcó árboles que siempre habían estado ahí, como si los hubieran descubierto, y prohibió a los campesinos cortar los troncos que habían mimado desde años atrás pensando en un bote o en una nueva casa. «Entonces... convocamos por primera vez a las instituciones del Estado y no nos pararon bolas. Empezamos a reclamar que los recursos naturales eran de las comunidades y que estaban ahí porque las comunidades habían hecho buen uso de ellos. Entonces dijimos que necesitábamos una organización para defendernos y con la ayuda de los [religiosos] claretianos y los padres del Verbo Divino convocamos reuniones [en Puné] y logramos la personería jurídica de la ACIA. En Buchadó, las instituciones del Estado se sorprendieron porque las citamos a una reunión en 1988 y había más de doscientos líderes negros reunidos. Ellos pensaban que aquí había dos o tres negros dispersos por la selva y lo demás eran animales silvestres. Les dijimos que la explotación de los recursos naturales teníamos que discutirla.» Nevaldo hace el relato del inicio de esta lucha con una sonrisa torcida, con una satisfacción inconclusa por haber construido en medio del desastre, por haber sorprendido más de una vez a las autoridades. Y sentencia: «Ahora nos tienen que consultar antes de dar una licencia de explotación. Ya contamos.»

Cuentan, pero poco. Si bien es cierto que los citan a reuniones, que participan en algunas decisiones, que tienen los títulos de propiedad en el altar de los argumentos, el día a día de las comunidades negras no ha hecho sino empeorar en los últimos años. «La

sensación de uno es triste, desconsoladora. Hace 30 años veíamos lo mismo que vemos ahora. Encontramos hoy poblaciones enteras desplazadas, viviendo sin educación, sin salud. Sigue siendo preocupante que el Gobierno no quiera invertir en el Chocó, en las poblaciones negras, por el mismo desconocimiento, por la distancia, por estar tan adentro en la selva, por no tener medios de comunicación, de transporte. La permanencia de los actores armados tiene que ver con ese descuido del Estado, con la falta de inversión y presencia.»

El descuido al que alude Nevaldo es constatable por cualquier viajero que surque las aguas del Atrato y sus afluentes. Los servicios de salud, sólo en las cabeceras con más habitantes, son casetas para poner curitas, la educación se traduce en mesas y pizarrones sacados de una feria de pulgas anoréxicas, y el empleo significa trabajar demasiado para lograr muy poco. Alfonso, un desplazado de Puerto Conto, me cuenta cómo tras un mes de trabajo, bajando madera a pie desde zonas ubicadas en el interior de la selva, con la ayuda de su hijo de 11 años y de otro vecino de la comunidad, lograba, si los «vientos» eran favorables, entre 250 mil y 300 mil pesos (entre 110 y 130 dólares). Hoy Alfonso tiene que dormir en una sala de 10 x 5 metros con otras sesenta personas de su comunidad refugiadas en Quibdó. Hoy Alfonso añora el duro trabajo de la madera. Como me dijo en otra ocasión un campesino «tetradesplazado» por la violencia: «Toca meterle pecho al verde [buscar un pedazo de selva sin dueño al que peluquear a punta de machete para poder echar al piso las semillas de una nueva vida], ése es el designio del pobre.»

– Nevaldo, y ante esa situación... ¿nunca le ha tentado la vía armada?

– Mire usted, estando secuestrado por los españoles, para poder liberarse, el negro se armó, pero la realidad de ahora es diferente. Antes sabíamos quienes eran los esclavistas. Ahora el esclavista es el Estado, es el Gobierno, que nos tiene secuestrados de otra manera. Ahora armarse la población negra, es armarse contra un Estado en el que somos minoría y donde estamos en la periferia, sin tecnologías ni medios. Estamos en desventaja. Nosotros peleamos por unos derechos desde la resistencia pacífica, dándole a conocer al Estado colombiano que somos personas y que tenemos derechos al igual que el resto. En Colombia, los negros tenemos muchos años de haber sido supuestamente liberados, pero [vivimos] en medio de la discriminación, del desconocimiento. Desde nuestros antepasados hemos estado resistiendo frente a un Estado al que nunca le importó la muerte de nuestra gente, mucho antes de la masacre de Bellavista.

«Ha habido propuestas de armarse y los actores armados les han hecho ofertas a las comunidades. Pero uno no es violento, nosotros siempre hemos estado por la hermandad.»

En la sede de la ACIA en Quibdó el televisor también tiene nieve en medio del sofocante calor. Nadie lo mira. Todos están reunidos en un cuarto fondero que es una ampliación del precario caserón de concreto. Esa ampliación parece sacada de las comunidades ribereñas. Madera pintada de verde, ventanas sin ventanas y muchas sillas para la permanente discusión.

Los líderes de la organización confiesan miedo porque todos los grupos los acusan de pertenecer al contrario, los señalan como «objetivo militar». «Las

FARC nos miran a nosotros como enemigos. Nos dicen que nosotros todavía no hemos colocado suficientes muertos en esta guerra, que tenemos que aprender. Con los otros [los paramilitares], pasa igual. El miedo no nos para, pero sí tememos que maten a más líderes o que nos secuestren», cuenta Octavio Rojas superando la desconfianza inicial. En paredes no muy distantes cuelga la lista de líderes negros asesinados y el cartón que atestigua el reconocimiento internacional a la ACIA por el trabajo en pro de la pacificación del Chocó. Eso era cuando se hablaba de paz, porque ahora se habla de supervivencia en un conflicto que «no tiene fin». «¿Usted cree que nos desplazan por algo coyuntural, por algún interés de ahora? ¡No, home! Nos están matando por el cuento del canal [interoceánico] o por el oro del cerro *Caraeperro* desde hace 20 años y lo harán por muchos más, aunque nunca hayan puesto en marcha los proyectos. Esa gente no tiene prisa y nosotros les molestamos», me explica uno de los incrédulos líderes reunidos a regañadientes para contar, iotra vez!, el relato de sus problemas. «Desde lo de Bojayá, aquí ha venido mucha gente a que le contemos nuestras cosas. Se llevan las historias de nuestras vidas y... ¿qué nos dejan a cambio?, ¿en qué nos ayudan?»

Nevaldo tiene diez hijos y dos mujeres. La bigamia en el hombre es habitual entre las comunidades negras del Chocó. Reconoce hoy que nunca debió haber tenido tantos hijos. «Yo estaba dormido y en ese sueño que tenía uno allá en el campo... pues cometí el error. Fíjese que ahora el futuro para la familia de uno es incierto. Tengo diez hijos y no fui capaz de estudiar a los primeros; al menos quiero que los últimos salgan adelante. La tanta familia que los negros tenemos es porque no tenemos la formación, el conocimiento.»

Doblemente esclavas

En esta cultura de hombres, como casi siempre, la mujer juega un papel crucial, aunque este hecho no sea tan público como necesario. Los líderes de la ACIA son hombres, en su junta directiva sólo hay una mujer, cuando en sus vidas sentimentales se permiten más de una y de dos. Sin embargo, cuando se aborda la cultura negra, las tradiciones, cuando se busca el esqueleto que aguanta el dolor de las comunidades, casi siempre se encuentra a una mujer detrás. Un ejemplo de ello es Zulma Cornelia Chaverra Martínez, una mujer pequeña pero llena de energía que a sus 50 años es una universidad ambulante sin haber pasado por un claustro. «La mujer ahora en este tiempo tiene una estimación. Antes no valía nada.»

Cornelia nació y se crió en el río Bebará, con un padre andado en el pleistoceno y una muralla levantada por él frente al colegio. «Cuando yo estaba en la escuela, mi tía no nos dejaba ni salir a la puerta: la mujer no tenía ese derecho, sino que tenía que estar en la cocina. Mi tía decía que una mujer en la puerta era *cabeza de bagará* (una variedad del loro que no aprende a hablar). Eso significaba que nosotras no sabíamos expresarnos, que éramos brutas. Mi papá era muy *aberrao* y decía que hija mujer no estudiaba. Decía que en hija mujer no gastaba ni un peso porque si aprendía a escribir era para escribir a los maridos y no para servir a los padres. Mi papá me mandó a *estudiar*... pero a estudiar a sembrar arroz, plátano... a meterme a la agricultura. Yo me encontraba adolorida y fui a ver a una viejita curandera llamada Eleuteria Maturana. Le dije: “Mama Tella, hable con mi papá y dígame a ver si me deja estudiar los dos años que me faltan.” La viejita habló con mi papá y él le dijo: “Mire, mama Tella, mucho la quiero y la respeto, pero hija mujer no estudio, porque estudié una, se casó y todavía no sé con quién.”»

Desde entonces, Cornelia peleó duro hasta que se convirtió en una lideresa natural de las mujeres del medio Atrato. Partera, rezandera, cantadora de alabaos, curandera natural, enfermera... Cornelia ha trabajado desde el año 82 para las comunidades y, aún hoy, cuando apenas gana 15 mil pesos al mes por su trabajo en la ACIA, sigue convencida de que la única manera de sobrevivir es con organización. «Una como mujer ha despertado mucho. Ya no hay pena de hablar... Todavía hay algunas que no se atreven, pero en general la mujer se ha liberado mucho. Antes las mujeres no tenían cargos públicos o no hablaban en un tribunal... Ahora la mujer está en todos los estamentos de la sociedad, aunque sea como secretarias. La mujer, para lo que yo miré antes, tiene un papel muy importante. Todavía se consiguen de esos machistas. Todavía hay hombres que les da pena cargar el hijo. Pero en su mayoría ya han salido del error de pensar que una mujer es esclava. Nosotras hemos tenido dos esclavitudes: por ser negras y por ser mujeres.»

Y hoy, acosadas por la violencia y desplazadas en la ciudad que las rechaza, son las mujeres quienes mantienen cierto orden en los albergues de refugiados, son las que hablan sin pelos en la lengua y mantienen la mirada con una dignidad que marca fronteras. «Nosotras en la organización hemos prestado un papel muy importante. Los grupos de salud los hemos sostenido, los de parteras, de rezanderas... Nosotras nos preocupamos por mantener las costumbres, la cultura. Lo que ocurre es que en nuestro medio el conocimiento de nosotras como mujeres no se reconoce en las ramas gubernamentales. Nosotras tenemos un conocimiento muy limpio, pero como somos negras y campesinas, pues no se publica nuestro conocimiento...»

Aunque no se publique ese conocimiento, es cierto que en las organizaciones comunitarias las mujeres

juegan un papel clave. Ha sido un camino lento y nada fácil. Cornelia recuerda con risa picara los choques que tenía hace 30 años con los hombres en su comunidad. «Había un cierto celo, porque cuando yo les decía a las compañeras que fuéramos a cantar a los funerales, los maridos decían que no dejaban que su mujer se sentara en una tumba a cantar, que seguro que si cantaba ahí algún hombre se les enamoraba. Los hombres decían que no dejaban a las mujeres salir conmigo porque yo era muy libre. Las mujeres comenzaron a salir a escondidas y a ocupar su sitio en la comunidad.» Cornelia habla permanentemente de la «liberación» de las mujeres negras y de cómo ese término molesta a sus compañeros. Y repite: «Una como mujer ha despertado mucho.»

Hoy Cornelia forma parte del comité de la ACIA que verifica el funcionamiento de los 120 concejos que tiene la organización a las orillas de los ríos de la región y tiene la oportunidad de movilizarse y hablar con sus gentes. Se le nota desesperanzada, triste por los efectos que tiene en lo más profundo de las comunidades una violencia no buscada. «La verdad es que la entrada de los grupos armados a nuestros territorios ha sido un fraude. Primero, porque se han debilitado mucho los concejos comunitarios y, segundo, porque la gente ya no tiene la libertad para moverse. Nos han matado a mucha gente. Pero, por otro lado, la organización ha sido como una piedra en el camino para los grupos armados. Sin la organización ya no habría negros en el medio Atrato.»

La piedra en el camino cada vez se erosiona más, y Cornelia la siente ya arenosa, a punto de resquebrajarse. «Es un filo de doble machete lo que se nos ha metido a nuestro medio. Después de la titulación del territorio, nosotros teníamos un plan de etnodesarrollo, pero esta violencia prácticamente ha acabado con nuestro proceso. Esta situación a una la tiene muy mortificada.»

Es cierto que existe un plan de etnodesarrollo y que las intenciones de las comunidades negras son ambiciosas. El plan contempla la explotación sostenible de los recursos humanos, la consolidación de las relaciones con las comunidades indígenas, la etnoeducación para que los más jóvenes sepan quiénes son y de dónde vienen... Pero ese plan ahora reposa en alguna gaveta porque la prioridad se llama vida y es difícil de defender.

-¿Y ustedes no están dispuestos a declararse neutrales ante los grupos armados? -le pregunto al grupo de líderes que ya charlan relajados conmigo.

-No señor, no. Nosotros no somos neutrales, somos autónomos. ¿Quién puede ser neutral cuando le matan de lado y lado? -me responde uno de ellos con decisión mientras el resto asiente con la cabeza.

Cornelia y Nevaldo lo están pasando muy mal. Lejos de sus comunidades, con poca plata en el bolsillo y sin capacidad para permitir estudiar a sus hijos, el futuro lo ven difícil. Sienten que lo que una naturaleza ruda y cruel como la del Chocó no ha podido hacer con ellos, lo está logrando el hombre, otros hombres. («Es un milagro estar vivo donde no hay enfermeras ni médicos. Es un milagro y una fortuna tener la naturaleza que nos ha permitido vivir dentro de ella en unas condiciones de salud mínimas, pero en las que hemos resistido. En este momento..., ahora, lo que nos está matando son las balas, matan incluso a niños que todavía no han aprendido a hablar», se queja Nevaldo.)

Los golpes contra las comunidades negras tocan aspectos espirituales, rituales, que conforman una visión de la vida y de la muerte. La mayoría de actores armados saben que ahí es donde se hace el mayor daño y, por ello, se encargan de que los cadáveres no aparezcan, o aparezcan seccionados, toman medidas para que no

se pueda velar a la víctima durante los nueve días que manda la tradición. En algunos casos, como cuando el cadáver «viaja» por los ríos, la situación es vergonzante para las propias comunidades, ya que ven pasar frente a sus casas cuerpos que no pueden recoger, porque hacerlo los señalaría de colaboradores de alguno de los grupos armados.

En 1999 pude presenciar una de esas situaciones. Justo enfrente de la comunidad chochoana de Las Mercedes, en la boca del río Neguá, los paramilitares rajaron y mataron a Carlos Mario Bejarano, un campesino de 32 años, y a su hermano Erinson, de 27. Siguiendo el curso del río encontramos el cuerpo de uno de ellos. Estaba amarrado en la ribera derecha, con el cuerpo hinchado por el agua y el rostro desfigurado por los chulos, a unos 150 metros de la comunidad de Palo Blanco. Allí fuimos a preguntar por qué seguía el cuerpo amarrado. Allí nadie nos respondió, justificando con el rostro del miedo la frustración de no poder recoger y sepultar a un «hermano». En la iglesia de Las Mercedes, en aquella época, las AUC habían pintado en las paredes: «Mata, que Dios perdona.» O lo que es lo mismo: mata, que todo vale.

Vivir y ver la muerte en este momento son actividades paralelas para las comunidades del Atrato, Quizá por eso, cuando se les pregunta qué es estar vivo, la mayoría de sus habitantes responde: «Un milagro.»

Zulma Cornelia Chaverra Martínez, mujer pequeña pero llena de energía que no se rinde, lo resume así: «Estar viva hasta hoy es un milagro de Dios. Primero porque yo estuve peleando con San Pedro cuando estuve enferma, a los 34 años. Le dije: “No, hermano... déjeme otros tres días” y el *mancito* cumplió entonces. Ahora yo le pido a mi Dios que me dé vida para seguir luchando por el

proceso organizativo, para ayudar a los compañeros que están sufriendo tanta violencia. Y, además, ¿sabe qué?, pues yo me siento orgullosa de estar viva hasta hoy para enfrentar los procesos tan duros que nos ha tocado vivir, para resistir. Cornelia no se va a echar *pa' atrás*.»

La vida, o la cuerda floja del sinsentido

*No es sano lo que nos está pasmado.
Estamos cargando una serie
de emociones que en algún momento
tendríamos que sanar para poder
transmitir alegría, porque la alegría
se está acabando.*

Jesús Floréz

Entre el comentario de cafetería y la acción hay una distancia abrumadora. Entre la conciencia crítica respecto a lo que sucede en Colombia y la intervención directa en la realidad se levanta una muralla que solamente se puede flanquear a punta de coherencia.

Entre la teoría de la democracia y la vida democrática hay un telón de acero que no ha caído tras La Caída. La mayoría de ciudadanos nos conformamos con maldecir la vida y construir una burbuja de seguridad que, si bien no soluciona estas preguntas, protege del chaparrón de estiércol que vomita el narrador de la existencia en un relato de muerte incesante. Por eso, cuando se conoce de cerca a los personajes que andan por el país defendiendo los derechos humanos, poniendo el dedo en la herida de la responsabilidad, arriesgando sus vidas por otras vidas, buscando respuestas a la sinrazón metidos de lleno en el barrizal, surgen muchas preguntas relacionadas con el ser humano, con las diferencias que nos igualan, con la falsa igualdad que gritamos a los cuatro vientos como tratando de que, de tanto repetirla, se haga realidad sin poner algo de nuestra parte.

La mayoría de estudiosos de la realidad del país -Colombia presume de tener «violentólogos»- coinciden

en que uno de los principales problemas es la ausencia de Estado en una buena parte del territorio nacional. Esa ausencia debe ser cubierta por diferentes estamentos, organizaciones y personas, pero esos «suplentes» de la institucionalidad no pueden garantizar el triunfo de la democracia y de cierta justicia social.

«En una sociedad, las elecciones libres, el Congreso activo y el presidente sometido a los límites constitucionales y el imperio de la ley, son todos aspectos de importancia crucial. Pero sabemos demasiado bien que todos esos elementos pueden existir en ausencia de la democracia. Son elementos necesarios, aunque no suficientes, para garantizarla. La sociedad debe ser democrática también en la distribución más equitativa del ingreso, en la protección de los derechos individuales, en la libertad de expresión», explica Douglas Chalmers, politólogo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Columbia University de Estados Unidos. Me permito citar este párrafo sobre la esencia de la democracia, sobre el peligro de confundir instituciones con institucionalidad, sobre el fondo y la forma, porque creo que explica también cómo, al hablar de derechos humanos, se olvida que parte de ellos son los llamados derechos económicos, sociales y culturales y que, por lo tanto, referirse a los defensores de derechos humanos no es ceñirse sólo al conflicto, en el cual, en todo caso, tendría más sentido hablar de Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Desde este ángulo, defensores de los derechos humanos son todos aquellos que trabajan por garantizar la libertad de expresión, el acceso a la salud, la educación, el empleo o la vivienda, el respeto a las creencias e ideologías, la libertad de culto, el derecho, en fin, a una vida digna. ¿Que el conflicto es una amenaza más para los derechos humanos? Sin duda, pero es bueno

recordar que antes de la llegada del conflicto, el Estado -y el establecimiento- ya había marcado una relación adúltera con la población, de abandono, de desprecio. Decía José Saramago que hasta que con el voto no se pueda interferir en las decisiones económicas de los conglomerados transnacionales no habrá democracia real. Un factor más a la lista de imposibles.

Jesús Chucho Flórez lleva trabajando por los derechos humanos antes de que todos paseáramos estas dos «palabritas» en procesión por todas las mesas de debate. Hoy es uno de los resistentes en el Chocó, pero no uno cualquiera, sino de los que dan sentido a muchas de las acciones y de los discursos que mantienen las comunidades ante las amenazas y los amenazadores que las acosan. Natural de Bucaramanga (Departamento de Santander), es heredero de la historia de expulsiones que conocen al dedillo los campesinos colombianos. Sus padres eran desplazados del período conocido como La Violencia y llegaron a la ciudad desde la zona rural de Rionegro (Santander) en los años cincuenta. No siguió el camino de la mayoría de sus once hermanos, que fue aprender del patriarca el oficio de la metalurgia, sino que optó por las sotanas. No cualquier sotana, hay que decirlo. Es más, ninguna sotana. Es cierto que ingresó a una orden religiosa, siguiendo de cerca a Guillermo Meza, un sacerdote salvatoriano que, con la teología de la liberación como estandarte, desarrollaba un fuerte trabajo social y de organización en el barrio bumangués de Zapamanga.

De la afiliación oficial religiosa llegó a la antropología. La etnografía comenzó a cubrir el tiempo y los desvelos de Chucho. Sin embargo, todo lo que hace este hombre cercano ya a los 40 años es «aplicado», incluida la etnografía. Fue así como terminó en el Chocó trabajando con las comunidades indígenas y negras y, siempre,

con una relación estrecha con la Diócesis. Profundo conocedor de estas tierras y de sus problemas, el análisis de Chucho es una especie de catálogo de la desilusión, un proceso de madurez en el que los mitos que pueblan los libros van cayéndose y en el que ciertas dudas existenciales tienen que convivir con la pelea diaria por la vida propia y ajena.

Quizá la primera decepción fue con el Estado, con las estructuras que o no están o cuando llegan no es para mejor. «Yo creo que esa ausencia se debe a que en tiempos anteriores, durante el desarrollo de este Estado aún en construcción, éste ubicó zonas estratégicas del territorio para su crecimiento y otras como de reserva. Sobre todo porque estas últimas se consideraron como improductivas, áreas sin valor económico, como el Chocó o lo que se conocía como los Territorios Nacionales (la Amazonia, los Llanos...). El capital en este país también se centró en los lugares donde podía obtener un beneficio con la extracción fácil y directa de recursos. De un tiempo no muy lejano hacia acá, estos lugares empiezan a ser revalorados, por su ubicación, pero sobre todo por lo que hay en su interior. Entonces se vuelven objeto de las miradas de un Estado que ha sido completamente ausente, un Estado que vuelve la mirada pero en calidad de dueño que tiene finca a la venta. Cuando se dio eso, el conflicto ya estaba en aumento y se ubicó en una de las zonas que sí tenían inversión de capital, Urabá. Al ubicarse allí esa fuerza del capital, se instala también la subversión y ése va a ser el caldo de cultivo para el paramilitarismo, que se desbordó hacia el interior de la región. ¿Por qué no reacciona el Estado? Porque no conoce esta región. Ni la Fuerza Pública conoce bien el terreno. Lo que conoce el Estado es un inventario de recursos que se ha podido hacer a través del capital internacional. Se conoce de la identificación de la riqueza petrolera, que está ahí a la

espera... Luego entró la era de la biotecnología y resulta que el Chocó es un laboratorio con potencial genético. Entonces, el Estado facilita proyectos de investigación como Biopacífico, para hacer el inventario de lo que hay. Eso demuestra que aún no sabe qué tiene la región. Al mismo tiempo, entran otras fuerzas armadas ilegales, la subversión, que tienen por misión conocer el área para poderse mover. Y, finalmente, los paras, que tampoco conocen el terreno.»

Las riquezas, motivo de buena parte de la disputa, están vedadas para la comunidad, pero tanto negros como indígenas, ya lo hemos visto en otros capítulos de este libro, se organizaron cuando todavía el Chocó no era tan «atractivo». Los avances en legislación y en protección de estos grandes colectivos son un problema para determinados proyectos, para las ambiciones de los que ahora sí miran a la región. «Al intentar implementar ciertos programas se partía del presupuesto de que, o bien no había gente, o bien era fácil negociar con la gente que había, o desconocerla; pero se encuentran con que había un trabajo de organización comunitaria que obligaba a los responsables de esos proyectos a negociar con los habitantes de la región -explica el defensor de los derechos humanos-. Un caso concreto es la carretera Panamericana (que debe unir a Pereira con Bahía Solano, vía Bahía Cupica). Al entrar en los territorios indígenas sin consultar, los movimientos indígenas hacen una toma en 1992 y ganan la batalla legal porque los terrenos estaban titulados. Como a nadie le interesaba esta zona antes, los indígenas habían ido titulando antes de que aparecieran los capitales. Llega así un momento en que determinados grupos quieren sacar adelante determinados proyectos y ven que mediante la consulta va a estar muy delicado y se empieza una estrategia de presión para que las comunidades, debilitadas, negocien, o simplemente

para utilizar las vías de hecho. Es lo que vemos con la tremenda penetración paramilitar en el bajo Atrato.»

Jesús Flórez es ahora coordinador en la zona de la ONG española Paz y Tercer Mundo¹⁶, y uno de los promotores de la posición de no neutralidad. Los hechos, las presiones, son demasiado profundos para no tener una posición política definida. En su discurso se explica que esa no neutralidad no se define «en contra de nadie», sino a favor de las víctimas civiles de este conflicto. Un discurso que «es muy diferente al de los organismos humanitarios internacionales, de ciertas instituciones eclesiales...», pero que ha calado entre la población, que identifica claramente esa posición con la defensa del territorio y de la autonomía. La presión de la guerra, en todo caso, es muy fuerte, y se ha perdido buena parte del trabajo hecho. La formación de docentes en etnoeducación o la creación de brigadas de salud son esfuerzos casi desaparecidos, ya que, por ejemplo, esos docentes han salido de la zona, las comunidades, a fuerza de desplazamientos masivos, se han dispersado, y las energías, muerto a muerto, han ido mermando.

Los últimos seis años, los de la guerra sin sentido y extendida, han servido para construir el catálogo de las decepciones al que me refería. «El conflicto armado ha hecho que nos actualicemos en el sentido de tener que afrontar situaciones muy nuevas para la región y para nosotros. Uno veía antes zonas muy identificadas como rojas [violentas] y las veía muy lejos, y ahora todo el país se enrojeció, y esta región de manera particular. Tuvimos que examinar el rol de diferentes instituciones. Encontrar a un Estado con el que nos identificábamos, pero cuyos comportamientos no entendemos. Un Estado que no es transparente. Antes hablábamos de un

¹⁶ Posteriormente, Flórez coordinó la Pastoral Indígena y ha sido rector de la Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA).

Estado corrupto, y lo sigue siendo, pero ahora, además, hay una no transparencia con el monopolio de la Fuerza Pública. Aquí, en todas las partes, hemos constatado la connivencia, permisividad y patrocinio, bien de la Policía o del Ejército, con los grupos de Autodefensas. Siempre nos dicen que no es política de Estado, y es cierto, porque jamás el Senado o el presidente la han decretado, pero también es cierto que en la práctica se constata con claridad esa relación. Por otra parte, hemos constatado cómo las ideologías (no creo que hayan llegado a su fin) no encuentran realización. Los movimientos subversivos, con cuyo discurso en algunos momentos el país se identificó... yo no entiendo si es por la presión de la guerra o porque hay intereses organizativos que no quieren que esa ideología sea observada por la comunidad, están presionando a la población de una manera tremenda, obligándola a hacer cosas, controlando todo... Otro elemento de actualización ha sido el propio discurso de los derechos humanos, el DIH, los derechos de los pueblos... Nos dijeron que era necesario que la gente se capacitara. Eso ha llevado a muchas frustraciones porque la gente se capacitó, pero no hay un Estado que ampare la defensa de los derechos humanos. Así que ahora la gente sabe denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero no le sirve de nada. Y un DIH, que es como de ficción, no porque no sirva, pero es que ningún actor del conflicto lo reconoce. Otro punto ha sido el papel de la comunidad internacional. En los últimos seis años vimos en ella una luz de esperanza. Como no teníamos acercamiento a todas esas instituciones y no las conocíamos en profundidad, volcamos las expectativas hacia allí. Pero ahora vemos que su capacidad de intervención es limitada, y en algunos casos, muy limitada, aunque a la hora de actuar en temas comerciales esas limitaciones

no son tales. Hay desencanto sobre el papel que juega la comunidad internacional y, a pesar de eso, sigue siendo un mecanismo de protección. La gente esperaba mucho más.»

Tomar la foto y salir corriendo

Decepción tras decepción, puertas cerradas por donde se mire. El Chocó es una región peculiar en esto. Mientras en Antioquia hay más de ochocientas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) registradas, aunque no esculcadas, en el Chocó apenas hay una decena de organizaciones más relacionadas con los bailes y cantos típicos y con el medio ambiente que con las necesidades básicas de los habitantes. Hay una numerosa legión de siglas relacionadas con movimientos organizativos, pero no hay sedes de las principales ONGs internacionales ni proyectos de gran calado financiados por la Unión Europea u otros miembros benefactores de la comunidad internacional. El abandono es total, aunque tras la matanza de Bojayá se vean chalecos azules (de Naciones Unidas) por las calles de Quibdó y en los pequeños aviones que llegan a la ciudad se intuyan acentos nada chocoanos de cooperantes de diverso pelaje que llegan con ropa para regalar o con informes que rellenar.

En los primeros días después de los trágicos sucesos, la presencia era notoria; ahora es salpicada. «Estamos alegres porque en medio de tanta desilusión haya gente solidaria. Eso siempre alegra y motiva. Pero, al mismo tiempo, hay un reclamo al Estado de por qué no vino antes si desde el año 1997 se estaba avisando de lo crítico de la situación y siempre se nos dijo que estábamos falseando. Hay un reclamo a la cooperación internacional, Estados y ONGs, porque es una región en la que desde hace

mucho tiempo hace falta una intervención. También hay incertidumbre porque esa presencia sea sostenible. Ya, al mes y medio de la tragedia, se ha sentido la bajada de presión, de apoyo, de presencia. Nos preocupa que la gente venga a tomarse la foto y a irse.» Los que resisten son otros. Y los que resisten fijan sus esperanzas habitualmente en esa presencia internacional, porque lo nacional perdió su confianza hace décadas.

Recuerdo la primera vez que llegué a la comunidad de Bella Flor del Remacho a encontrarme con unos civiles autodenominados resistentes, que llevaban en esas fechas unos dos años y medio *encaletados* (escondidos) en las montañas para evitar el zarpazo paramilitar. Miraban mi libreta de apuntes como si fuera un pasaporte a la salvación. «Ahora sí va a saber el mundo lo que ocurre aquí y no lo va a permitir», me dijo un líder comunitario. Otro aseguraba: «Con apoyo internacional yo voy a declarar contra estos asesinos hasta en Roma.» Cerré mi libreta con miedo, con una marca de responsabilidad que aún hoy no ha desaparecido. Sobra decir que los reportajes publicados sirvieron para que semanas más tarde una arremetida de las AUC pusiera fuego en todas las casas de Bella Flor y para que uno de los líderes de los resistentes fuera descuartizado (en homenaje a él reproduzco en este libro el reportaje «Resistentes en la esquina más rica de América», que denunció su situación en otro tiempo).

La relación con instituciones extranjeras, la denuncia ante organismos nacionales e internacionales de los hechos ocurridos en el medio y bajo Atrato desde 1996, en realidad desde el inicio de la historia escrita, ha supuesto la estigmatización de estas gentes, de las comunidades y de quienes los defienden, como Chucho Flórez. «Para muchos, todo el que acompaña a las comunidades o trabaja en derechos humanos es el brazo

político de la subversión. Aquí se nos ha estigmatizado desde hace tiempo. Se dice que está la mano cargada hacia la Fuerza Pública y que se le esconden cosas a la guerrilla, pero las denuncias que se hacen corresponden a hechos y las estadísticas no son equilibradas. A todo el mundo se ha denunciado acogiéndonos al marco legal de Naciones Unidas, que indica que las violaciones a los derechos humanos proceden del Estado o de agentes apoyados por éste. En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, hacemos lo mismo: nos atenemos a los acuerdos suscritos por Colombia. Si cambian esas normas, cambiaremos la calificación de los hechos», explica Flórez, que conoce bien esa estigmatización y los efectos perversos que tiene sobre la población.

Las defensoras y defensores de los derechos humanos en la zona creen que una parte de los «imaginarios» que hay sobre ellos y sobre las comunidades organizadas provienen de una desinformación general provocada, entre otros, por los medios de comunicación nacionales. Es probable que ya lo pensarán antes, pero lo ratificaron durante las horas siguientes a los sucesos de Bojayá: «A nosotros lo que más nos desencantó fue la prensa nacional, porque tuvo un comportamiento bastante cuestionable. No fue a la zona oportunamente, porque se dejó condicionar por las Fuerzas Militares. Todo lo que se presentó en un principio fue maniobrado por el Ejército, hasta que les reclamamos y finalmente sí se notó un cambio de actitud. Los medios, proponiéndoselo o sin hacerlo, son muy influyentes, y la manera como se manipulan los hechos ha contribuido muchas veces a que los efectos sobre las comunidades sean negativos, por la estigmatización, por el ocultamiento de hechos, por relativizar otros...» Lo cierto es que los armados también leen el periódico, ven la televisión y escuchan la radio. Muchas veces, sus imprevisibles decisiones se

ven influenciadas por las noticias. Sospechan que equis información difundida por los medios ha sido facilitada por líderes de la comunidad y pasan la factura con fuego.

Personalmente pude ver a la tribu periodística ingresar a Quibdó cinco días después de los sucesos de Bojayá, a lo que Arturo Pérez-Reverte llamaría el *Territorio Comanche*. A ninguno le faltaba su chaleco de guerra y las ganas de encontrar testimonios fuertes. Llegaron tarde porque la mayoría, al conocer los hechos, se desplazó a Medellín, donde imaginó que el Programa Aéreo de Salud o la Fuerza Aérea los trasladaría en helicóptero al ojo del huracán. No fue así. Los dos únicos periodistas que estábamos en Quibdó tratando de llegar a Bellavista les comunicamos que el lugar era ése, Quibdó, que salieran de Medellín. Así lo hicieron, pero volvieron a condicionarse por las Fuerzas Militares, que no dejaron a la tribu (eran unos cuarenta periodistas) bajar por el río por razones de «seguridad». Los medios nunca denunciaron públicamente esa prohibición y esperaron hasta que, seis días después de la tragedia, llegaron a Vigía del Fuerte a bordo de helicópteros militares. Los camarógrafos pudieron pedirles el favor a los pilotos de que despegaran y aterrizaran más de una vez para tener las imágenes de la «recuperación de Vigía por parte de las Fuerzas Militares», y grabaron a un oficial del Ejército llorando con la bota de una supuesta víctima civil en la mano (los propios habitantes de Bojayá han dudado abiertamente de la bota y del oficial).

Se podía llegar a la zona sin el Ejército. Eso quedó demostrado. Nosotros entramos con una comisión humanitaria de la Diócesis y un *freelance* de CNN lo hizo por su cuenta, arriesgando su vida por contar la verdad, o lo más cercano a ella, sin interferencias de fuentes interesadas (como lo son todas las partes involucradas en la guerra, incluidas las Fuerzas Militares de Colombia).

Ya de vuelta en Quibdó, un periodista de una agencia internacional, con tono de superioridad, me expresó sus dudas: me dijo que era imposible que hubiera 119 víctimas por una bomba casera y me preguntó si yo había visto los 119 cadáveres. Sólo se me ocurrió contestarle: «Yo no discuto con la muerte.»

Pero lo más grave fue lo que sucedió durante los seis días en que no hubo cobertura periodística sobre la zona. Los canales de televisión colombianos no tenían imágenes ni testimonios, así que se lanzaron a una carrera de especulaciones e imágenes de archivo sin identificación que provocaron más de una confusión, más de un imaginario y más de un problema a la población civil que, en ese momento, estaba agolpada en Vigía del Fuerte bajo control de la guerrilla de las FARC. Más, cuando la televisión tiene un efecto perverso en el espectador. Los propios supervivientes de Bojayá veían sus aparatos de televisión para ratificar que lo que les había sucedido era verdad (sólo lo que aparece en los informativos «es verdad», aunque nosotros mismos seamos los protagonistas). Al no aparecer una información veraz, su drama se desdibujaba en la pantalla y en su mente.

Procesar el dolor es difícil para las víctimas, que continuamente repiten que están «confusas». La sangre y el rostro de sus seres queridos se apelotonan en un sancocho de sentimientos, de pérdidas, de futuros pasados y de desconfianza.

Le pregunté a Freddy, de 26 años y que acaba de perder a su esposa y a un hijo, qué sentía. Mirándose la rodilla abierta por las esquirlas, Freddy me contestó: «Nada.» Dejó la mirada donde la tenía y el corazón en la capilla que sirvió de sepultura para tanta vida.

El dolor se convierte en preocupación cuando estas comunidades, indefectiblemente, deben desplazarse de inmediato después de los golpes a la vida. El Atrato ya se ha acostumbrado a ser trocha de botes cargados hasta el límite de la flotación con niños y enseres, identificados con una bandera blanca, en los que huyen de sus tierras y casas.

Para las y los defensores de derechos humanos y trabajadores en medio de la crisis humanitaria, tampoco es fácil restañar las heridas del alma, mucho más difíciles de cicatrizar que las de la piel.

«Todavía no somos muy conscientes de lo que está pasando. No somos muy conscientes de las secuelas que nos está produciendo la cercanía a la violencia. Hasta hace unos años seguíamos mirando el conflicto a través de la televisión. Cuando empezaron a caer las personas de carne y hueso que conocemos, como los campesinos e indígenas, uno siente que lo están rompiendo, pero cuando ya le tocan a amigos directos, nos están matando, y tenemos unas heridas muy grandes que no han sido sanadas. Yo tengo muchas heridas. La última, que cuando recuerdo me duele mucho, es la muerte de Yolanda Zerón (la directora de la Pastoral Social de Tumaco, asesinada el 19 de septiembre de 2001). Las muertes de Jorge Luis, de Iñigo... están causando mucho dolor, y ese dolor nos está desgarrando, y creo que no lo estamos sanando porque rápidamente lo cubrimos con una gasa para poder afrontar los nuevos hechos que aparecen. Lo de Bojayá es una herida muy grande. Tenemos que ser más conscientes de ese dolor, vivirlo más y racionalizarlo. No es sano lo que nos está pasando y estamos cargando una serie de emociones que en algún momento tendríamos que sanar para poder transmitir alegría, porque la alegría se va acabando», reflexiona Chucho Flórez en voz alta.

Todos los trabajadores de la vida hablan en los mismos términos. Quien los conoció hace unos años recuerda rostros más alegres. Hoy la tristeza es parte de la identidad, pero no se puede manifestar públicamente.

«Si las comunidades no tienen derecho al duelo, con lo importante que es culturalmente para ellas, ¿por qué vamos a tener ese derecho nosotros?», me comenta otro de estos anónimos seres humanos de piel y agallas.

– Chucho, ¿sientes rabia por todo lo que está pasando?

– Sí, siento rabia porque ocurren cosas que objetivamente no tienen razón de ser. Tengo rabia con una forma de organizar, de aprovecharse, del país, de ver a Colombia como una finca. Tengo rabia con un movimiento que, teóricamente, está cargado de mucha ilusión y que, en la práctica, traduce todo en ganar una guerra, no en hacer una revolución, en conquistar mayor humanidad... Pienso que tenemos que fortalecer el sentido de la vida para que esa rabia sea superada. Lo que no hay que tener es rencor. Tengo rabia, que es rechazo a lo que no comparto, y otra cosa es almacenarla, porque eso genera odio. Hay que extirpar esos odios y rencores para poder tener siempre abierta la puerta a un proceso de conciliación. Pero eso está muy difícil en Colombia, porque los colombianos nos caracterizamos, entre otras cosas, por la auténtica desconfianza de los unos a los otros. Creemos siempre que los vecinos están dispuestos a hacernos daño y con eso estamos haciéndole daño al vecino. Es algo muy difícil de superar, pero tenemos que trabajarlos».

Desde que conozco a este personaje siento una distancia que hoy interpreto como tristeza. Sus

movimientos y sus palabras suelen ser dirigidos y rápidos. Ninguna pérdida de tiempo y pocas concesiones para la vida personal. Hoy me confiesa las dudas respecto a la vida, a ese sentido que no deja de buscar en medio de amenazas que estremecen y riesgos reales que asume con pocas precauciones y muchas claridades.

«Estar vivo es un problema, porque la vida es un reto muy grande para el cual creo que la especie humana no acaba de estar preparada, porque estamos ante muchos misterios sobre el sentido de la existencia. Estar vivo aquí es estar vivo condicionado en un país como Colombia, es como un reto de buscarle sentido, y con mucha facilidad llegamos a la cuerda floja del sinsentido. Yo, personalmente, con frecuencia me encuentro en esos niveles y frecuentemente debo volver a lo espiritual, no al temor de lo sagrado, que es por donde solemos escaparnos y justificarnos los seres humanos, sino a esa unidad del alma, de lo profundo que hay en el ser, para encontrar esa integración con el cosmos, con lo que nos rodea.»

Resistir en la esquina más rica de América¹⁷

Dejemos las cosas claras desde un principio. El Chocó no existe. Si alguien lo recortara del mapa colombiano, mucha gente no se daría cuenta de que entre Colombia y Panamá había un trozo de tierra rica y abandonada. El tapón natural de las selvas del Darién, que convierte a América del Sur en una isla, sería el final de la nueva península de Centroamérica. Los habitantes del Chocó tampoco existen, al menos para el Estado y los medios de comunicación. Por desgracia para ellos, los evangelizadores del Kaláshnikov sí los tienen en cuenta, aunque sea para incluirlos en la lista de víctimas anónimas del conflicto que asusta a propios y vecinos. Es paradójico morir cuando no se existe, pero en la República de Colombia casi todo es posible, y cuando llegamos a Quibdó, capital chochoana, nos dimos cuenta de todo esto. La ciudad está desgastada por la lluvia y el olvido, arruinada por las corruptelas y los bandoleros legales, e inundada de las basuras de unos ciudadanos fronterizos.

Para nosotros, Quibdó es el punto de partida en busca de un grupo de campesinos que a varios días de distancia están defendiendo su vida y su territorio, y es precisamente aquí, en esta ciudad, donde se resisten a desplazarse ante los embates de la violencia. Quibdó es un

¹⁷ Este reportaje Fue publicado en la revista *Gatopardo* en diciembre de 2000. Con algunas correcciones, es publicado en este libro como homenaje a los resistentes y a Mauricio, uno de los protagonistas de este texto, que aun sin su nombre real, fije asesinado meses después de la publicación del reportaje.

teatro de operaciones de ambiente pesado. Los espacios tienen funciones muy diferentes de las que inspiraron su creación: en el coliseo deportivo, medio en ruinas, están desde hace seis años los desplazados que llegaron del río Curvaradó; del atrio de la catedral acaban de levantar sus plásticos unos trescientos indígenas que tuvieron que huir de su comunidad tras el asesinato de uno de sus líderes; el puerto es el muelle para las transacciones de campesinos retornados, y el aeropuerto civil sirve de base de operaciones para los helicópteros militares que tratan de entrar en la población de Vagado, tomada en esos días por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional y del Ejército Revolucionario Guevarista.

Cualquiera que no se encuentre en este juego de guerra o cualquier nuevo jugador despierta sospecha. La Policía pregunta por un periodista extranjero y finalmente me encuentra en el puerto, justo antes de embarcar con un grupo de campesinos que retornaban a sus comunidades del río Neguá tras seis meses de desplazamiento forzado.

- Qué va, ¿acompañando a la monjita? -pregunta un joven agente tan asustado como cualquier otro colombiano, pero que, como confiesa, es miembro de los grupos contraguerrilla porque cobra un poco más de salario.
- No, no, voy acompañando a todos, a los campesinos.
- Le recomiendo que vaya con la monjita: le va a servir de protección.

La advertencia sería reforzada más tarde por el responsable del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS), el servicio de espionaje y extranjería, quien, en un clima de aparente confianza y

real recelo, reconoce que la única manera de acabar con el conflicto colombiano es negociando, «porque para hacer lo de Fujimori hay que violar muchos derechos humanos». Después, este mismo personaje se encargaría de enviar a un agente todos los días para averiguar qué andábamos haciendo en la zona.

En realidad, al entrar en el Chocó nosotros también dejamos de existir, excepto para todo ese mundo armado, ilegal y entrelazado. El cansancio del largo viaje en lancha hace pensar que los atardeceres sobre el inmenso río Atrato son irreales, que las vidas que uno se encuentra en el camino son parte de un cuento que a veces se convierte en un relato de terror. Lo que pase en esta parte del río, medio Atrato, es la historia que no importa; entrar en contacto con ella es como violar un archivo secreto, la vergüenza familiar, quién sabe... Pero entramos.

El primer contacto es a pocas horas de Quibdó. Sólo sabemos que debemos entrar en un afluente del Atrato y esperar que nos encuentren o encontrarlos. En la panga, el silencio tenso se rompe cuando en una de las orillas, entre la vegetación, se distingue un tambo y a algunos hombres cobijados de la lluvia.

Ahí están el comandante Mauricio y Pedro Iscalá, El Paisa. Este último, un libro de historia. De sus 69 años, casi 40 ha estado enmontañado; ha sido «educador» del Frente 57 de las FARC y perfecto altavoz del trasnochado discurso de su organización. «El establecimiento critica a los españoles por la conquista, pero ellos hacen lo mismo ahorita.» El primero, Mauricio, con unos ojos de 39 años que rezuman tristeza, confiesa que lo suyo es «el hacha y el machete», y cuenta cómo entró a la guerrilla tras escapar de una masacre. «A mí amarrado no me van a matar.» Ésta es una de las pocas frases completas e

inteligibles de este comandante del Frente 34, con graves problemas de expresión. Menos frases aún articulan los ancianos de pelo canoso propietarios del tambo en el que se protege media docena de tristes guerrilleros.

-¿Ustedes creen que los muchachos [guerrilleros] luchan por ustedes? -les pregunto en un instante sin testigos.

- Al menos no nos molestan, pero miedo sí que da -dice el anciano mientras aparta los molestos zancudos que se han cebado con la visita de los extraños.

Cada hora que pasamos en el Atrato, donde las distancias se calculan en tiempo, no en kilómetros, queda más claro que ésta es una historia de víctimas, que siempre son los civiles, los campesinos. Pero desde 1998, cuando viajé por primera vez a estas aguas, algo ha cambiado. En esa ocasión tuvimos que dar explicaciones en los retenes paramilitares, fuimos requisados por policías acompañados por miembros del grupo de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia. La situación es otra ahora. En una jugada que redefinió el teatro de operaciones, las FARC tomaron en marzo de este mismo año la estratégica población de Vigía del Fuerte. Dieciocho horas de ataques con cilindros de gas, imposibles de dirigir, acabaron con el cuartel de Policía, la alcaldía, la iglesia y una decena de viviendas civiles. En el ataque murió una menor y el alcalde, además de la mayoría de los agentes de policía. Hace un año, toda panga que cruzara el medio Atrato debía parar en el retén paramilitar de Vigía. Hoy, son dos guerrilleros vestidos de civil y con cadenas de oro al cuello los que, amenazantes, preguntan al fotógrafo qué es lo que está haciendo.

La nueva situación, como todas en la guerra, es coyuntural. Un rumor se extiende por el río como el paludismo: en diciembre volverán a entrar los paramilitares.

Tras dos días de viaje, sol, lluvia y naturaleza aplastante, empezamos a remontar el río Jiguamiandó. Cada minuto da explicaciones. Los sedimentos dejados por las madereras tras explotar lo explotable bloquean y secan la entrada de este afluente del Atrato y los campesinos no quieren limpiarlo porque esa barrera los protege de las incursiones de los violentos. A nosotros nos costó siete horas un viaje que no debería haber supuesto más de cuatro. Pie a río y a empujar la panga; la dureza de la vida en una zona como esta la vamos aprendiendo en el camino. Lo que nos anima es el regalo de la naturaleza que nos muestra iguanas de medio metro, babillas, tortugas... Los testigos silenciosos de la esquizofrenia humana.

La llegada a Bella Flor del Remacho, donde se concentran los campesinos *resistentes*, es diferente a la de hace un año. Entonces, la incertidumbre de lo desconocido anudaba el estómago. Hoy, el reencuentro con esos que quedaron como amigos emociona. Siguen ahí, tras dos años y medio de huida, de vivir encaletados en plena selva (las caletas son pequeños refugios hechos con plástico y madera), de distancia de sus vecinos y de sus propiedades.

La historia de los resistentes comenzó en 1998 y nadie sabe cuándo acabará. Entonces, en la lucha por el control del territorio, los paramilitares ganaron los ríos a la guerrilla. Su llegada comenzó en 1996 y los peores indicios se certificaron entonces cuando los *mochacabezas* aterrizaron en Ríosucio, en el bajo Atrato. Desde ahí, su ascenso fue imparable: Murindó, Vigía del

Fuerte, Quibdó, Istmina... Las FARC, anteriores dueñas de la zona, reaccionaron con ataques indiscriminados, amenazas y bloqueos en el río. En ese momento todavía están presentes, pero desde la toma de Vigía su repliegue a los grandes cascos urbanos ha sido evidente. Para ejercer ese control sobre el medio Atrato y sus afluentes, las AUC mataron en tan sólo un año, y según el registro de la Diócesis de Quibdó, al menos a 160 campesinos e indígenas, sin contar los cadáveres que se perdieron en el río y que nunca fueron denunciados por miedo. En el bajo Atrato, ya cerca de la desembocadura, en el golfo de Urabá (Caribe), las cifras más optimistas hablan de medio centenar de víctimas mortales.

Sólo en el río Jiguamiandó, también señalado como zona guerrillera, los paramilitares asesinaron, entre octubre de 1997 y noviembre de 1998, a más de medio centenar de civiles (en un solo día, el 17 de diciembre de 1997, mataron a 25), quemaron 120 casas y dejaron 117 huérfanos. Y todo ello, según denuncian los campesinos con vehemencia, con la complicidad del Estado, el gran ausente en esta historia. «Hemos vivido la violencia que el Estado ha implantado», insiste el representante de una de las comunidades. Las últimas muertes se produjeron hace tres meses, cuando un comando paramilitar asesinó a dos encaletados y a dos miembros de una vereda aún no desplazada.

«Agarraron a un indígena de nombre Alcides Domicó, a un señor Pablo con un hijo de 18 años, a otro señor Hernández y a sus dos hijos, de 18 y 16 años, y a otro muchacho de 16. A cuatro de ellos... primero les pegaron en la cabeza con un hacha, luego los cortaron en pedazos con motosierra y los tiraron al río.» «En la vereda Caracolí, en el río Jiguamiandó, agarraron al señor Eladio Medrano y con hacha lo picotearon pero picoteadito. Luego tiraron los trozos al río. Buscamos

los restos y sólo encontramos una costilla. De todas maneras, la enterramos.» La memoria no traiciona y los campesinos repiten su historia a quien quiera escucharla para no olvidarla.

Estos paras dejaron un reguero de muerte. Y tras la muerte llega el pánico. Muchos civiles se desplazaron a los cascos urbanos, donde siguen viviendo hacinados, marginados por los otros ciudadanos que los ven como personas de segunda. Otros, los «campesinos resistentes», se quedaron en la zona. Son cerca de 900 personas, 350 menores entre ellas. Ellos dicen no saber «qué es eso de ser neutral». «Estamos en medio de una guerra, nos utilizan como balón, y encima quieren que seamos neutrales. Nosotros denunciemos lo que nos hacen y nos defendemos con las palabras. Ser neutral es callar.» La teoría del sándwich se cumple a la perfección y contradice los principios de la neutralidad. Más de 20 años soportando el paso de guerrilleros por sus tierras, a los que se debe ayudar para no caer en desgracia. Ahora, cuando los paramilitares entran en la zona para expulsar a la guerrilla, los campesinos quedan en medio, sin posibilidad de escapar y sin interlocutores que atiendan a razones. Los resistentes dejan en claro .que para ellos, «ni los unos ni los otros». «Lo que queremos es vivir en paz.»

Después de tanto tiempo en la montaña, aislados entre sí, cocinando sólo por la mañana para que no se vea más humo en el día, borrando las huellas de las trochas que llegaban hasta las caletas, cuando los resistentes se encuentran en Remacho lo que quieren es hablar. Hablar de cómo huyeron de sus comunidades «sin toldillos [mosquiteros], sin cobijas... Ni siquiera dio tiempo a alzar los pañales de los niños» (en la huida murieron cinco menores y dos mujeres embarazadas), de cómo mataron a perros y gallinas para que no los delataran.

- Yo alumbré a la carrera -me cuenta una joven de 24 años-. La niña falleció a los dos meses.
- ¿Y de qué murió?
- De un llanto.

Hablar. Y hablar es lo único que puede hacerse en Remacho, excepto cuando Los Invencibles del Atrato, el grupo de música vallenata creado por estas comunidades, anima la noche. Eso ocurre cuando llegan visitantes. Y con nosotros no fue menos. Vallenatos a la luz de una bombilla alimentada por un pequeño generador de la Diócesis de Quibdó, donde también destilan miedo, malos recuerdos. «Cuando escuche esta bella canción, si quiere saber quién soy yo, soy un campesino de los que usted no mató», canta un hombre de unos 30 años rodeado de una veintena de personas. Junto a él, un niño y una niña bailan como adultos, y Antonio, el animador de todos los encuentros, suelta sus chascarrillos: «Anímense con agua de lluvia. La gaseosa no ha llegado porque los camiones de Postobón que contratamos se quedaron en un retén en Mutatá.» Reírse de la propia desgracia es un modo de resistir. También los cursos de salud, organización y derechos humanos que reciben de la Diócesis de Quibdó y de la ONG vasca Paz y Tercer Mundo. Formación para la resistencia en el territorio y evitar el desplazamiento: primer mandamiento de estos campesinos.

En esta improvisada fiesta me encuentro con Mauricio y María. Nos conocimos hace un año y dejamos demasiadas conversaciones pendientes. La rugosa y grande mano de Mauricio estrecha la mía, débil como la de todo ciudadano, y decidimos practicar ese único entretenimiento amargo: hablar de sus vidas. Mauricio acumula una historia de exclusión que hace aún más valiosa su posición de resistente pacífico. Ahora cuenta

con 53 años, pero cuando tenía unos 18 meses sufrió su primer abandono. El padre, agobiado por las luchas entre conservadores y liberales, en los llamados en Colombia años de La Violencia, huyó a la montaña y lo dejó con un familiar y con trece hermanos de crianza en el costeño departamento de Córdoba. Él ocupó el último lugar hasta que a los 20 años decidió buscar fortuna. Y la encontró. Una finca y una esposa que también lo abandonó y le dejó cuatro hijos. La felicidad que llegó con María fue truncada por los paramilitares, que en 1992 lo incluyeron en las téticas listas de ejecutables por pertenecer a la junta de Acción Comunal de su zona.

«Yo salí huyendo para el Chocó, porque entonces ésta era una tierra tranquila. María se vino embarazada unos meses después y, aunque perdimos la finca en Córdoba, con unos realitos compramos una tierrita y nos iba bien.» Pero en Colombia ya no hay palmo de tierra sin guerra, y la guerra llegó al Chocó. En junio de 1997, una incursión paramilitar a su vereda dejó cuatro muertos y seis casas ardiendo. «Tuvimos que meterle pecho al verde [enmontañarse], como decimos nosotros, porque no teníamos adónde ir y... desplazarnos, eso no. Pensamos resistir hasta donde pudiéramos llegar. Nosotros no nos desplazamos, porque la enseñanza de nuestros abuelos fue para vivir en el campo. Uno en la ciudad se siente enredado.» Dos años encaletados en los que la amargura creció porque dos de sus seis hijos en pareja se perdieron cuando fueron al pueblo más cercano, Bajirá, a conseguir sal y azúcar a precios exorbitantes. «Los vecinos nos contaron que los agarraron los paras, luego los soltaron, pero no sabemos dónde están.»

En este momento han vuelto a su casa. «María se enfermó y a mí me salieron unos granos muy feos por todo el cuerpo. Además la cosa está más tranquila y nos resolvimos a vivir o morir. » Los rumores de una

nueva incursión paramilitar también se alojaron en la vida de esta pareja. «Siempre vivimos con miedo, con mucha zozobra. A veces yo me confundo. Se oye que van a volver a entrar [los paras] en diciembre. Será tomar monte otra vez.» Toda esta catarata de huidas, abandonos y pérdidas dejan huella y rabia. Por eso, aprovechando el clima de confianza y la ausencia de testigos, me animo a preguntarle a Mauricio por algo siempre delicado en estas zonas:

- ¿Y nunca has pensado tomar las armas?
- Pues mire, así le digo... parece que eso terminará por suceder. Va a llegar el día en que vamos a llegar a las armas... parece que eso va a suceder. Usted sabe que lo que lo aleja a uno de las armas son los hijos; yo no quiero que se críen sin un padre, como me ocurrió a mí.
- ¿Por qué las tomarías, Mauricio?
- ¿Sabe usted que nosotros también somos personas? Y no es justo que uno trabaje tanto y que no tenga ni qué ponerse. Eso da muy duro. Uno se acompleja por muchas cosas, de ver que los hijos no piensan y a veces la cabeza se les confunde con algo, por ejemplo, cuando pasan esos aviones raros que les decimos nosotros fantasmas. Ellos [los niños] están acostumbrados a saber que hay un enemigo. Vivir así es muy malo.
- ¿Crees que los políticos, la gente de la ciudad, sabe cómo vivís, lo que sentís?
- No, no saben. Cuando uno ve la televisión y ve a los encorbatados allá, los que mandan..., a veces le echamos la culpa a nuestros abuelos que construyeron este país con las manos para que estos señores se lo roben. Porque ahora, cuando matan a un campesino a nadie le importa, pero si matan

a uno de esos que viven bien rico en la ciudad, entonces hacen ruido dos meses. Nosotros nos damos cuenta de que valemos menos.

Si uno mira estadísticas y recortes de prensa, Mauricio tiene razón. Pero hay algo que sí importa, y mucho: las riquezas del Chocó. Sería ingenuo pensar que la guerra que se lleva a cabo en esta zona del país es caprichosa. El control del territorio es el control de sus riquezas. En el Chocó se está dando una batalla económica, donde sus pobladores estorban. El hecho de que esos pobladores no existan para el Estado y, en buena parte, para el resto de sus conciudadanos, facilita la tarea. Para el Chocó hay grandes planes.

La riqueza potencial del Chocó ha sido objeto de interés por parte de empresas nacionales y extranjeras. El proyecto denominado La Mejor Esquina de América, impulsado por empresarios e instituciones antioqueños, necesita de una salida al Pacífico, y esa salida la da el Chocó. Requiere grandes obras de infraestructura y eso significa energía para construir las carreteras, deforestación, plantas hidroeléctricas -que precisan del desvío del curso de los ríos-, etc. Obviando por quimérico el megaproyecto de un canal seco que una el Pacífico con el Atlántico, existe toda una estrategia para explotar los recursos minerales, madereros, turísticos y genéticos de esa parte del país.

Por eso, Mauricio insiste: «No hace falta que nadie nos diga que defendamos nuestra tierra. Sabemos que es muy rica y no la vamos a dejar. Nosotros tenemos carácter para estar encaletados, para resistir a como venga. De todas formas, ¿para dónde arranca uno? El mundo está casi todo en guerra y en las noticias uno escucha que en la ciudad los desplazados pasan hambre.»

Pero resistir tiene otras connotaciones. Mauricio habla desde la experiencia. Iván habla desde la cultura que le han enseñado. Este mes, el 15 de diciembre, cumple 18 años, aunque su cuerpo no le acompaña. La desnutrición y el duro trabajo lo han dejado con el tamaño de un chaval de 15 años. Sin embargo, Iván ya ha vivido. Nunca ha salido de estas tierras. Aquí nació, aquí ha visto morir a familiares y amigos, y aquí, junto a la caleta de unos tíos, está construyendo su primera casita, que pretende convertir también en el nuevo hogar de sus abuelos.

- ¿Cuándo empezaste a trabajar, Iván?
- A los siete años ayudaba con el machete y el arroz.
- ¿Y no has estudiado?
- Sí, empecé a ir a la escuela a los 10 años.
- Y cuántos grados has hecho?
- Dos.
- ¿Dos en ocho años? ¿Y eso por qué?
- Porque el gobierno no manda maestro, y cuando vienen se van al poco tiempo.

Iván recuerda tranquilo cómo le tocó huir de Santa Fe de Churima, su comunidad al pie del Jiguamiandó, donde fueron asesinadas seis personas. Eso ocurrió el 17 de noviembre de 1997, y le tocó cargar hermanos, sufrir en la selva el paludismo y los aviones. «Me da miedo todavía cuando me recuerdo a la aviación bombardeando estas montañas.» Pero lo peor llegó más tarde, cuando acompañó a su tío Élder, a la abuela y a cinco niños más de camino a Murindó, el pueblo más cercano, donde hay un centro de salud (está a unas seis horas a pie desde sus caletas). «Nos atraparon los paras dizque porque éramos guerrilleros y nosotros no éramos más que unos tristes campesinos. Ahí tomaron a mi tío, lo amarraron y

lo tiraron al río. A mí me ataron a un palo que tenía un hormiguero y querían que me tomara unas pastillas, pero yo no las tomé, no. Mientras, ellos golpeaban y saltaban encima de mi tío en el agua, y cuando lo sacaron ya él botaba sangre por los ojos, por los oídos y por la boca. Ahí nos preguntaban si éramos de la guerrilla y nosotros les dijimos que no, y a la abuelita mía le pegaron una patada para que se callara. Y los niños no hacían sino llorar. Después embarcaron a mi tío en una panga y nunca más lo vimos. Ni el cadáver nos dieron.»

El miedo acompaña desde ese día a Iván, que cuenta la historia con la mirada perdida. Al poner el punto final se levanta corriendo, agarra un balón que nos hizo prometerle un año atrás y comienza a jugar con sus primos, como cualquier otro niño. Compartimos sus confidencias y un sancocho de gallina con coco que cocinó su abuela, cuyo cuerpo habla a la inversa del de Iván: 50 años de vida y un físico de 70. La vida al revés. No tienen casi nada, pero comparten casi todo, hasta las bromas y las risas. El abuelo nos propone que nos llevemos a Iván a la ciudad, pero es él el que se adelanta a la respuesta: «Yo no me voy a un pueblo; allí todo es comprado y aquí uno siembra su tierrita y tiene su comidita... »

– ¿Y si vuelven los paras, Iván?

– Pues tocará resistir otra vez. Abandonar la tierra no se puede.

Nos despedimos de esa familia y emprendemos el camino de una hora a través de pantanos, quebradas y selvas, salpicados de nuestra torpeza y de las bromas de Iván. En la despedida queda comprometido el recuerdo.

De regreso a Remacho, ya caída la noche, la sensación de inexistencia se acrecienta. Nos congregamos alrededor de una de las doctoras que trabajan con la Diócesis de

Quibdó, y que tiene prendido un receptor de radio. Escuchamos que ese día había muerto medio centenar de soldados en enfrentamientos con la guerrilla en Dabeiba, a pocas horas de donde estamos, y que en Bagadó, a tres horas de Quibdó, la guerrilla mantenía una toma desde hacía tres días. Estábamos en medio de una guerra y junto a las víctimas potenciales. Demasiado real para no existir.

A la mañana siguiente, a las seis, comenzamos el viaje de vuelta. Junto a la panga, en Remacho, se congrega la comunidad a despedirnos. Le di un abrazo a Mauricio y él me preguntó cuándo volveríamos a visitarlos. «No sé, Mauricio, sabes que es difícil llegar acá», le respondí. «Ya sé, pero venga antes de que me maten; me gustaría verlo.»

Lo cierto es que esa sensación queda siempre en el aire. En octubre del año 1999, al dejar el Chocó me despedí de Jorge Luis Mazo, sacerdote comprometido hasta la médula con estas gentes, y de Iñigo Egiluz, cooperante vasco de Paz y Tercer Mundo muy querido en la zona. Después de recorrer con ellos estos ríos los consideraba amigos. La despedida fue definitiva. El 18 de noviembre de ese año ambos murieron en un atentado paramilitar. El regreso a Quibdó, tras dejar el medio Atrato, estuvo marcado por ese recuerdo de muerte. Doris, la doctora que nos acompaña, habla, reconstruye lo sucedido para conjurar demonios propios y ajenos. Nosotros, en la noche chocoana, callamos.

La llegada a la ciudad fue una mezcla de alivio y caos. Era el último día de campaña de las elecciones municipales colombianas, y mientras los candidatos tiraban los pesos en conciertos y reuniones, nosotros ayudábamos a gestionar la liberación de varios campesinos detenidos tras ayudar a unas monjas a evacuar los cadáveres de los

seis policías muertos en la toma de Bagadó. La energía se cortó una vez más, debido a las deudas de las instituciones públicas con la electrificadora local, y tocó caminar las sucias y oscuras calles de Quibdó a causa de la huelga del transporte público que ya duraba una semana en protesta por la situación del llamado pavimento: la capa de agujeros que cubre las vías.

Por fin, a la mañana siguiente, al montar a la avioneta que nos hacía corpóreos, quedaba la amargura de saber que para hablar de estos resistentes, para escribirlo, ni siquiera podríamos utilizar sus verdaderos nombres, los que los identifican, porque si los hacemos existir en el papel pueden perder sus vidas.

Estrellas aferradas a la selva

*Vimos las cabezas de nuestros hermanos
arrancadas de sus cuerpos, flotando en el agua.
No dejaremos que la corriente
se las lleve al mar del olvido.*

Iñigo Egiluz

La «capa de agua» es una de las pocas cosas de las que no se puede prescindir en la región colombiana del Chocó. La lluvia es un hilo musical que, como mínimo, comienza al atardecer y no cesa hasta que el sol vuelve a asomar por los resquicios que deja la selva. Iñigo Egiluz tenía una capa de agua muy gruesa, amarilla, grande. Él estaba acostumbrado a la fina lluvia de su Bilbao natal, pero en la selva no hay muchos lugares donde esquivarla. El 18 de noviembre de 1999, Iñigo, junto a otras nueve personas, inició en Murindó el viaje de vuelta hacia Quibdó, la capital de la región en la que este cooperante vasco de 24 años vivía y tenía la base de trabajo. Como siempre, Onofre, un líder de las comunidades negras, orondo, de sonrisa amplia y discurso enhebrado, cargó la panga verde y blanca de la ONG vasca Paz y Tercer Mundo y esperó a los dormilones que no terminaban de acostumbrarse a los madrugones diarios a las cinco de la mañana.

El viaje, como todos en el caudaloso río Atrato, fue largo, toda una jornada para remontar las aguas sentados en unas incómodas bancas de madera que sólo se soportan utilizando la capa de agua como cojín, si no llueve; con la cabeza bien cubierta para evitar la insolación, y la vista presta a detectar la presencia de grupos armados. Esta vez el viaje fue bien. A bordo iban

cuatro campesinos que aprovecharon la seguridad que ofrecía la sigla de PTM para llegar a Quibdó. «Fíjese que desde que llegó la violencia [en 1996], ya nadie se atreve a navegar por el río», cuenta un experto mariner del Atrato.

La respiración contenida con la que se surca ahora el Atrato se libera al ver las primeras luces de Quibdó. Y así le pasó a Iñigo ese jueves. Eran las nueve de la noche y Jorge Luis Mazo, sacerdote colombiano de 34 años, iba en la proa de la panga dispuesto a representar el papel de puntero (navegante que, vara en mano, ayuda a atracar). Pero Iñigo ya se había ganado el sobrenombre de puntero en los cinco meses que llevaba bajando y subiendo el río en misiones humanitarias.

«¡Soy un lobo de mar!», gritó Iñigo, al frente de la panga, de pie, relajado al ver que terminaba el viaje. Chucho, actual coordinador de PTM en Quibdó, respondió con ironía: «Un lobo de mar vasco... Aquí eso no vale, Iñigo, hay que ser un lobo de río.» Y todos rieron... hasta que el ruido del motor de la panga se confundió con el de otro motor, el de la lancha rápida que salió de la nada, que golpeó con violencia la embarcación de PTM. El impacto se lo llevó la proa. Y Rafa, un joven misionero claretiano, sólo recuerda el silencio de Jorge, que ya no estaba a bordo, y cómo, al girarse, escuchó a Iñigo pidiendo ayuda -«¡Rafa, Rafa!»,- enredado en su capa de agua, más gruesa que nunca, más pesada que nunca. Iñigo se alejaba de la panga a la misma velocidad con la que ésta se partía en dos y comenzaba a hundirse, y Rafa sólo podía gritarle: «¡Aguanta, Iñigo, aguanta!» Y a bordo había dos menores que había que salvar [uno de ellos Cristian (véase el Prólogo)]. Rafa vació los bidones plásticos de gasolina para improvisar flotadores. Iñigo desapareció empujado al fondo del río, enredado en la capa de plomo que un día le protegiera del agua.

Cuando llegaron los vecinos del barrio Kennedy de Quibdó en sus cayucos (pequeñas embarcaciones de madera), la voz de Iñigo ya se había perdido y sólo se pudo salvar a los otros ocho pasajeros. Las aguas del Atrato se ensañaron, crecidas por las fuertes lluvias de esos días.

«Han sido los paras. Han estado toda la tarde esperándolos con la panga que robaron a la Cooperativa Murindó, con dos motores fuera de borda de 200 caballos cada uno. Cuando divisaron la panga de PTM, salieron a oscuras, contra ustedes.» Los vecinos de Quibdó confirmaban lo sucedido.

A miles de kilómetros de distancia se repetía la sentencia: «Han sido ellos [los paramilitares]... ¡Malparidos!» El periodista Juan Gonzalo Betancur no podía creer la noticia que escuchó en el radio el viernes 19 de noviembre. La casualidad hizo que estuviera en Madrid, en mi propia casa, cuando pocas semanas antes ambos viajábamos por el Chocó con Iñigo, Jorge Luis, Rafa, Onofre... La rabia pudo ser compartida. Estaba claro quiénes eran los autores y cuáles las consecuencias. El miedo tampoco era un compañero desconocido: tras publicar varios reportajes sobre lo visto en el Chocó en el diario El Colombiano de Medellín, Betancur recibió una amenaza directa de Carlos Castaño, el jefe de los paramilitares causantes de decenas de muertes violentas, desplazamientos forzados de comunidades enteras y, como lo avalaron los testigos, del atentado que costó la vida a Iñigo y a Jorge Luis.

El suceso truncó dos vidas desconocidas para la mayoría de los humanos, pero trascendentales para las víctimas de la violencia del Chocó. Los funerales fueron masivos, el miedo abrumador. Por el cadáver de Iñigo, encontrado 48 horas después del suceso a 15 minutos

de Quibdó, fueron Aitor, su hermano, y Laura, su novia. Entre las cosas que llevaba encima, una libreta y, en una página en blanco, una sola frase: «El río llora en silencio.»

«Buenas tardes, les habla el comandante. Bienvenidos al vuelo de Iberia 438 con destino a Bilbao. La hora estimada de llegada al aeropuerto de Sondika es... las cinco y diez de la tarde. Quiero expresarles que para mí y para mi tripulación es un honor llevar a bordo al cooperante Iñigo Egiluz, asesinado en Colombia.» Ése fue el mensaje que escucharon atónitos los pasajeros del vuelo Madrid-Bilbao del 24 de noviembre de 1999. Así entró la historia de Iñigo en sus vidas. El círculo sólo se puede cerrar deshaciendo el camino recorrido por este joven para comprender, en su totalidad, lo sucedido. Y rascar en la vida de Egiluz se convirtió en otra continua sorpresa.

Iñigo era un joven que, como el resto de su cuadrilla, hizo la confirmación en la parroquia de la Inmaculada, jugaba al fútbol en el campo que hay bajo la autopista de entrada a Bilbao, trataba de arreglar el mundo en las tertulias del bar Xir Gu, y tomaba *calimocho* (esa explosiva mezcla de vino barato y Coca-Cola) en el bar Itxaso. Todo un universo que cabe en un puñado de calles.

Pero el amigo murió lejos de Basurto y, cuando cayó a las caudalosas aguas del río Atrato, enterró una intensa historia de vida que parece increíble. Lo que ocurre es que cada persona que se topó en su camino la corrobora, la matiza, le quita el barniz épico para dotarla de un humanismo un poco pasado de moda. Claro que tampoco es muy normal subirse solo a la montaña -casi siempre al monte Anboto- cargado de libros, con una botella de whisky para combatir el frío de los demonios, y con tiempo para pensar; o fumar,

en día de lluvia, con medio cuerpo fuera de la ventana, provisto de chubasquero, para no molestar a la familia; o querellarse contra una empresa por el impago de un solo día de trabajo; o dejar los estudios a los 16 años para, a partir de ese mismo momento, ponerse a leer como loco la bibliografía que queda fuera del currículo escolar... «Allí [en el instituto] no me enseñan lo que quiero. Prefiero aprenderlo de la vida», le dijo a Iñaki Markiegi, el coordinador de PTM, cuando éste trató de convencerlo de que volviera a estudiar.

Y no es que este joven del barrio obrero de Basurto estuviera hecho de otra pasta, sólo que para él las palabras no eran tan importantes como los hechos. Un tópico sí, pero en su caso bastante apropiado. Quizá fuera determinante para forjar esa personalidad el hecho de tener padres sordomudos, el haber crecido en una casa en la que el silencio era el mayor de los ruidos y donde los gestos eran determinantes. O quizá no, porque el hermano de Iñigo, Aitor, de 28 años, no eligió viajar ni dedicarse a causas sociales. Siguió más bien la senda del común de los ciudadanos: vivir tranquilo, sin molestar y sin que lo molesten. Aitor hace memoria y recuerda: «Cuando se marchó por primera vez [a Guatemala], lo acompañé a Madrid, al aeropuerto, y le dije que no le comprendía, pero que lo admiraba.» Y señala las diferencias: «Yo he sido siempre un llorón, contaba todo. Él era muy reservado, pero te miraba y sabía cómo estabas, tenía esa capacidad.»

La ruta de Iñigo hasta los 14 años fue convencional: pedir unas zapatillas de deporte de marca a mamá, patalear hasta conseguir el dinero para ir a San Mamés (la catedral del fútbol vasco)... Lo normal. Hasta que llegó al instituto, y cambió la ropa, y cambió la mente.

Pudo ser la influencia de las clases de confirmación -como piensa Laura-, o los contactos con el fuerte tejido social organizado que existe en el País Vasco. O no. A sus amigos, a su cuadrilla, no les dio por ahí, aunque le siguieron en algunas de sus locuras lúcidas. Por ejemplo, cuando Iñigo creó con 16 años la ONG *Papeo Pa Tos* (Comida Para Todos) y, a base de fiestas y campañas variadas, logró financiar los estudios universitarios a cinco salvadoreños; o cuando agarró la tienda de campaña y fue uno de los primeros que la plantó en El Arenal, involucrándose de lleno en el movimiento del 0,7% (que reclamaba en el Estado español el destino de ese porcentaje del PIB a la cooperación); o cuando imprimió decenas de camisetas con el lema « Bilbao verde » y la cuadrilla se paseaba por toda la ciudad reclamando más parques; también cuando convirtió la casa familiar en un almacén para el papel que recogían Juan y Bino, dos inmigrantes a los que ayudaba a ganarse la vida. «Eran las cosas de Iñigo.» Suspiro... habla Aitor.

Por eso nadie admite que cuando Iñigo marchó por primera vez, a los 17 años, a Guatemala, estuviera huyendo o haciendo turismo social. Él solía decir que los espacios eran diferentes, pero los problemas de fondo los mismos. Sus amigos, que hablan de ello en la planta baja del Itxaso, reaccionan con cierta rabia cuando se trata de dibujar el perfil de un Iñigo heroico: «Él no se fue porque fuera un puto líder mundial; se largó porque creía en lo que hacía, pero con normalidad, sin darle importancia.» Parece cierto que el viaje a Guatemala fue definitivo. Al volver, todo el mundo notó el cambio en Iñigo. Bebía café como un condenado, comía una sola vez al día y dejó de acudir a la cena de Nochebuena. Radicalizó sus posturas y cierto egoísmo -del bueno, del que no se echa en cara, ese que surge en las personas volcadas en un trabajo que es su vida- asomó por las pocas rendijas que

su habitual silencio dejaba entrever. Es ese momento en que su hermano o sus padres empiezan a saber menos de él que sus amigos.

Decenas de cintas de Silvio Rodríguez o de Mikel Laboa, poemas de Gioconda Belli, todas las venas abiertas de Latinoamérica descritas por Eduardo Galeano o los textos del Che, empiezan a llenar el espacio del joven. Y comenzó a hacerse mil preguntas que trataba de resolver por su cuenta. Como aquel día en que, tras despedirse de sus amigos, de camino a casa, se encontró a una pareja de la policía tratando de llevarse a un vagabundo que dormitaba en el portal del templo de La Inmaculada. Fueron 40 minutos de discusión tranquila, de responder con un por qué a cada argumento de los agentes. No logró evitar que se llevaran al sin casa, pero obtuvo respuestas.

A Guatemala llegó un Iñigo inmaduro -imposible pedir más a los 17 años-, pura pasión y con muchos prejuicios. Su madre fue a pedirle a Iñaki Markiegi que convenciera a su hijo para que no fuera, como cualquier madre. Pero Iñigo se financió el viaje iniciático trabajando de almacenista o vendiendo bocadillos en Bilbao y, finalmente, aterrizó en la comunidad de Copal'aa (agua bendita), desplazada en Chiapas (México) por la guerra cruenta que vivía el país centroamericano.

En Copal'aa se ha llorado la muerte de Iñigo porque él se implicó hasta la médula en el complejo retorno de esta comunidad a Guatemala. Vivió con ellos, comió con ellos, trabajó físicamente con ellos... «Políticamente hablando, era un chavalito. Se movía por instinto y después por conciencia. Guatemala fue para él una escuela», recuerda Joseba, un experto cooperante que conoció entonces a Iñigo. Era el perfecto aliado para PTM, que colaboraba en el retorno, pero Iñigo rechazó

el empleo que le ofreció la ONG. Respondió que prefería la independencia, confesó sus prejuicios hacia el trabajo organizado.

Los 10 meses en Chiapas y Guatemala cambiaron todo. De vuelta en Bilbao, la sombra de Iñigo inundó las instalaciones de PTM. Se le veía trabajar en el computador, caminar de un lado para otro desde las primeras horas de la mañana, leer todo, hablar poco. Reactivó el grupo de derechos humanos de PTM junto a Mikel, otro joven al que conoció en Guatemala, y se volvió a implicar en las luchas locales. Hoy Mikel todavía guarda una botella de ron Medellín que le regaló Iñigo y que se quedó pendiente de un encuentro, de una charla. Mikel también ha dejado pendiente su trabajo en una entidad de análisis internacional para dedicar sus conocimientos de abogacía a gestionar las denuncias y las tareas de presión ante Naciones Unidas y la Unión Europea para que el crimen del Atrato no quede impune.

Volver a Bilbao suponía retomar costumbres (desayunar todos los días en el Itxaso, reunirse con la cuadrilla), relaciones, como la de Laura (la amiga de infancia que termina siendo su pareja) y tomar distancia para abordar nuevos proyectos. Su coherencia gustaba, pero su forma de vida incomodaba. La austeridad de sus costumbres chocaba con la forma de vida familiar, el hecho de ir a todos los destinos como voluntario, sin cobrar una peseta, la independencia y sus denuncias podían causar problemas a la ONG a otros cooperantes. Pero en la balanza, según se deduce de los hechos, se valoraba más la coherencia y la prematura madurez.

Pasado un tiempo, Iñigo ya tenía un nuevo proyecto, quizá parido en el monte Anboto, entre libros. Viajó como voluntario a Colombia, en principio a Quibdó, el lugar en el que perdería la vida, pero hacía más falta en el

sur del departamento de Bolívar, en el retorno de varias comunidades. Allí repartió comida, volvió a compartir veladas con los civiles, el único bando que defendió en público siempre, y cargó de nuevas experiencias su incipiente camino.

Y Colombia no se olvida. En su segundo regreso a Bilbao comenzó a fomentar la creación de una red vasca de solidaridad con el país sudamericano y los libros sobre derechos humanos o desplazamientos forzados comenzaron a pasar por sus manos. En mayo de 1998 se produce la matanza de Barrancabermeja (donde grupos paramilitares acabaron con 33 civiles) y en julio ya estaba Iñigo con los supervivientes, sobre el terreno. Esta vez le acompañó Laura. Ambos viajaron con sus medios y trabajaron durante meses recogiendo la historia de la matanza, información que luego sirvió al Tribunal Internacional de Opinión de la sociedad civil que juzgó posteriormente los hechos.

El activismo de Iñigo crecía al mismo tiempo que la relación con Laura se deterioraba. «Él mismo reconocía que tenía más facilidad para trabajar con la gente que para las relaciones de pareja.» Laura pasea ahora por las calles de Basurto entre los carteles que forran el barrio con la cara de Iñigo y con la palabra «justicia» impresa en castellano y en vasco, el idioma por el que él trabajó tanto.

En Barrancabermeja el tiempo se agotó porque se acabó la plata. Y de nuevo Bilbao, punto de referencia, preocupaciones por el futuro de Euskadi y convencimiento nacionalista. Había que trabajar en las luchas locales porque, como repetía, «cada sociedad tiene la juventud que se merece». Mientras, en Quibdó, Nuria, otra cooperante de PTM, acababa su período en el Chocó. El trabajo era perfecto para Iñigo, y

sus compañeros le animaban. Se lo jugó todo en un amanecer: «Si al levantarme siento que debo de ir, pues voy.»

No fue en esa ocasión. Sería unos meses después, en julio de 1999, cuando aceptara cobrar por lo que había hecho durante los últimos cinco años voluntariamente. En ese momento sólo confiesa miedo a la burocracia que conllevaba la coordinación de los proyectos en el Chocó y, por supuesto, miedo a la guerra colombiana. Sustituyó a Mikel, que cubrió a Nuria durante unos meses. «Chucho [el antropólogo colombiano que trabaja para PTM] y yo le llamábamos desde Quibdó -cuenta Mikel- para convencerlo. Sabíamos que ése era su sitio, su trabajo.»

Cuentan los locales que trabajaron con él en Quibdó que parecía colombiano porque no trataba de explicar lo que ocurre en el país, sino que observaba los hechos con la misma perplejidad y sufrimiento de ellos. El trabajo en el Chocó requería de ese tipo de sensibilidad. Iñigo, junto a los otros miembros de la comisión humanitaria alimentada por PTM, la Diócesis de Quibdó y Justicia y Paz, estaba molestando a los paramilitares. Carlos Castaño, su jefe, no dudó en expresarlo en numerosas cartas, aunque tras la muerte de Iñigo dijera que no sabía de su existencia. Tras el viaje en el que acompañé a Iñigo, en octubre de 1999, Castaño escribía: «Algunos líderes que trabajan con las comunidades [en referencia a la comisión humanitaria] están invitando a periodistas nacionales e internacionales a determinados lugares del Chocó, donde son atendidos por elementos de la guerrilla que se identifican como campesinos y desinforman perversamente a sus entrevistadores en detrimento de las Autodefensas Unidas de Colombia y en defensa de las FARC.» O los guerrilleros son unos genios de la caracterización o a

Castaño le molestó que se contara cómo sus hombres juegan al fútbol con las cabezas de sus víctimas o cómo hacen picadillo con los cuerpos de los campesinos, motosierra en mano.

Los defensores de derechos humanos (Iñigo, Chucho, Rafa, el padre Uli, el padre Albeiro, Jorge Luis, Onofre y tantos...) lo sabían. A bordo de la barcaza en la que se transportaban los víveres para las tiendas comunitarias, rompiendo el bloqueo económico al que las AUC han condenado al Atrato, Iñigo comentaba: «Estamos empezando a molestarles porque se les acaba el negocio de las comisiones y los intermediarios. Veremos cómo reaccionan, pero es que, además de denunciar las matanzas, estamos tocándoles el bolsillo... no sé...» Al bajar de la embarcación, el saludo de rigor: «Hola, padrecito...» E Iñigo que sonreía... : «Joder! qué manía de llamarme así.» Pero es que, para los locales, todo extranjero, blanco y que lleva un cargamento humanitario es un sacerdote. No es que haya muchas visitas en las anegadas aldeas del Chocó.

Cuando hablaba, lo hacía claro, pero cuando se mantenía en silencio, la mayoría del tiempo, Iñigo escribía. Y su cadáver se encargó de proteger algunas de sus notas. Cuenta la realidad en primera persona, como se hace cuando duele: «Vimos las cabezas de nuestros hermanos arrancadas de sus cuerpos, flotando en el agua. No dejaremos que la corriente se las lleve al mar del olvido.» No era literatura. La tranquila expresión de Iñigo se tornó angulosa cuando, durante el viaje de la barcaza, en octubre, se topó con el cadáver de un campesino que flotaba en el agua, abandonado, picoteado por los gallinazos. Y entre sus notas, las reflexiones, la adaptación de lo leído a lo vivido. Para comprenderlo sólo hace falta leer la versión del conocido poema del teólogo Martin Niemöller que se ahogó con Iñigo: «Después asesinaron

y desaparecieron a los de Suroriente, pero como yo no era de allá no me importó. También desplazaron a los campesinos, como yo no soy campesino, no me importó. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde.»

Quién sabe, igual son los recuerdos dulces que se tienen de alguien que ha muerto tratando de echar una mano, pero lo cierto es que cuando se celebró la ceremonia fúnebre en Quibdó, tras arrancar el cuerpo de Iñigo al Atrato, cientos de habitantes lloraron, rezaron y despidieron su cadáver. A esos civiles, en sus textos, Iñigo siempre los describió como «estrellas aferradas a las raíces de la selva». «En el silencio de las veredas abandonadas [por el desplazamiento forzado] empezaron a florecer pequeñas estrellas en la oscuridad de la montaña, de la semilla.»

En Bilbao, muchos confesaron haber perdido algo importante con la muerte de Iñigo Egiluz, pero también susurraban cierta satisfacción porque no hubiera muerto en un tonto accidente de tráfico. «Ha hecho lo que ha querido y ha sido consecuente. Sabía en lo que estaba», concluye Aitor. La rabia, entonces y ahora, se concentra en los paramilitares, porque todos coinciden en que «Iñigo no dio su vida: se la quitaron».

Epílogo

La pobreza de la paz

*Por lo único que no he llorado
ha sido por mi destino,
a pesar de que me ha tocado
sufrir mucho.*

Cristóbal Virviescas

En una ocasión discutí muy acaloradamente con un amigo colombiano. Creo que es la primera vez que he perdido los estribos, el control de mí mismo. Mi amigo colombiano es de estrato seis, el más alto -curioso sistema de redistribución de la riqueza pública que ha terminado siendo un aparato de discriminación pública-, y recibió una exquisita educación dentro y fuera del país. Ha viajado, ha tenido la oportunidad de ver mundo y mundos, de volver a Colombia y establecerse. Este amigo, digo, aseguraba en esa discusión -ya me había explicado antes su tesis- que en este país sólo hacía falta acabar con los grupos armados ilegales, que sin esa «molestia» Colombia saldría adelante. Yo intenté explicarle que, desde mi cómodo punto de vista europeo y por tanto decadente en más de un sentido, los problemas eran más profundos. Le conté que del total de muertes violentas que hay al año en Colombia, tan sólo el veinte por ciento tenían relación directa con la guerra no declarada que soporta el país; le hablé de la pobreza tan delatadora que yo había visto en los campos, y traté de convencerle de que el asunto era más complejo. Por supuesto, no logré salir ganador de la batalla argumental.

Me ha ocurrido decenas de veces con amigos o desconocidos colombianos (antes sólo de clase alta, ahora también taxistas y vendedoras) que han tratado de convencerme de que todo el problema reside en el conflicto armado. Escuchando la batería de propuestas que colgaban de los puestos del mercado del voto en las últimas elecciones (mayo de 2002), los políticos también piensan igual. Es posible que yo, como buen europeo, esté despistado -casi siempre pecamos de una miopía y de un eurocentrismo pasmoso-, pero no quiero que, quien haya leído este libro hasta este punto, crea que los problemas de Colombia (Chocó incluido) tienen que ver exclusiva o principalmente con la violencia ‘armada’.

Desde que conozco este país he viajado en numerosas ocasiones a Barichara, uno de los pueblos de moda en Colombia en este momento, residencia creativa de artistas, refugio de tranquilidad para empresarios y estadistas, centro de elogios por su arquitectura, por su historia, por su crecimiento turístico. Barichara, en el departamento de Santander, me ha acogido siempre como turista accidental lleno de buenas intenciones y en busca de sosiego. Y creo que recién en mi último viaje a esta población conocí algo de Barichara tras entrevistar a profundidad a varios habitantes.

En Barichara, ¡oh, sorpresa!, la guerra sólo aparece en el televisor. Puedo asegurar que no hay nada parecido a la guerrilla o a los paramilitares. El Estado está presente. Hay colegios, puestos de salud, alumbrado público, agua potable, vías, exposiciones culturales... Es decir, Barichara tiene todo aquello que reclaman los habitantes del Chocó. Sólo hay un punto común entre las gentes de uno y otro lado: la pobreza extrema.

En el bello pueblo de «piedra y tapia pisada» hay un alto índice de violencia intrafamiliar que no aparece en las

estadísticas ni es tema de conversación. El alcoholismo es tan generalizado como el desempleo y la desesperanza; el cansancio es patológico. ¿Cómo es posible si no hay guerra, si los malos nunca han amenazado al pueblo, si nobles colombianos de renombre habitan sin miedo alguno las casas vendidas por los nativos?

«Trabajar es bonito»

La casa de Carlos y Mariela es grande, antigua, limpia y acogedora. Está situada a unos 30 minutos de Barichara manejando un todoterreno por trochas destapadas. La casa acogió a los trece hijos e hijas de Carlos y Mariela. Hoy sólo viven en ella Juan de Dios, el anciano y lúcido padre de Mariela, y dos de los hijos de esa prole vasta y migrante. Los demás están en Bogotá o en Barranquilla.

Mariela luce cansada. Su jornada empieza en la madrugada con la hervida del tinto y después su lista de obligaciones se hace interminable, entre lo doméstico, las labores agrícolas y la atención a los suyos. Pero a Mariela le gusta trabajar. «Trabajar es bonito, porque uno no piensa tantas cosas; pero hay días que una...» Trabajar es bonito, sí, pero si a cambio se consiguen los recursos para subsistir, para tener lo propio, para ofrecer un futuro a los hijos. Eso ya no es posible. Carlos y Mariela no han visto entrar una moneda a la casa desde hace seis meses, y la última vez que recogieron la cosecha de tabaco y la llevaron a Protabaco, la empresa cuasi monopólica en la zona, no se lo quisieron comprar. Cuando tienen suerte y la cosecha tiene salida, reciben entre 150 mil y 250 mil pesos, dependiendo de la calidad del fríjol y del tabaco. El único consuelo es que, como campesinos, siempre tienen un sembrado de supervivencia, el de autoconsumo, y con él pueden evitar el hambre, no la pobreza.

A la falta de ingresos se une la tristeza por la partida de los hijos. La mayoría probaron suerte en el campo y se dieron cuenta de que es esquivia para el campesino. Cansados, tras uno o dos años de sembrar para no cosechar, se fueron a la ciudad, a buscar un pírrico salario mínimo (algo más de 300 mil pesos, unos 130 dólares) que apenas alcanza para comer y alquilar pieza. En todo caso, es mejor que no estén en la casa de sus padres, porque ésta también está a punto de dejar de ser de ellos. Durante 30 años, Carlos y Mariela han vivido en el caserón, lo han cuidado, lo han mantenido en pie, han cultivado la tierra. Lo han hecho como *vivientes*. En noviembre de 2001 murió el propietario de la finca y el proceso de sucesión está a punto de echarlos de su legítimo hogar.

El campo, como confirma Juan de Dios, ya no da, y la historia de Mariela y Carlos se repite por todo el municipio. Las razones tienen que ver con el régimen de aparcería, en el que el propietario gana veinticinco por ciento de la producción de la tierra sin arriesgar un gramo de abono; con la fluctuación de los precios que fijan los compradores de cosechas en un sistema cuasi feudal expuesto a una apertura comercial entre países pobres que se traduce en canibalismo; con la falta de mejoras técnicas en los sistemas de producción (estancados en la tradición y expuestos a plagas y otras inquinas de la naturaleza), y con un Estado presente, pero corrupto.

La mayoría de los líderes comunitarios y culturales, de los maestros, de los jóvenes que entrevisto, señalan a la corrupción y a la «politiquería» como las culpables de muchos de los males que aquejan a un municipio «pacífico». Otros, como Cristóbal Virviescas, segundo cacique del Cabildo Guane, no reconocido por el Gobierno central, prefiere asumir responsabilidades: «De pronto le echamos la culpa a la historia, cuando

quizá la culpa sea nuestra por no hacer nada.» Cristóbal cuenta cómo en las últimas elecciones a la Cámara (en marzo de 2002), a las personas de su vereda, Carare, que votaron por un determinado candidato se les pagaba con cuatro láminas de zinc, diez bultos de cemento y cien ladrillos. Y Cristóbal se pregunta: «¿ De quién es la culpa: del que da o del que recibe?»

El inmediatismo prima, el no-futuro hace que el presente, en algunos casos, sea ruin. Cristóbal, a sus 48 años, también coincide con otros líderes del pueblo en que en el sector turístico se está «explotando al visitante». La filosofía parece ser sacar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible, aunque se mate a la gallina de los huevos de oro. Es cierto que, como en el caso del tabaco o el frijol, los mayores beneficios del negocio turístico no son para los baricharas, sino para los propietarios de hoteles y restaurantes, la mayoría, foráneos. En el fondo es como el negocio de la cocaína: unos la cultivan y la procesan y son los comercializadores de Estados Unidos o Europa los que se construyen palacios de oro a costa de las narices.

En Barichara ya nadie sabe liar tabaco. Allí ya no se embolsa o comercializa el frijol, ni se vende artesanía propia, ni se controla el alojamiento y alimentación de los turistas. Todo viene de fuera y se lleva lo de dentro.

Vicente Cadena, un creativo y sorprendente carpintero local, ve su pueblo dentro de 10 años convertido en una «Cartagena de indias, con una zona amurallada manejada por gente de fuera y con los habitantes del municipio viviendo en extramuros». Es la sensación generalizada después de un rato de «conversa» en el que se pasa sistemáticamente de una descripción bucólica del lugar a una pesadilla de soledad. «Se alimenta uno de paz, y eso adormece», dice el párroco Jorge Velandia.

Pero conversando con una joven del pueblo aparece la cuestión de si es la paz lo que adormece, o la pobreza.

En el primer caso, el de la paz, prefiero no pensar que la paz sea mala (al igual que me niego a creer que es el desarrollo en sí el que lleva a los europeos tan habitualmente al diván del psiquiatra). En el segundo caso, la pobreza lleva a ese inmediatismo del que hablaba antes y a cierta renuncia a la dignidad propia, a los derechos humanos que hay antes de la guerra. En algún punto de este libro hablaba de la Declaración Universal aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus treinta artículos se empeñan en recordarnos que los derechos humanos también son el derecho al trabajo, a la propiedad individual y colectiva, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de asociación, a la seguridad social, al descanso y disfrute del tiempo libre, a la educación...

Sin embargo, en Barichara he visto a los ciudadanos y ciudadanas renunciar a esos derechos por unas monedas, por algo que echarse a la boca.

Hay fundaciones que, bajo la apariencia de corderos, hacen de lobos al explotar a trabajadores que por ocho horas de trabajo diarias, seis días a la semana, no logran más de 200 mil pesos al mes (unos 85 dólares); el propio municipio prefiere a un contratista barato que a uno que contrate legalmente a sus trabajadores, y los aparceros tienen que repartir un cuarto de la nada que consiguen con propietarios que no pisan sus fincas.

Si a estos problemas que surgen de la pobreza, de la falta de empleo digno, se suma la aculturación que llega por la televisión y los mitos urbanos traídos por los nobles residentes de las más bellas casas llegados de Bogotá o Bucaramanga, se detecta de inmediato la pérdida de identidad, la creencia de que todo lo externo

es mejor, más bonito y más beneficioso. Es mejor, pues, malvivir en Barranquilla o Santa Marta con 300 mil pesos, como hace la mayoría de los jóvenes del pueblo, a pelear con la naturaleza en los campos de cultivo. Es mejor ser universitario, ser llamado «doctor» o «doctora», que trabajar en el agro o reparar motores, y ese endiosamiento de la educación superior lleva a acabar con los talleres de oficios que mantenían la viabilidad del instituto de secundaria. Es mejor comer pizza que enfrentarse a la carne oreada con yuca y papa.

Cristóbal es uno de los pocos campesinos que puede contar cómo sus hijos varones trabajan la tierra que antes él arañó. La filosofía que dice haberles transmitido es: «Si quieren ganar plata, vayan a la ciudad a buscar plata, pero si quieren vivir, quédense aquí, porque, para vivir, la plata no es lo importante.»

Barichara es un entorno de paz y tranquilidad, pero no logra superar la piedra de la pobreza y la exclusión.

La impresión de un observador incrédulo es que detrás del miedo a la violencia que expresa la mayoría de colombianos, con todos los argumentos y la razón, se están ocultando otras realidades que explican el porqué de la situación económica, social y cultural del país. Puede ser, no lo sé, miedo a la verdad. Y siento que ese miedo ha regalado mucho terreno a la violencia.

Cuando hay un rumor de un leve hecho violento en una zona, inmediatamente el miedo la despeja. Los habitantes de Colombia entregan de manera *generosa* ese espacio a los violentos. Cuando vemos hechos violatorios de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, o, para ser menos ambiciosos, cuando somos testigos de la injusticia más básica, callamos y le volvemos la espalda a esa realidad para no tener problemas. Cuando nos hablan de los

negros o los indígenas, a los blancos y mestizos nos da miedo enfrentarnos a la realidad de un país diverso, a ritos y costumbres que chocan con los propios. Cuando se piensa en la paz, al establecimiento le da miedo renunciar a alguno de sus tantos privilegios. Cuando la cooperación internacional se enfrenta a la muerte y no puede calificarla dentro de indicadores de resultados, la cooperación comienza a hacer agua.

En Barichara tuve la oportunidad de sentarme con Urbano Sánchez, un hombre grande y de tez quemada por el sol, con el sombrero blanco pegado como apéndice del cuerpo y 84 años sobre unas espaldas que sufrieron a costa del oficio de arriero que sus pies soportaron con entereza durante décadas. Urbano dice haber sido «muchas veces viejo» y cree en las ánimas que lo alejaron de la muerte en esos caminos que recorría a punta de guarapo entre Barichara y Bucaramanga. Urbano me contó historias de trabajo y sudor, de tiempos pasados y de incomprensión de los actuales, y también me dio una lección: «Miedo hay de muchas clases, pero si usted no le vuelve la espalda al miedo, él no le asusta.»

La pregunta que surge al final de este texto, al igual que al principio, es: ¿será lo mismo estar vivo que vivir? ¿Será la muerte la única amenaza para la vida?

Cronología parcial e inconclusa del Medio Atrato

1991

5 y 6 de Febrero

Se sella la alianza entre comunidades negras e indígenas en el encuentro Kunta Kinte organizado por la OREWA en Quibdó para que el *constituyente* indígena Francisco Rojas Birry lleve las propuestas de negros y raizales a la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución de Colombia. Entre los asesores que acompañaron a Rojas Birry a Bogotá estaba **Nevaldo Perea**.

Mayo

Desde este mes se dan diversas tomas pacíficas (del INCORA, de la Catedral y de la Alcaldía de Quibdó) y diferentes actos reivindicativos ('telegrama negro' = 10.000 telegramas enviados a los *constituyentes*, toma simbólica a la embajada de Haití, actos culturales por todo el Pacífico colombiano) para presionar a la Asamblea Constituyente.

4 de julio

Se promulga la nueva Constitución Política de Colombia que reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. La Constitución incluye el Artículo Transitorio 55, que determina un plazo de 2 años para desarrollar su contenido en forma de ley.

1992

13 de febrero

La guerrilla de las FARC se toman Juradó, destruyendo el cuartel de Policía (1 teniente muerto y 2 agentes heridos).

1993

Como desarrollo del Artículo Transitorio 55 se aprueba la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos territoriales, socio-culturales y políticos de las comunidades negras.

1995

El Decreto 1745 de 1995 reglamenta el capítulo III de la Ley 70 dedicado a la titulación colectiva del territorio. A partir de 1996 se comenzarán a otorgar los primeros Títulos Colectivos para las Comunidades Negras. Curiosamente, a la vez que avanzan las titulaciones lo harán también los paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

1996

Febrero

Desde febrero de 1996 se dan combates en el área rural de Riosucio entre paramilitares de las ACCU y la guerrilla de las FARC. El día 24, la Fuerza Aérea bombardea varias veredas del río Salaquí y entran los paramilitares. Comienza el éxodo de personas hacia el casco urbano de Riosucio (unas 200 familias).

Abril

Los paramilitares bloquean la navegación por el río Atrato.

En el Foro por la Paz en Quibdó, los campesinos, indígenas y afrodescendientes denuncian que el 24 de febrero a plena luz del día llegaron 5 pangas a Riosucio con unos 125 hombres fuertemente armados y ataviados con prendas militares. En el grupo había varios comandantes

paramilitares y estuvieron entrenando a la Policía para prepararlos ante una posible toma guerrillera.

A mediados de año los paramilitares de las ACCU entran en El Carmen de Atrato, provocando el desplazamiento de los habitantes de la carretera Quibdó-Medellín.

En agosto, los paramilitares asedian Pavarandó.

Noviembre

180 pobladores chocoanos se desplazan a Panamá y 88 de ellos son deportados a Colombia por las autoridades panameñas.

Diciembre

60 hombres de las ACCU se toman el casco urbano de Riosucio (6 desaparecidos y 5 heridos).

1997

Enero

El 18 de enero unas 100 personas se desplazan desde Riosucio a Turbo huyendo de la violencia.

Las FARC atacan el casco urbano de Riosucio el 19 de enero (5 muertos y 7 heridos).

A 25 de enero ya se habían desplazado 1.500 personas de Riosucio.

Febrero

Las ACCU junto a miembros de la Brigada XVIII del Ejército desatan la “Operación Génesis” que provoca uno de los mayores desplazamientos masivos forzados conocidos en la región. Entre otras, son desplazadas 24 comunidades del río Cacarica. En marzo, unas 650 personas de esta zona se desplazan, quedando 300 en Bocas del Atrato y otras 350 en el Coliseo deportivo de Turbo.

A finales de abril se hacinan unas 1.350 personas en el Coliseo de Turbo.

Unas 350 pasaron a Payá en Panamá y posteriormente fueron repatriados ilegalmente en aviones militares del Ejército a Colombia, a Bahía Cupica (Nuquí), a una hacienda que había sido de Pablo Escobar.

Tras los bombardeos de las veredas de los ríos Salaquí y Truandó, los campesinos de 27 veredas se dirigen hacia Mutatá. Los militares de la XVII Brigada detiene la marcha de 2.880 desplazados en Pavarandó. Los marchantes afirman que no quieren bloquear la vía al mar pero el Ejército no les deja pasar porque opina que es la ocasión de las FARC de cortar la vía (*dixit* el general Rito Alejo del Río).

Otras 1.160 personas huyen desplazadas hacia Quibdó, según contabiliza la Diócesis de Quibdó.

Abril

Las ACCU incursionan en Panamá (Titiná y La Bonga).

El INCORA se compromete a acortar los trámites de las Titulaciones Colectivas.

Mayo

Entran los paramilitares al Medio Atrato. Murindó queda sitiado por los paramilitares.

En Pavarandó se hacinan 4.500 desplazados.

Junio

Los 2.500 habitantes de Murindó abandonan la población por el recrudecimiento de los combates. Los últimos 25 pobladores saldrán el 19 de octubre gracias al apoyo de la Cruz Roja.

Julio

Los paramilitares entran en Vigía del Fuerte y se llevan por la fuerza a 22 personas.

10 de Octubre

Las 49 comunidades de desplazados asentadas en Pavarandó se declaran como Comunidad de Paz.

Noviembre

Es asesinado en Medellín el alcalde de Murindó. Este alcalde afiliado a la Unión Patriótica (UP) había tenido que abandonar Murindó en junio por amenazas de los paramilitares.

Diciembre

Fuertes combates en el área del Jiguamiandó entre las ACCU y las FARC. Los paramilitares intentan llegar al centro de operaciones del Bloque José María Córdoba de las FARC, incursionando en Bella Flor del Remacho y amenazando a todos los habitantes de la cuenca (entre 26 y 50 muertos).

Los paramilitares incursionan en Pavarandó asesinando a unas 40 personas, según denuncian los campesinos.

70 desplazados se toman el Coliseo de Quibdó.

Las Gobernación del Chocó maneja una cifra cercana a 12.000 personas desplazadas en el Bajo y Medio Atrato.

1998

Llegan 780 nuevos desplazados a Pavarandó, que se suman a los 3.500 allí hacinados.

A lo largo de todo el año las ya denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometen 41 asesinatos en Quibdó en lo que denominan como 'limpieza social'.

Los muertos no hablan

Febrero

Los paramilitares asesinan a 6 campesinos y 1 indígena en Urada, cerca de Pavarandó.

Marzo

Unos 1.000 desplazados retornan a Domingodó.

Junio

Fuertes enfrentamientos en el área rural de Murindó (veredas Las Islas, La Negra y Bartolo). Se habla de numerosas víctimas civiles entre la población campesina que se refugia en el área. El Ejército dice que enviará tropas a Murindó, ya que en este municipio no hay fuerza pública.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denuncia que en los combates masacraron a entre 15 y 40 indígenas y que hay 8 desaparecidos. Finalmente se reconoce que se confundió el número de desaparecidos con el de muertos.

El Comandante de la IV Brigada del Ejército es herido mientras sobrevuela en helicóptero el área de los combates.

Una comisión humanitaria logra llegar a la zona y constata que murieron 5 personas, 26 se encuentran desaparecidas y 19 viviendas quedaron destruidas. 10 indígenas de la comunidad de Bartolo se encuentran desaparecidos. El enfrentamiento duró 8 días y los habitantes de la zona relatan que hubo bombardeos desde helicópteros y desde una avioneta. 300 campesinos y 200 indígenas se refugian en el monte para huir de los combates.

Los paramilitares de Carlos Castaño declaran que las FARC han sido desterradas de la región pero en agosto se generalizan los combates en Murindó, Vigía del Fuerte y Riosucio por ofensiva de las FARC.

Agosto

9 militares muertos, 12 heridos y 12 posiblemente secuestrados es el balance que dejan los combates entre las FARC y el Ejército en Pavarandó, donde todavía quedan 1.000 personas desplazadas, que se volvieron a desplazar hacia Belén de Bajirá en agosto por miedo a incursión paramilitar.

Nuevos combates entre el Ejército y las FARC dejan 60 muertos y un centenar de heridos. El Ejército lanzó la ofensiva para detener el avance de 3 frentes de las FARC (unos 1.000 hombres) y para intentar rescatar los 12 militares secuestrados.

702 personas se desplazan de Vigía de Curbaradó por miedo a toma de las FARC y por estragos invernales (inundaciones).

Septiembre

Comunidades negras, indígenas y campesinas denuncian que en el Medio Atrato las ACCU ejercen dominio absoluto ante la pasividad de las autoridades militares y administrativas de la zona. Como ejemplo, ponen la connivencia de policías y paramilitares en Vigía del Fuerte y en Bojayá.

Octubre

El día en que se posesiona Pastrana como Presidente de la República, los 850 habitantes de Curbaradó se desplazan hasta Riosucio (retornarán en diciembre).

Noviembre

Las FARC atacan la vereda La Secreta, bastión de los paramilitares de los hermanos Castaño en Pavarandó. Según el parte de guerra de las FARC en los combates murieron 32 paramilitares y vieron como los paramilitares eran apoyados por helicópteros Black-Hawk. Según

los paramilitares murieron 19 de sus hombres y 16 guerrilleros.

Las Comunidades Negras del Medio Atrato obtienen la titulación colectiva (695.254 ha) a nombre del Consejo Comunitario Mayor de la ACIA.

El 18 de noviembre es asesinado en Lloró el religioso colombiano Michel Quiroga.

1999

Gran ofensiva nacional de las Farc entre abril y junio. En el cañón de la Llorona (estratégico acceso al Urabá) las FARC mata a 19 soldados y ataca diversos bastiones paramilitares.

Abril

Las AUC incursionan en la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís asesinando a 11 personas y llevándose a 7 que posteriormente serán liberadas.

19 de Noviembre

Los paramilitares atacan el bote de una comisión humanitaria de la Diócesis de Quibdó y PTM en las afueras de Quibdó asesinando al cooperante vasco Íñigo Eguíluz y al sacerdote colombiano Jorge Luís Mazo.

Diciembre

FARC toman Juradó (37 infantes de marina muertos, los policías quedan como rehenes). Más de 665 indígenas, negros y mestizos se desplazan a Panamá.

2000

Entre febrero de 2000 y marzo de 2001 retornan todos los desplazados del Cacarica hacia dos asentamientos localizados en esa cuenca.

Marzo

Las FARC toman Vigía del Fuerte y Bella Vista (21 policías y 9 civiles muertos, entre ellos el alcalde)

Agosto

Las FARC retoman El Carmen de Atrato

Octubre

En acción conjunta, FARC y EPL toman Bagadó

Septiembre

Los Desplazados de Cupica se reencuentran con sus familiares en Turbo.

2001

18 de enero

FARC asesina al alcalde de Juradó (era el alcalde más joven de Colombia)

Junio

Las AUC (Bloque Metro) incursiona en el Alto Baudó y como consecuencia se desplazan 2.150 personas a Quibdó, 500 hasta la punta y 4.000 a Istmina.

2002

Abril

A finales de abril, las AUC desencadenan la operación “Tormenta del Atrato”. Varias embarcaciones con 400 paramilitares salen desde Necoclí y pasan frente a los controles de policía de Turbo y Riosucio sin ser molestados. Los 400 paramilitares ocupan Vigía del Fuerte y Bojayá.

2 de mayo

Después de la incursión masiva paramilitar el 21 de abril en Vigía del Fuerte y Bojayá tras pasar frente a controles policiales y militares que no los interceptaron, las FARC

entraron a la cabecera municipal de Vigía el 30 de abril. El 2 de mayo, en medio de los enfrentamientos en el casco urbano de Bellavista, guerrilleros de las FARC lanzan dos pipetas artesanales explosivas contra un grupo de paramilitares que se protegían junto al templo católico, donde se refugiaban cientos de civiles. La consecuencia del crimen de guerra se cifró en 79 muertos (entre ellos muchos menores), cientos de heridos y miles de desplazados.

30 de octubre

1.700 personas del río Munguidó se desplazan a Quibdó debido a los combates entre el Ejército y las FARC.

2003

Enero

Incursión paramilitar en Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, en el corregimiento de Puerto Lleras, a orillas del río Jiguamiandó.

Guerrilleros del ELN hurtaron 2 motores fuera borda, gasolina y herramientas a la ACIA. Posteriormente asesinaron a 2 de sus miembros en Campo Bonito (Quibdó).

Febrero

Combates entre Ejército y ELN en Lloró (3 guerrilleros muertos y un civil herido). El Ejército ejecuta 2 indígenas en Tadó.

Marzo

Incursión paramilitar y posterior desplazamiento de la población en Puerto Lleras (Jiguamiandó).

Abril

Tropas del Ejército Nacional originaron el desplazamiento forzado de 179 personas pertenecientes a la Comunidad Indígena de Mumbú en Lloró. Según la denuncia los

indígenas se desplazaron “por la continua presión, bloqueo y las amenazas de miembros del Ejército”.

Mayo

Paramilitares ejecutan a 3 campesinos en Carmen del Darién.

Noviembre

Acia, Orewa y Ascoba, con el apoyo de las Diócesis católicas del área, organizan el ‘Atratiando’, una comisión nacional e internacional en la que varias ‘lanchas’ (grandes barcos de carga) navegan desde Quibdó a Riosucio por primera vez desde que en abril de 1996 los paramilitares bloquean la navegación por el río Atrato, rompiendo el ‘embargo’ de facto que dura más de 7 años.

2004

Enero

El Ejército ametralla y bombardea Nueva Esperanza (Carmen del Darién) desde 2 helicópteros.

Febrero

Paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC sostuvieron combates con las FARC en la comunidad indígena Playita , provocando el desplazamiento forzado de 159 personas.

Marzo

Tropas del Ejército amenazaron de muerte a los pobladores del barrio Villa España, durante operativo conjunto realizado con miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación en Quibdó.

Combates de las FARC y el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC en la zona rural del municipio de Bojayá.

Abril

La Diócesis de Quibdó, la ACIA y la OREWA publican la ‘Carta abierta al presidente de la República sobre la crisis de legitimidad en la región del Atrato’ en la que expresan, entre otras cosas, su preocupación por la pública connivencia entre la fuerza pública del Estado y los grupos paramilitares, con la inclusión de numerosos datos que así lo confirman.

Noviembre

El Bloque Élmer Cárdenas de las AUC presenta el PASO: “Modelo de negociación centrado en un Proyecto de Alternatividad Social (PASO) propuesto por el bloque Élmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas al gobierno nacional”. En el PASO se propone el empleo de los desmovilizados en diferentes proyectos agroindustriales.

Diciembre

El Ejército se retira del corregimiento de Napipí (Bojayá) dejando que se instale una base paramilitar.

2005

Desplazados de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó denuncian ante la Fiscalía que una parte de sus tierras fueron plantadas con palma aceitera durante su desplazamiento.

El ERG (Ejército Revolucionario Guevarista) emboscó a la Policía en la vía Quibdó-Tadó (muertos 10 policías).

Febrero

1.700 personas se desplazan desde el río Bojayá hacia la cabecera urbana para evitar quedar en el fuego cruzado entre las AUC y las FARC.

2 nuevas víctimas del Ejército en Quibdó, que sigue torturando y ejecutando civiles, a quienes presentan

como guerrilleros muertos en combate (los mal conocidos como “falsos positivos”).

Abril

Durante ese mes las FARC da muerte a 4 campesinos en el río Buey.

Las tres Diócesis del Chocó y las 47 organizaciones que hacen parte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó suscriben la ‘Segunda carta abierta al presidente de la República sobre la crisis de legitimidad del Estado en la región del Atrato’, expresando su rechazo ante el empeoramiento de la situación de las comunidades.

Mayo

Unas 1.000 personas se desplazan del río Buey por miedo a combates entre el Ejército y las FARC, además de por el bloqueo alimentario que sufren.

Junio

El comandante paramilitar Vicente Castaño reconoce que el proyecto palmicultor en el Bajo Atrato fue impulsado por los paramilitares y congregó a varios empresarios del país.

Agosto

Las FARC matan a 4 campesinos en Bocas de Nauritá (Quibdó).

Diciembre

Las FARC incursiona en Bagadó (4 heridos, una niña de 2 años)

2006

Marzo

Las Comunidades indígenas del área de la carretera Quibdó-Medellín denuncian un estado de física hambre

debido al confinamiento y bloqueo al que se ven sometidos por parte de los grupos armados.

Enfrentamientos entre el Ejército y las FARC en Bagadó.

Marzo

Las FARC matan a 2 personas en Vigía del Fuerte

Abril

Comienza el desmonte del Bloque Élmer Cárdenas en tres fases entre abril y agosto, desmovilizándose un total de 1538 hombres y mujeres. Este proceso fue independiente a los propiciados por los Acuerdos de Santa Fe de Ralito.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señala al Bloque Élmer Cárdenas como responsable de haber cometido más de 110 crímenes de lesa humanidad, entre ellos 23 desplazamientos forzados.

Mayo

Enfrentamientos entre las FARC y el Ejército en los ríos Murrí, Bojayá y Napipí. se dan nuevos enfrentamientos en julio en Mesopotamia (Bojayá).

Octubre

La ACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, denuncian la grave situación de las comunidades afrodescendientes del río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades de Punta de Ocaidó (municipio de Urrao), Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín (municipio de Vigía del Fuerte). Desde el martes 24 de octubre se dieron combates el Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades.

2007

Mayo

Unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional causaron la muerte de 1 niña indígena de seis meses de edad y produjeron heridas a 49 indígenas entre niños y adultos. También son responsables de la desaparición de 2 niñas de 6 y 4 años de edad. Igualmente, detuvieron arbitrariamente a dos misioneras de la Diócesis de Quibdó y causaron daños a bienes civiles. Así mismo, cuatro mujeres indígenas en estado de embarazo, que fueron golpeadas o sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por los miembros del Esmad, perdieron a sus hijos.

A partir de junio comienzan a incursionar los paramilitares autodenominados como Águilas Negras en distintos municipios del Chocó (Istmina, Medio Baudó, Condoto,...) asesinando a un número indefinido de personas.

Noviembre

Guerrilleros del ELN secuestran a la alcaldesa de Bagadó.

Diciembre

La Fiscalía General de la Nación comienza un proceso de investigación contra 13 compañías y 23 empresarios palmicultores por presunta adquisición ilegal de predios en territorios Colectivos del Bajo Atrato.

2008

Dos años después de la desmovilización se conoce públicamente que “El Alemán”, Comandante del Bloque Élmer Cárdenas, no había desmovilizado a 156 niños que eran explotados como combatientes al momento de la entrega de armas, y que los devolvió a sus casas.

Abril

Hostigamiento de la guerrilla a la Policía en Tutunedo-Quibdó (4 heridos).

13 de julio

Último combate del ERG (3 guerrilleros muertos).

Agosto

Se desmovilizan los 45 hombres del ERG (Ejército Revolucionario Guevarista). Esta guerrilla nace cuando 18 hombres pertenecientes al Frente Che Guevara del ELN abandonan esta guerrilla por considerar una traición la negociación con el Gobierno de Gaviria. Su epicentro de acción fue el Carmen de Atrato y la carretera que une Quibdó y Medellín.

2009

Junio

La comunidad indígena Embera Dobida Pichicora se encuentra confinada en Bojayá por causa de acciones de las FARC (orden de no movilizarse y minas antipersona), al igual que la comunidad indígena Peña Negra (Bojayá) y la comunidad indígena Embera Katío El Dieciocho (carretera Quibdó-Medellín).

Agosto

Aguilas Negras actúan impunemente en Juradó.

Octubre

Histórica sentencia en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, Alcaldía de Carmen del Darién y otros por el despojo de tierras de los Títulos Colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó para la palma aceitera.

Diciembre

FARC mata a 3 campesinos en Caño Claro, Curbaradó.

2010

Enero

El Ejército bombardea la Comunidad Indígena Alto Guayabal en el resguardo Urada Jiaguamiandó causando 4 herido graves. Los indígenas denuncian que el ametrallamiento está relacionado con la actividad minera de La Muriel *Mining Corporation* en su intento de explotar los yacimientos de Mandé Norte.

Mayo

Combates del Ejército y las FARC en medio de la comunidad indígena de Necorá (Quibdó). Desde entonces, el Ejército hostiga a los miembros de la comunidad.

Diciembre

La Orewa denuncia que las comunidades del río Salaquí se encuentran confinadas.

2011

Abril

La Fuerza Aérea bombardea la cuenca del río Quiparadó en la que resultan muertas 3 personas y 4 gravemente heridas.

Mayo

Las FARC ametralla una embarcación que hace el recorrido Bojayá-Quibdó en Beté matando a 3 personas e hiriendo a otra.

Agosto

Se condena a palmicultores por el caso del despojo y desplazamiento en Curbaradó y Jiguamiandó.

2012

En febrero, las organizaciones indígenas y afrodescendientes del Chocó denuncian la grave situación que viven sus

comunidades desde hace 3 años por cuenta de las inundaciones y acusan al Estado de abandono.

A comienzos de marzo, el Frente 57 de las FARC decretan el llamado ‘paro armado’ complicando aún más la situación de los habitantes del Medio Atrato y pone en riesgo la seguridad y los derechos básicos de éstos.

